

Fragmentos de la Historia Económica de Chile

Voz y Acción del Cardenal Silva Henríquez

Reinaldo Sapag Chain



**EDICIONES
COPYGRAPH**



107996

Fragmentos de la Historia Económica de Chile

Voz y Acción del Cardenal Silva Henríquez

Primera edición

Con las debidas licencias

Registro de Propiedad Intelectual N° 193.933

I.S.B.N.: 978-956-7119-48-6

Ediciones Copygraph Ltda.

Rafael Cañas 270, Providencia

Fono: 482 0200

Correo electrónico: editorialcopygraph@gmail.com

Santiago, Chile

Diseño de portada: Claudio Sapag Puelma

Impresor: Alfabetas Artes Gráficas

Fono: 364 9242

Carmen 1985

Se terminó de imprimir en agosto 2010

Índice

Introducción	11
Capítulo I LOS MODELOS DE DESARROLLO	19
Capítulo II CHILE DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN	29
Capítulo III EL FRENTE POPULAR LLEGA AL PODER.....	37
Capítulo IV EL DESPERTAR DEL DESARROLLO PROTECCIONISTA ...	45
Capítulo V EL OCASO DE LOS GOBIERNOS RADICALES Y LA IRRUPCIÓN DEL GENERAL DE LA ESPERANZA	57
Capítulo VI LA DERECHA AL PODER. RAÚL SILVA, ARZOBISPO DE SANTIAGO Y CARDENAL DE CHILE	71
Capítulo VII LA REVOLUCIÓN EN LIBERTAD	83
Capítulo VIII EL ROL SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA LATINOAMERICANA Y LA REFORMA AGRARIA EN CHILE	93
Capítulo IX LA UNIDAD POPULAR AL PODER.....	107

Capítulo X	
EL GOBIERNO MILITAR Y EL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL	119
Capítulo XI	
LA APLICACIÓN DOGMÁTICA DEL NEOLIBERALISMO ...	133
Capítulo XII	
DEL TRIUNFALISMO A LA CAÍDA	145
Capítulo XIII	
EL ALMA DE CHILE	157
Epílogo	165

“La misión de la Iglesia en medio de los conflictos que amenazan al género humano y al continente latinoamericano, frente a los atropellos contra la justicia y la libertad, frente a la injusticia institucionalizada de regímenes que se inspiran en ideologías opuestas y frente a la violencia terrorista, es inmensa y más que nunca necesaria. Para cumplir esta misión se requiere la acción de la Iglesia toda: pastores, ministros consagrados, religiosos y laicos; cada cual en su misión propia. Unos y otros, unidos a Cristo en la oración y la abnegación, se comprometerán sin odios ni violencias, hasta las últimas consecuencias, en el logro de una sociedad más justa, más libre y pacífica, anhelo de los pueblos de América Latina y fruto indispensable de la Evangelización liberadora”.

CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ,
citando el documento de Puebla,
en el año 1979.

Dedico este libro a mi querido amigo Enrique Valle Pérez, fallecido en septiembre de 2004 en dolorosas circunstancias. Él fue quien revisó por primera vez estos escritos que se guardaron en el silencio por algunos años y me propuso algunos cambios que en esta edición se han incorporado. También se lo dedico a mi amigo Humberto Vega Fernández, economista sencillo y consecuente, quien entregó su vida y acción a la promoción de la justicia y la verdad. Este libro incorpora un trabajo que hicieramos en conjunto, en la clandestinidad, de común acuerdo con el cardenal Silva, destinado a respaldar a los obispos y al propio don Raúl en sus declaraciones que fustigaban éticamente las consecuencias del modelo económico neoliberal impuesto por el régimen militar.

REINALDO SAPAG CHAIN

Agosto 2010



INTRODUCCIÓN

No es posible incursionar con objetividad en el análisis de los hechos pasados si no somos capaces de ubicarnos en el contexto en que esos hechos se produjeron.

Mi gran amistad con el cardenal Raúl Silva Henríquez nace en la Universidad Católica de Chile cuando yo era director general de la Vicerrectoría Económica, y él, Gran Canciller de ella. Corría en esos momentos el año 1971, cuando Salvador Allende era presidente de Chile y Fernando Castillo el primer rector laico de la Pontificia Universidad. A raíz de mi cargo en la PUC, fue necesario tener frecuentes encuentros con don Raúl, puesto que al estar bajo mi administración todos los inmuebles de la universidad, cualquier venta que se quisiese hacer de alguno de ellos requería necesariamente de la aprobación del arzobispo de Santiago.

Y aún más, la sesión de Consejo en que se debatiese la enajenación de algún bien raíz, debía contar con la presencia del Gran Canciller, cargo que ocupaba en aquel entonces el cardenal Silva, a quien el propio Estatuto de la Universidad le concedía el derecho a veto en estas materias. Por ello es que resultaba imprescindible que el señor Cardenal recibiese previamente la información correspondiente acerca de las propiedades que se requería enajenar, en especial como consecuencia del vasto plan de construcciones que significaba la remodelación del colegio de las Monjas Francesas, recientemente adquirido, para transformarlo en el Campus Oriente. Además, se habían iniciado las obras de construcción del Campus San Joaquín, por lo que resultaba absolutamente necesario para la universidad desprenderse de muchas propiedades prescindibles que permitieran disponer de recursos para enfrentar esas cuantiosas inversiones, por lo que la aprobación de su venta por parte del Gran Canciller

resultaba esencial. De allí que las reuniones con don Raúl se hicieron frecuentes.

Después de estos encuentros, mi relación con el señor Cardenal fue tornándose cada vez más estrecha. Empezamos a conocernos, y de vez en cuando, al principio en forma esporádica y después en forma consuetudinaria, recibía invitaciones para los almuerzos o cenas en su muy bien dispuesta mesa, gracias a los esfuerzos de la madre Socorro, quien era la encargada de la casa de Simón Bolívar, y de Teresa Nahuelcoy, su cocinera que lo acompañaría hasta el día de su traslado a la Casa de Salud Felipe Rinaldi de la congregación Salesiana, en 1995. A partir de 1983 don Raúl ya obispo emérito, se traslada a una nueva casa, especialmente adaptada para él por el Arzobispado de Santiago, ubicada también en Ñuñoa en calle Los Pescadores, asumiendo la conducción de ella su querida hermana Clementina Silva Henríquez quien también acompañaría al señor cardenal hasta su traslado a la casa de salud ya mencionada.

También comencé a participar en diversas reuniones de trabajo y por distintos temas a las que él me invitaba. Al principio todos vinculados con la Universidad Católica y posteriormente pidiendo mi opinión y mi asesoría en muchos otros temas, delicados algunos, para los cuales el señor Cardenal me honraba solicitando mi criterio. Así fue naciendo poco a poco y paso a paso una amistad sincera y un cariño mutuo que fue acrecentándose en nuestros veintiocho años de fraternidad.

Muy probablemente mi profunda amistad con el cardenal Raúl Silva Henríquez nació como consecuencia de mi profesión de ingeniero comercial, por ser católico creyente y adherente a la doctrina social de la Iglesia, y por mi carácter de profesor en temas económicos en importantes universidades, entre otras consideraciones.

Creo, sin temor a equivocarme, que mi relación inicial y posterior amistad con el señor Cardenal se produce justamente por el intercambio de opiniones en torno a materias económicas. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, nuestras conversaciones fueron abarcando temas de

muy distinta naturaleza; siempre él quería conocer mi opinión sobre la realidad económica de su patria, a la que tanto amó.

Varios expertos en la materia frecuentaron contactos con don Raúl. Me tocó participar en conversaciones junto al señor Cardenal con muchos de ellos, tales como Enrique Iglesias, Felipe Herrera, Álvaro Bardón, Sergio Molina, Hugo Ovando, Domingo Santa María, Humberto Vega, Sergio Bitar, Faruk Jadue, Gustavo Ramdohr, Jorge Awad, Roberto Fantuzzi, Juan Villarzá, Nassir Sapag, Edgardo Boeninger, Gert Rothental, José Luis Zabala Ponce, Eduardo Arriagada, Germán Correa, Santiago Rojas, Jaime Moraga, Javier Vial, Alejandro Foxley, Ricardo Ffrench-Davis y tantos otros cuyos nombres no me vienen a la memoria en este instante.

Sin lugar a duda que los temas económicos tenían gran importancia para el señor Cardenal. Para él, la justicia social y el desarrollo económico sustentable eran temas gravitantes en su pensamiento y en su acción. Él mismo tenía grandes cualidades como emprendedor, organizador, planificador y ejecutor. Muestra palpable de ello lo constituye su fecunda acción pastoral al servicio de los más desposeídos de la sociedad; siempre disponible su poder, su acción, su generosidad y su voluntad en la creación y fomento de instituciones que promovieran el desarrollo y dignificaran a la gente de su patria.

Por cierto que don Raúl, quien se había titulado de abogado en la Universidad Católica de Chile, antes de ingresar al Seminario Salesiano, nunca pretendió ser un técnico en materias económicas, no tenía competencias para ello, pero sí disponía de una notable claridad de pensamiento y sólidos principios valóricos sustentados en la doctrina social de la Iglesia, que le permitía hablar con propiedad de los problemas sociales y humanos que ocurrían en su patria, como consecuencia de las políticas económicas que se llevaban a cabo por diversos gobiernos de distinto signo político y visión económica.

Durante su prolongado ministerio como arzobispo de Santiago y cardenal, le correspondió ser testigo de políticas

económicas muy disímiles llevadas a cabo por los gobiernos democráticamente elegidos de Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossens y finalmente por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Entre los años 1961 y 1983, período en que don Raúl fue arzobispo de Santiago, se implementaron en Chile experimentos políticos y estrategias económicas de muy diferente signo ideológico, provocándose, como consecuencia de ellas cambios muy extremos en la sociedad chilena, tanto así que los economistas y estudiosos de la realidad económica nacional sostenían que Chile había sido el laboratorio más significativo que existía en el mundo en la aplicación de políticas tan distintas.

En el período 1961 a 1983, Chile tuvo el sistema de fijación de precios por parte del Estado más extremo que cualquier otro país de América del Sur. En la Dirección de Industria y Comercio de la época, DIRINCO, centenares de profesionales se dedicaban a estudiar los costos y fijar los precios de miles de productos.

Pero también en ese lapso Chile adoptó, a partir del Plan Cauas en abril de 1975, el sistema de libertad de precios y libertad económica más brutal y desconocido en el continente. En esos 22 años el país tuvo tasas de interés reales extraordinariamente altas, pocas veces vistas en la historia económica mundial, llegando a cobrarse un interés real por los préstamos (por sobre la inflación) de un 115% anual en el año 1975.

Pero también, durante el período en que don Raúl fue arzobispo de Santiago en muchas oportunidades, la tasa de inflación superó enormemente la tasa de interés cobrada, de tal forma que deber dinero resultaba un gran negocio, y ahorrar, cuando no existían sistemas de ahorro reajutable, una gran pérdida. Prácticamente en ese mismo período mil pesos se transformaron en un escudo, moneda que empezó a regir a partir del 1 de enero de 1960, y posteriormente mil escudos se transformaron en un peso en septiembre de 1975. O sea, la moneda chilena se había deteriorado un millón de veces.

A don Raúl le tocó vivir la decisión de la fijación del tipo de cambio durante la administración de Jorge Alessandri Rodríguez, cuando el dólar se mantuvo invariable durante tres años al precio de \$ 1.053 o E° 1,053 (al transformarse mil pesos en un escudo), y constatar posteriormente el fracaso de esa política, acompañada de una severa crisis económica, hecho acontecido a partir del 28 de diciembre de 1961 cuando ya era arzobispo de Santiago. Posteriormente, cuatro años antes de la entrega de la conducción arzobispal, a monseñor Juan Francisco Fresno, el gobierno de Pinochet adoptó la misma política de Alessandri y fijó el cambio nominal del dólar en 39 pesos (de los actuales) en el mes de julio de 1979. Otra vez Chile vivió el fracaso de la política de fijación por decreto del tipo de cambio y otra vez acompañada de una nueva gran crisis económica de la que se hablará más adelante. El 14 de junio de 1982 la paridad de la época de Jorge Alessandri, sucumbía. Habían transcurrido los mismos tres años de paridad, pero dos décadas después.

También le tocó servir a su Iglesia y a su pueblo en los duros y difíciles momentos que en Chile se llevó a cabo la reforma agraria, mediante el expediente de expropiar tierras no explotadas para entregárselas a quienes la trabajaban, creándose para ello sociedades y cooperativas de reforma agraria en manos de los campesinos que la trabajaban. Tuvo que enfrentar con decisión, coraje y valentía la entrega de los fundos que poseía la Iglesia de Santiago a la reforma agraria, hechos dolorosos y muy difíciles, por los que recibió graves acusaciones y descalificaciones.

También le correspondió enfrentar, en esos años, las enormes dificultades que vivió el país durante el gobierno de Salvador Allende entre los años 1970 a 1973: el caos económico, la arbitrariedad, las expropiaciones a destajo, el uso y abuso de los resquicios legales, el desabastecimiento, la exacerbación del odio de clases, las tomas ilegales, la destrucción del orden institucional, la utilización de los sindicatos y trabajadores para justificar la intervención de las empresas y tantos otros hechos de gran trascendencia política y social que provocaron enormes dolores y heridas que han sido difíciles de cicatrizar por la sociedad chilena hasta

el día de hoy, después de transcurrido tanto tiempo. Y, en el interior de la Iglesia de Santiago, la toma de la catedral y el brote de los Cristianos por el Socialismo.

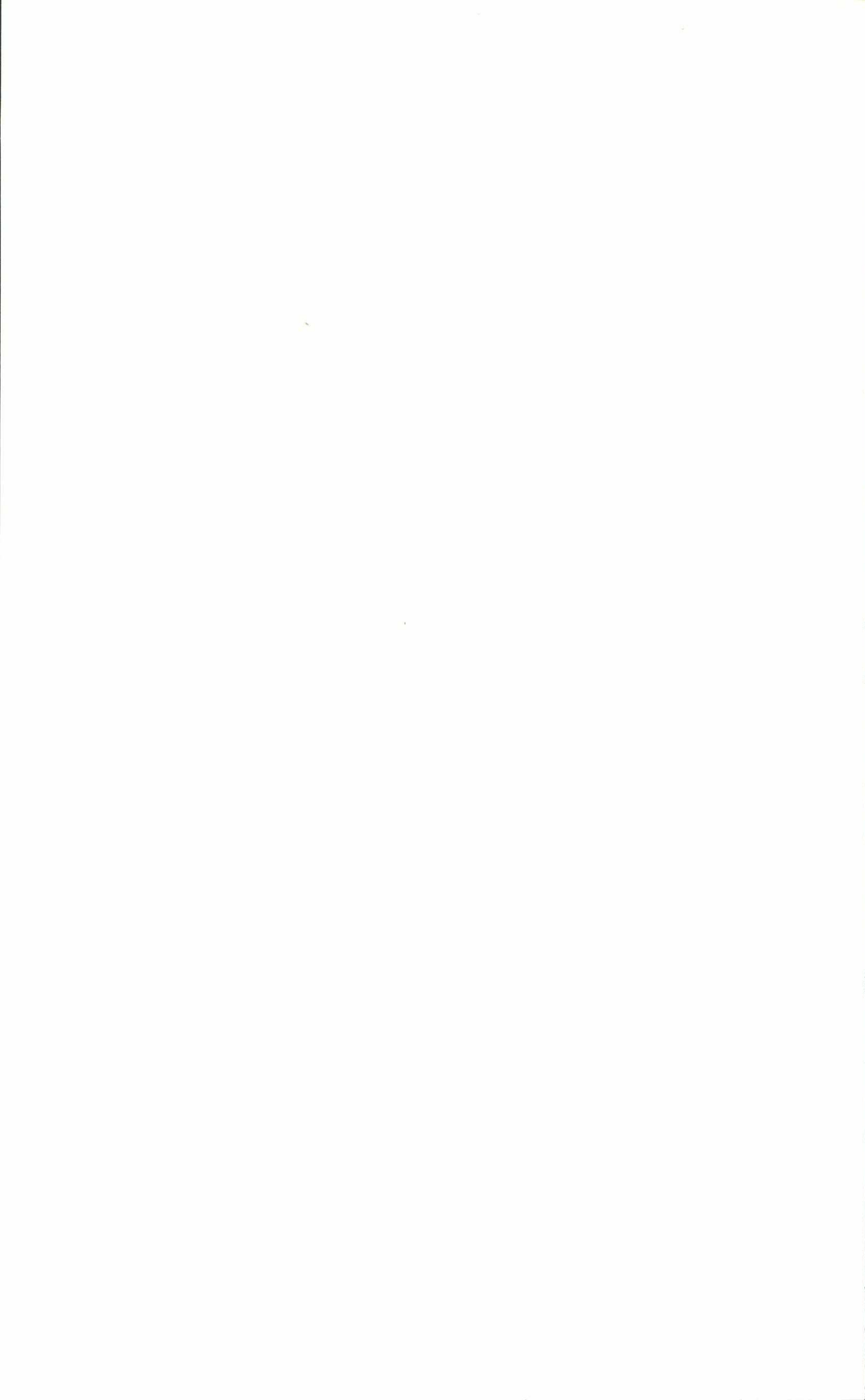
Y después, el golpe de Estado y la dictadura militar, con su secuela devastadora de arbitrariedades, corrupciones de alto vuelo, asesinatos a mansalva a los opositores políticos, persecuciones a personas inocentes solo por pensar distinto, exiliados por miles, detenidos desaparecidos que aún conmueven el alma nacional, silenciamiento de la prensa y el control absoluto de los medios de comunicación, en fin, el terror hecho realidad, promovido por un gobierno dictatorial en contra de los chilenos hermanos. Pero también, durante el régimen de Pinochet, le correspondió enfrentar el gravísimo conflicto con Argentina que tuvo a ambos países al borde de una guerra fratricida y el cambio brutal del modelo económico proteccionista por el de libre mercado, lo que generó un sufrimiento enorme al pueblo pobre de Chile, con niveles de cesantía nunca vistos desde la crisis salitrera y la Gran Depresión, hechos ocurridos antes del despegue posterior que ha caracterizado a la economía chilena a partir de 1985, puesto que a partir de 1983 el gobierno militar efectuó importantes ajustes en el modelo de desarrollo de libre mercado.

Todo esto le correspondió vivir a don Raúl desde el 24 de mayo de 1961, fecha en que asume como arzobispo de Santiago, y el 10 de junio de 1983, cuando hace entrega del mando arzobispal de Santiago a monseñor Juan Francisco Fresno.

En este libro se intentará relatar parte de la historia económica de Chile, las políticas que se llevaron a cabo, su justificación técnica e histórica, la forma en que se preparaban y evaluaban los proyectos en los distintos escenarios y sus resultados, para desembocar en la estrategia económica que se llevó a cabo durante la dictadura militar, los cambios trascendentales que se efectuaron principalmente a partir de abril de 1975 y la crisis devastadora de los años 1982 y 1983, precisamente en los momentos que se anunciaba por la Santa Sede que en junio de ese último año asumiría la arquidiócesis de Santiago monseñor Fresno.

Se dedicará un capítulo especial a la situación acontecida durante el año 1979, ocasión en la que junto con mi amigo, el destacado economista Humberto Vega, hoy fallecido, trabajamos un documento publicado en la clandestinidad, bajo el alero de la Academia de Humanismo Cristiano, que denominamos: "Ante un deber de conciencia, de fidelidad y de justicia social". Este documento fue revisado y trabajado en conjunto con don Raúl, ante la arremetida de la dictadura en orden a descalificar la competencia de los obispos para opinar en materias que, a juicio de los funcionarios del régimen, eran de carácter técnico y altamente especializado. Como lo expresó don Raúl en sus memorias: "Querían en pocas palabras, que no se pusiera el acento en los problemas sociales, sino en los resultados económicos de largo plazo".

Ante las medidas de política económica tan diversa, siempre estuvo presente con claridad y vehemencia la voz del pastor. Este libro desarrolla un análisis muy general de los modelos de desarrollo en boga a partir de la Gran Depresión, para desembocar posteriormente en una reflexión acerca de las principales políticas económicas implementadas por gobiernos de tan distinto signo como fueron el de Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet y cómo se alzó ante ella la voz valiente de la Iglesia y de su pastor, el cardenal Raúl Silva Henríquez.



CAPÍTULO I

LOS MODELOS DE DESARROLLO

Muchas veces, a mis alumnos del curso de Preparación y Evaluación de Proyectos, al relatarles la importancia del entorno en la aplicación de las técnicas que se utilizan para la toma de decisiones en materia de inversión, les explico las diferentes políticas económicas que se han desarrollado en Chile, haciendo especial énfasis en aquellas que se implementaron a raíz de la Gran Depresión que afectó tan duramente a las economías capitalistas y liberales en los años 30 y cómo ellas han repercutido en el desarrollo de los proyectos, tanto privados como públicos, que se han llevado a cabo en el país a partir de ese momento.

Según un informe de la Sociedad de las Naciones (organismo internacional que fuera reemplazado por la Organización de las Naciones Unidas después del término de la Segunda Guerra Mundial), nuestro país fue el más golpeado por la crisis internacional ya que ella coincidió con el colapso de la industria salitrera. El economista Pablo Baraona, en un estudio realizado hace algunos años, señaló que el Producto Interno Bruto cayó en un 51% en esos años trágicos de la historia económica mundial. Cualquiera que sea el signo político o ideológico imperante, siempre será necesario, en todo país, efectuar inversiones que promuevan el bienestar y el desarrollo de las personas ya sea que el modelo privilegie un Estado fuerte, con propiedad de los medios de producción o simplemente un Estado regulador en donde al sector privado le corresponde en forma gravitante la responsabilidad y la iniciativa empresarial.

Esta disyuntiva del nivel o grado de participación del Estado en el modelo de desarrollo ha estado en el centro del debate por mucho tiempo. Para entenderlo es necesario

remontarse a los grandes pensadores de la ciencia económica cuyos aportes tuvieron influencias decisivas en el desarrollo de los proyectos en el siglo pasado. Adam Smith y Karl Marx constituyeron, en su época, referentes imprescindibles en la explicación de los fenómenos económicos, y más aún, entregaron una visión cósmica de la sociedad en su conjunto que abarcaba tanto aspectos económicos, como sociales y políticos.

Ambos disponían de una explicación coherente acerca de la sociedad y la economía. Ambos daban respuestas inteligentes a las grandes preocupaciones de la humanidad, la que por el solo hecho de existir requería a diario la satisfacción de múltiples necesidades que le permitirían desarrollarse, crecer y multiplicarse. Ambos buscaban una mejor respuesta a la organización social y a las preguntas sustantivas de la ciencia económica: ¿qué producir?, ¿cuánto producir?, ¿para quién producir?, ¿cómo producir?

Adam Smith nace en Escocia en 1723 y fallece en ese mismo lugar en 1790. Karl Marx nace en Alemania en 1818 y muere en Inglaterra en 1883. No fueron contemporáneos, puesto que entre uno y otro pensador transcurren aproximadamente 100 años. Smith, en su célebre tratado titulado "La Riqueza de las Naciones", reconoce a la economía como una ciencia social donde el ser humano, la sociedad, el desarrollo y el bienestar de todos constituye la base que hace posible la adecuación de los recursos escasos frente a las necesidades múltiples que requiere el hombre y la sociedad para subsistir y desarrollarse.

Smith analizaba algunos hechos muy importantes que caracterizaron a la economía en tiempos pretéritos, especialmente durante la Edad Media, cuando los países con mayor nivel de desarrollo establecieron diversas regulaciones definidas por la autoridad política tendientes a alentar las exportaciones y restringir las importaciones en sus respectivos países. De este modo se generaron una infinidad de ordenanzas y normas que regulaban con diversos grados de severidad no tan solo cómo debía llevarse a cabo el comercio, sino que además normaban lo que cada persona o empresa debía producir, cómo debía producirlo, cuánto debía

ganar y hasta cómo se tenía que disponer de las ganancias y su utilización posterior.

Adam Smith, al observar estos hechos y concluir que ellos limitaban el desarrollo, efectúa una seria crítica a la frondosa regulación estatal que guiaba la política económica nacional e internacional de las naciones más desarrolladas a fines de la Edad Media. En su célebre tratado define a este modelo como “mercantilismo”, término que se utiliza hasta el día de hoy. En esa época se logró enriquecer a los Estados mediante la regulación, el comercio y la actividad económica, todo lo cual les generaba recursos vía las imposiciones y tributos que se debían de pagar mediante el cobro de gravámenes onerosos que iban a parar a manos de los gobiernos. La política mercantilista apuntaba al engrandecimiento del Estado mediante procedimientos regulados que permitieran principalmente incrementar las reservas de cada nación a través de la acumulación de metales preciosos, puesto que según ellos, mientras más oro y plata se lograra reunir, mayor era la prosperidad y la riqueza, tanto para la nación como para los ciudadanos.

Adam Smith critica absolutamente las tesis mercantilistas que durante siglos inspiró la legislación y las disposiciones diseñadas en forma particular por cada una de las naciones de Europa. Así, en su estudio entrega una interpretación distinta, señalando que no debía regularse la actividad económica y que, por el contrario, se debía dejar a las fuerzas soberanas del mercado, las que mediante una economía libre, individualista y competitiva, tan solo regulada por las “leyes naturales” de la oferta y la demanda, lograrían un nivel de desarrollo mucho más eficiente en manos de los individuos dejando al Estado un rol regulador y garante de reglas de juego que debían de respetarse por los agentes económicos participantes.

En la parte sustancial de su análisis, llegó a la conclusión que el mercado se autorregulaba, que había una mano invisible que actuaba en la conciencia y en las decisiones de las personas y las instituciones, y que la mejor manera en que se adecuaban las necesidades con los bienes y servicios que se ofrecían para satisfacerlas, era a través del *laissez*

faire, el dejar hacer, de tal forma que los posibles errores de cálculo o de proyecciones se autorregulaban como consecuencia de que el propio mercado y sus exigencias permitirían su readecuación.

El mercado era el lugar de encuentro entre oferentes y demandantes, los que necesariamente debían ponerse de acuerdo para que este funcionara, regulándose automáticamente. Si el precio era alto y mucha la oferta, entonces necesariamente el precio debía bajar hasta que se produjese el acuerdo. Sin acuerdo no hay mercado. Y si la producción fuera excesiva y no existiese demanda a ningún precio, entonces el producto no satisfacía los requerimientos del mercado, no se recibiría nada a cambio e incluso podía llegar al extremo de tener que pagar para desprenderse de lo inútil. Los demandantes, con su capacidad de compra, son los que interpelan a los oferentes para que se les entreguen en cantidad y calidad lo que ellos requieren para la satisfacción de sus necesidades.

Las preguntas básicas de la ciencia económica tienen, según Adam Smith, una respuesta invisible pero categórica; es el mercado quien adopta, elige, manda y decide. La oferta debe por lo tanto satisfacer a quien tiene la capacidad de adquirir, y así el mercado y las tesis sustentadas por este gran pensador fueron ganando terreno en todas las economías más desarrolladas del mundo.

Cuando nace Karl Marx, 100 años más tarde, el modelo diseñado por Smith se encontraba en pleno desarrollo en los países más poderosos del planeta, los que concentraban buena parte del comercio mundial. Karl Marx se dedica a observar esta nueva realidad y se percata que el mercado ciertamente jugaba un papel preponderante e incontrarrestable en la organización social de la época. Pero también observaba las ineficiencias de este, donde podía darse a menudo que el esfuerzo productivo no planificado ni cuantificado, en torno a los requerimientos efectivos de la demanda, producían distorsiones que hacían posible que se generasen pérdidas cuantiosas como consecuencia que los productores, al entregar al mercado más bienes de los que este requería, se producían en muchos casos desequilibrios

no deseados. Por el contrario, también podía darse que los demandantes cambiasen sus gustos y preferencias y así la demanda podía actuar presionando a una oferta que no estaba en condiciones de satisfacerla, subiendo los precios y pudiendo dejar de paso a importantes sectores demandantes insatisfechos. Por otra parte el mercado no generaba las condiciones mínimas para una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, sometiendo a grandes masas de la población a las condiciones del mercado y a merced de la especulación y el lucro desenfrenado. Capitalismo salvaje o mercado cruel según expresiones acuñadas últimamente.

Para Karl Marx el modelo de mercado, su funcionamiento y el rol que jugaba el Estado como ente regulatorio no resultaban eficientes, por lo que la sociedad debía encontrar nuevas fórmulas de adecuación entre la oferta y la demanda, distintas al *laissez faire*, que impidiesen que se produjesen las serias distorsiones que Marx observaba en el libre mercado. Entonces comenzó a fraguar, en su privilegiada inteligencia, la búsqueda de un nuevo modelo que respondiera de mejor forma a las interrogantes claves.

Su discernimiento lo llevaba a pensar que este esquema surgiría naturalmente en las economías más desarrolladas, las que evolucionarían hacia un esquema organizacional de la sociedad donde el Estado jugaría un rol fundamental, lo que permitiría evitar las ineficiencias que él observaba en el funcionamiento de un mercado sustentado en la iniciativa privada, y en donde los medios de producción pertenecían a quienes desarrollaban esas actividades productivas, produciéndose evidentes situaciones de inequidad que él observaba, abuso de poder y el sometimiento de las grandes masas de trabajadores a las exigencias del libre mercado.

Uno de sus escritos más importantes lo realiza en conjunto con su gran amigo Friedrich Engels, presentado en Londres el año 1848, en donde se establecen las bases del programa socialista conocido con el nombre de "Manifiesto comunista".

En su célebre libro "El Capital", publicado en 1867, Marx planteó las bases de sustentación de un modelo donde

los medios de producción y el capital pertenecerían al Estado, el que sería el responsable de planificar el desarrollo económico y dar una respuesta eficiente a las grandes interrogantes de la ciencia económica. El Estado se transformaba así en el gran propulsor del desarrollo y por lo tanto en el ente regulador entre la oferta y la demanda, siendo los medios de producción de su propiedad. Además, el esquema permitiría generar las condiciones para una mejor distribución del ingreso en donde la riqueza constituía un patrimonio perteneciente a toda la población a través del Estado.

La filosofía marxista del materialismo dialéctico, interpreta la evolución social basándose en la presunción que en la sociedad el factor económico, íntimamente vinculado a lo material (de allí el concepto de materialismo), informa y determina a todos los demás factores. Marx sostiene que el capitalismo es un estado transitorio y que sería reemplazado por el modelo materialista. Reconoce el dinamismo de las fuerzas sociales a lo largo de la historia, en donde el pensamiento y la acción van generando necesariamente una evolución económica, y así, proyectando esta evolución, concluye en que necesariamente se producirá el desplome del sistema capitalista y el nacimiento de una nueva sociedad más justa y más solidaria, desapareciendo así la lucha de clases tan propia del capitalismo y del libre mercado.

Sostenía Marx que en toda la sociedad las fuerzas productivas, tanto humanas como materiales, están sujetas al dominio de una determinada clase o grupo que dirige y coordina el empleo de esos recursos en la producción de bienes económicos. De esta forma la existencia del Estado se explica solo en términos del apoyo que le aporte a la clase dirigente. La estructura de la sociedad y las instituciones que el Estado genera como consecuencia de ella, están en función del tipo de producción que predomine de acuerdo a los intereses de la élite que detenta el poder, por lo que el Estado y la sociedad seguirían siendo sustancialmente los mismos. Entonces, para romper este círculo vicioso resultaba necesario un cambio de propiedad de las fuerzas productoras para que así pudiese desarrollarse la evolución social hasta llegar a una etapa superior en donde desaparecería la lucha de clases.

Muchos estimaron que el pensamiento de Karl Marx nunca se pondría en práctica. La factibilidad de transformar las poderosas empresas capitalistas privadas en empresas públicas parecía prácticamente imposible, por lo que sus postulados solo podían ser considerados absolutamente teóricos, imposibles de ser llevados al mundo real. Sus teorías de igualdad social, de pleno empleo, de gratuidad en la salud y educación y tantos otros ideales de la teoría marxista, parecían ser extraídos de un mundo irreal, tan distinto a la realidad existente en los momentos que Marx y Engels hacían público sus pensamientos.

Por cierto que Marx al escribir su teoría en 1867, la que fuera completada por Engels después de su muerte en 1880, mediante la publicación de los volúmenes 2 y 3 del "El Capital", jamás pensó en lo que ocurriría 50 años más tarde. En efecto, prácticamente al término de la Primera Guerra Mundial se produce la revolución bolchevique que derroca al zar de Rusia Nicolás II, en el año 1917.

El movimiento social y político triunfante de la guerra fratricida adopta la decisión de crear un Estado Socialista, poniendo en marcha un modelo de desarrollo sustentado por Karl Marx, y por lo tanto se procede a expropiar las tierras y los medios de producción privados, pasando todos ellos a ser propiedad estatal, y así, en un país pobre y de mucho menor nivel de desarrollo que los países capitalistas que estaban a la vanguardia de la industrialización, se instaura sorprendentemente el modelo marxista. La profecía incumplida de Marx, puesto que no fueron los países desarrollados los que evolucionarían a una organización más perfecta de la sociedad según sus postulados, sino que fue un país empobrecido y de gran desigualdad social, el que optaba por poner en marcha el modelo económico, social y político postulado por Karl Marx. Ello ocurría en el año 1917. Se había instaurado en el mundo un modelo distinto al capitalista y ahora había que observar sus resultados.

Doce años después de estos hechos se produce uno de los episodios más trascendentes ocurridos en el siglo XX. En efecto, el mundo observa con dolor, sufrimiento y consternación la Gran Depresión, la que se inicia en el sistema

capitalista en 1929, a pocos años del inicio del modelo estatista. En muy pocos años las economías del *laissez faire* empezaron a contaminarse unas con otras, produciéndose una hecatombe de grandes repercusiones económicas, sociales y políticas.

En efecto, tanto en los Estados Unidos como en los países desarrollados de Europa se produjo una gran especulación bursátil mediante la aplicación de una política crediticia de fácil acceso y sin restricciones. Los recursos no se utilizaron correctamente, originándose una drástica disminución en inversiones productivas y una inflación galopante como consecuencia de la excesiva expansión de los créditos bancarios. Este proceso fue el que gatilló la crisis que se inició en el año 1929. Más de 6.000 bancos quebraron solo en los Estados Unidos entre 1929 y 1933, demostración más que palpable del derrumbe económico que trajo tantas secuelas de quiebras, cesantía, suicidios, dolor y muerte.

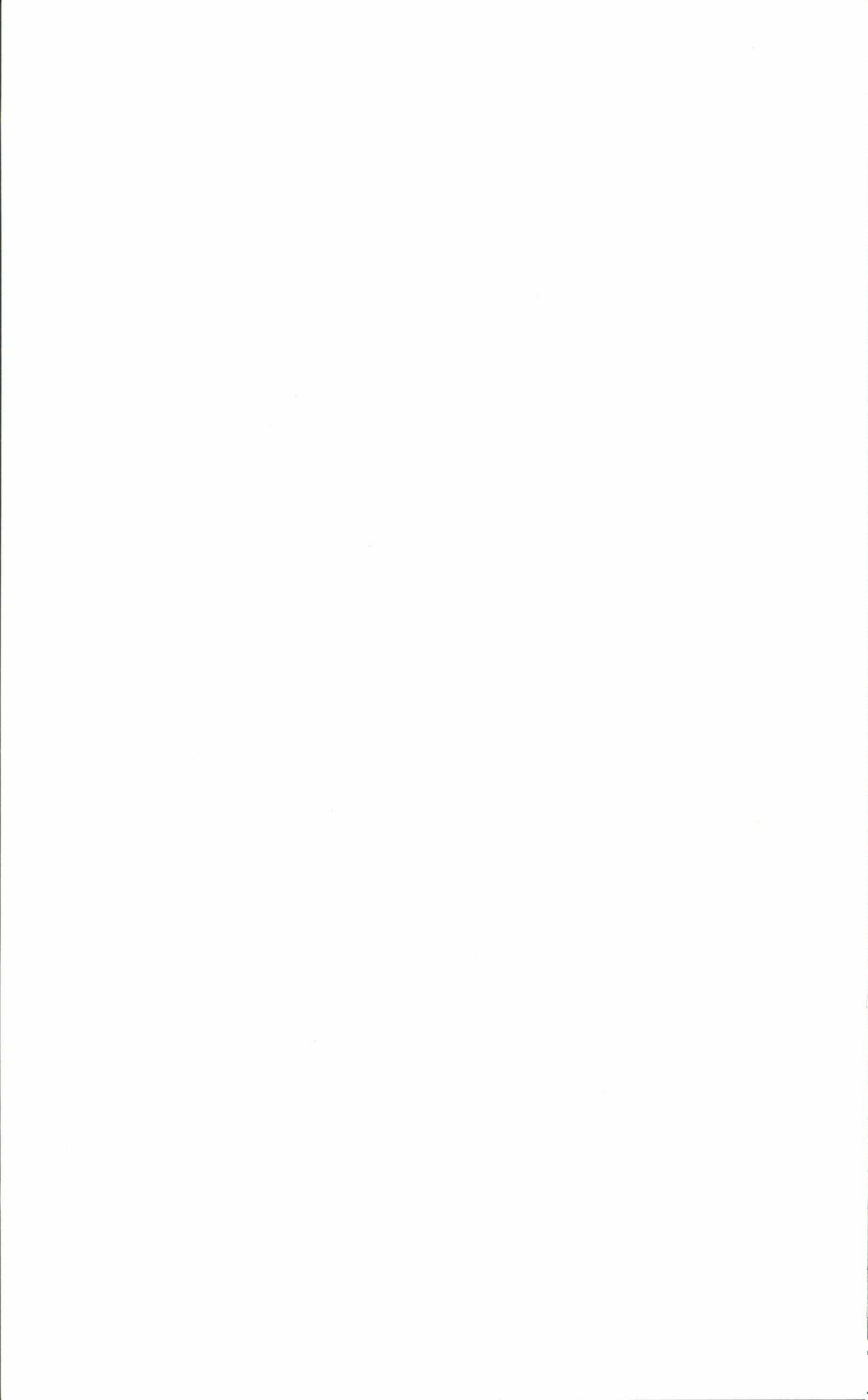
Otro tanto ocurrió en Europa. La Gran Depresión trajo como consecuencia, en los países capitalistas, una fuerte caída en la producción en todos los sectores económicos, una cesantía que alcanzó a más de un 20%, inflación, miseria y desesperanza para millones y millones de trabajadores en todo el viejo continente. La suma de la desaceleración económica en Estados Unidos y Europa significó una depresión inimaginable, razón por la cual se tiende a denominar esa época como la de la "Gran Depresión". El modelo de libre mercado parecía sucumbir ante la especulación, el desenfreno económico y el afán de lucro desmedido.

Entre las diversas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la situación, destaca, en 1932, la creación de la Corporación de Reconstrucción Financiera (*Reconstruction Finance Corporation*), la que tenía la potestad de adelantar dinero a los bancos, medida destinada a lograr la liquidez bancaria perdida, el establecimiento de una moratoria generalizada, alentando la concesión de créditos para el desarrollo de proyectos de inversión real y no meramente especulativos. Además, se dispusieron medidas legales que entregaron poderes especiales a la Reserva Federal a fin de que pudiese adoptar medidas rápidas y

efectivas en el evento que en algún banco se advirtiera problemas de liquidez.

Sin embargo, este panorama tan desolador del mundo capitalista no afectó a la economía de planificación estatal de la Unión Soviética. Por el contrario, sus resultados mostraban un desarrollo vertiginoso, prácticamente con pleno empleo y con una industrialización creciente.

Se estaban resolviendo satisfactoriamente los requerimientos de educación y salud. La crisis mundial, que desplomó a las economías del *laissez faire*, no afectó a la primera economía estatista del mundo moderno, la de Rusia, la que continuaba con cifras de desarrollo creciente, demostrando al mundo que los postulados de la teoría marxista lograban pleno éxito al ponerlos en práctica y en donde los afanes especulativos y la ambición desmedida demostrada en el mundo capitalista, causantes en gran medida del colapso de ese modelo liberal, no existía en la economía estatista.



CAPÍTULO II

CHILE DURANTE LA GRAN DEPRESIÓN

En Chile, la Gran Depresión mundial golpeó con fuerza. Dos hechos fundamentales gravitaron seriamente en las repercusiones que la crisis del mundo capitalista tuvo en nuestro país. El primero de ellos fue la enorme dependencia económica y social que teníamos con el mundo capitalista, en especial con aquellos que fueron los países más perjudicados por la recesión, los que nos suministraban bienes manufacturados, muchos de los cuales dejaron de producirse como consecuencia de la quiebra y el cierre de tantas industrias que proveían de esos bienes. Por otro lado, buena parte de la flota mercante mundial se paralizó, como consecuencia del quiebre que sufrió el comercio internacional.

El segundo hecho que gravitó negativamente en Chile lo constituyó el descubrimiento del salitre sintético por los alemanes, lo que puso en jaque a la industria salitrera nacional, la que tuvo necesariamente que paralizar sus actividades, produciéndose una vasta emigración de miles de trabajadores cesantes y sus familias, quienes se vieron obligados a dejar sus casas, su entorno, su vida y sus esperanzas en el Norte Grande chileno, para caminar por el desierto inhóspito y llegar a las grandes ciudades del sur demandando trabajo y los bienes necesarios e imprescindibles para subsistir, requerimientos que el país no estaba en condiciones de resolver con la urgencia que se necesitaba.

Un informe preparado por el organismo internacional "La Sociedad de Naciones" de la época (organismo que dejó de funcionar con motivo de la Segunda Guerra Mundial, siendo reemplazado al término de esta por la Organización de las Naciones Unidas), señaló que la nación más afectada en todo el mundo como consecuencia de la Gran Depresión de los años treinta había sido Chile.

Las cifras que demuestran la profundidad de la crisis son elocuentes: el valor de las exportaciones cayó a la décima parte en un período de cuatro años, ciertamente influidas por la prácticamente nula demanda internacional del salitre. Por cierto que lo anterior trajo aparejada la generación de una desocupación masiva y la imposibilidad de adquirir productos importados que el país requería y adquiriría precisamente con las divisas que le proporcionaba la venta del salitre, en momentos en que el desarrollo industrial de Chile prácticamente no existía.

El destacado economista don Sergio Molina Silva, en su libro "El Proceso de Cambio en Chile", publicado en 1972, al referirse a estos hechos, expresa: "La depresión mundial de los años 1929-30 produjo la casi paralización de la gran industria exportadora de salitre, una drástica reducción de la capacidad para importar, así como de los ingresos y gastos públicos, y una cesantía generalizada en el país, lo que conmovió en sus cimientos toda las actividades e instituciones nacionales. La magnitud del golpe sufrido por la economía chilena queda bien demostrada al recordar un estudio de la Sociedad de Naciones de la época que señaló a Chile como el país más afectado por la crisis, tanto en el volumen como en el precio de sus exportaciones".

Si volvemos nuestra mirada al desarrollo de Chile a principios del siglo pasado, podemos apreciar una nación que privilegiaba su esfuerzo político y económico en unificar el país mediante la construcción de importantes proyectos de desarrollo ferroviario. Se encontraba en plena implementación el ferrocarril trasandino, haciendo posible la conexión ferroviaria bioceánica del Atlántico con el Pacífico, uniendo Buenos Aires con Santiago y Valparaíso. Se iniciaban los megaproyectos para la extracción del mineral cuprífero en Chuquicamata por la Anaconda Copper Company y en El Teniente por la Braden Copper Company. Se construía el puerto de San Antonio, precisamente para permitir el embarque del cobre que se producía en Rancagua, conjuntamente con la construcción de la vía ferroviaria desde esa ciudad hasta el mismo puerto.

El país, antes de la Gran Depresión y la crisis salitrera, se desarrollaba con ímpetu y gran capacidad emprendedora. Se disponía de la riqueza salitrera, ahora sin posibilidad efectiva de conflictos internacionales después del triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, lo que significó la anexión, convenida con Perú y Bolivia, de los territorios que poseían la riqueza salitrera, motivo principal del conflicto.

La industria salitrera fue la que permitió disponer al país de cuantiosos ingresos fiscales constituyéndose en la principal fuente de recepción de recursos mediante el cobro de derechos que se efectuaban tanto a las exportaciones como a las importaciones. Por lo tanto, en la medida que el comercio internacional funcionase eficazmente mediante el expediente de la venta del salitre y la importación de bienes industriales, no solo los privados que incursionaban en estas actividades lograban un gran éxito económico, sino que también el gobierno, como consecuencia de los derechos aduaneros con que se gravaba el comercio exterior.

Sin embargo, el modelo de desarrollo que se estaba llevando a cabo en Chile, no era compartido por todos. Existía una minoría que abogaba por un sistema que debía privilegiar la generación de empleo productivo, mediante el desarrollo de proyectos con un cierto nivel de industrialización, a fin de lograr sustituir nuestra gran dependencia a bienes que debían ser importados. Este grupo sostenía que aun cuando no se lograsen economías de escala y niveles productivos eficientes, debido a la escasa cantidad de habitantes, se debía incursionar en un proceso de desarrollo "hacia adentro", creando un marco legal, político y económico que permitiese defender la producción industrial nacional, mediante regulaciones que debían nacer de la acción gubernamental.

Por otro lado, había una mayoría que argumentaba que la riqueza salitrera, y ahora la nueva riqueza que se estaba obteniendo como consecuencia de la explotación del cobre, aunque su extracción estuviera en manos extranjeras, ello nos permitiría financiar con creces todos los requerimientos de productos manufacturados que se necesitaban en el país. Señalaban que no disponíamos de un mercado

masivamente desarrollado que nos permitiese elaborar productos a bajo costo, por lo que se producirían deseconomías de escala y por lo tanto precios más altos a los que se podían obtener mediante la adquisición directa de esos bienes en el resto del mundo. Argumentaban que no disponíamos de los conocimientos técnicos para un desarrollo industrial, que los mecanismos regulatorios restrictivos a las importaciones atentaban contra el libre mercado y que defender con barreras arancelarias la producción interna, constituía un gravamen que al fin de cuentas ampararía la ineficiencia, obligando a los chilenos a la adquisición de productos de menor calidad y a mayor precio.

Todos los indicadores que se han podido obtener acerca de lo que estaba ocurriendo en Chile previo a la Gran Depresión, permiten señalar que la economía se caracterizó por su estabilidad y también por su prosperidad. Entre los años 1926 y 1929 el producto agregado creció en un 13.3 por ciento promedio. En todos esos años el país mostró superávits comerciales que le permitía financiar sin dificultades el flujo de importaciones de bienes que no se producían en el país, en momentos que se observaba un deterioro en los términos de intercambio. Lo anterior permitió al país, año tras año, lograr un persistente crecimiento de los activos internacionales. Sin embargo, la deuda externa también había crecido significativamente en el período previo a la Gran Depresión, como consecuencia del vasto plan de obras públicas que estaba desarrollando el gobierno en infraestructura vial y ferroviaria, como también en urbanización, construcción de escuelas, hospitales y una amplia gama de obras que se financiaban con fondos provenientes del Estado. La forma de pagar la deuda externa chilena de esa época se sustentaba en los recursos que se obtenían como consecuencia de la gran apertura comercial que el país mostraba en el período previo a la Gran Depresión.

Esta dependencia de la economía chilena, vinculada principalmente a la producción y venta del salitre, la hacía altamente vulnerable, ya sea por la fluctuación de precios, como por otros factores que podían complicar severamente la capacidad de pago de la deuda y así seguir efectuando las

importaciones de bienes industriales que el país requería imperiosamente.

Sin embargo, la disensión acerca de las razones que motivaban a uno u otro sector, chocaban con una realidad nacional angustiada y de hondas repercusiones sociales. En efecto, la Gran Depresión de los años 30 afectó de manera tan grave a la sociedad chilena que se produjo un ambiente de convulsión social y político en todos los sectores sociales. Aquellos que sostenían, en un principio minoritariamente, que el país debía tener un desarrollo "hacia adentro" empezaron a ganar terreno en el ambiente nacional.

De esta forma los argumentos de algunos en orden a que teníamos que disponer de una base industrial manufacturera sólida, que debíamos concebir al Estado como un ente que debía jugar un rol preponderante en el desarrollo económico, que era necesario diseñar políticas públicas proteccionistas que hiciesen posible la creación de empresas productoras de bienes y servicios, que era necesario sustituir importaciones por producción nacional, que todo ello generaría empleo y nos permitiría ahorrar divisas, las que se requerirían para la adquisición de nuevas tecnologías productivas que además serían útiles para la importación de los bienes que el país no estaba en condiciones de producir, recibían el apoyo de las grandes mayorías nacionales.

Tres hechos fueron los que a mi juicio influyeron notablemente en el cambio de la opinión pública de los chilenos acerca de que solo el modelo capitalista de libre mercado era capaz de resolver de mejor forma la adecuación entre la oferta y la demanda. El primero de ellos fue precisamente la gravedad de la crisis que vivía el mundo capitalista de libre mercado con su secuela desgarradora de miseria, hambre y desesperanza. El segundo hecho lo constituía el modelo marxista puesto en práctica en la Unión Soviética, con resultados tan espectaculares y que frente a una crisis mundial de tanta gravedad a ellos no les afectó mayormente, por lo que no había que mirar con miedo o angustia a un Estado Socialista protector, garante del bien común y del bienestar social. El tercer hecho lo constituyeron los informes económicos internacionales, respaldados por los organismos

técnicos pertinentes, los que señalaban que necesariamente los países subdesarrollados como Chile debían industrializarse y crear las bases de un modelo de desarrollo propio que beneficiara la producción interna de bienes y servicios, sustituyera importaciones, generara empleos y provocaran ahorro de divisas.

Por lo demás, la llegada de Jorge Yarur con su industria "Algodones Yarur S.A.", quien había traído capitales y tecnología al país, construyendo un gran complejo industrial, el cual se había desarrollado con inusual éxito, estaba demostrando que se generaba empleo, se impulsaba el desarrollo económico, se ahorraban divisas, se educaba y capacitaba a su personal, entre otros aspectos positivos. Todo ello con el aval del Estado, quien había entregado a esa industria protecciones y franquicias tributarias que le permitieron sortear con éxito la crisis mundial.

Por cierto que la magnitud de la crisis económica, que impactó tan negativamente a Chile, influyó notablemente en que el país se viera convulsionado por una serie de conflictos políticos y sociales. Cuando corría el año 1924, el país, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, mostraba los inicios de una crisis que se iría agudizando con el pasar del tiempo. En efecto, el presidente Alessandri tuvo que enfrentar una gran tragedia ocurrida en la oficina salitrera de San Gregorio, que costó la vida a un centenar de mineros que reclamaban el pago de sus desahucios cuando fueron despedidos; los gabinetes ministeriales, se sucedían unos tras otros; asimismo comenzó a advertirse una crisis en el área financiera y fiscal con claros síntomas de deterioros crecientes, conjuntamente con una gran efervescencia política, agudizada por las posturas de los partidos políticos, lo que llevó al presidente Alessandri a presentar su renuncia y exiliarse.

Como consecuencia de lo anterior asume el control del país, un jueves 11 de septiembre de 1924, una Junta de Gobierno compuesta por dos generales y un almirante, la cual decide disolver el Congreso Nacional. En forma paralela se había constituido una Junta Militar, la cual dio el pase para esa disolución. Sin embargo, muy prontamente surgi-

rían graves dificultades en las relaciones entre la Junta de Gobierno y la Junta Militar. A los cuatro meses la Junta Militar es reemplazada por una nueva junta. Posteriormente, y mediante la directa participación del comandante Carlos Ibáñez del Campo, se decide el retorno de Arturo Alessandri y la aprobación de la Constitución Política de 1925. Más tarde se produce la elección de Emiliano Figueroa como Presidente de la República en 1926.

Sin embargo, la convulsión política no amainaba, y así, en abril de 1927, el ahora coronel Carlos Ibáñez del Campo, mediante un golpe de Estado, asume la primera magistratura. Su gestión, no exenta de graves conflictos sociales y políticos, culmina con su derrocamiento y con el nombramiento de Juan Esteban Montero en calidad de vicepresidente. Esto ocurrió en julio de 1931. La Gran Depresión y la crisis a que hemos hecho mención, estaba provocando dificultades inimaginables en toda la estructura social y política de Chile.

En octubre de ese año el país enfrenta en las urnas la elección de presidente, siendo elegido el propio Montero. Todos estos cambios que mostraban a un país convulsionado por sucesivas crisis, fue aprovechado por los partidos marxistas, los que ganaban terreno en la base popular, planteando fórmulas económicas que apuntaban a que los medios de producción pasaran a ser controlados por el Estado. La oposición a Montero llevaba ese signo político; así que no fue una sorpresa que los sectores socialistas mediante el apoyo de la Aviación de la base aérea "El Bosque" dieran un golpe militar en junio de 1932, derrocando a Juan Esteban Montero y asumiendo el mando de la nación el coronel de la fuerza aérea Marmaduke Grove, que proclama "el Gobierno Socialista de Chile".

La crisis no menguaba, y Grove, a los pocos días, fue reemplazado por una Junta de Gobierno en ese mismo mes de junio, para luego ser reemplazada por otra junta y así sucesivamente por otras dos juntas, hasta que en octubre de ese convulsionado año de 1932 se efectúan elecciones presidenciales que le dio el triunfo nuevamente a Arturo Alessandri Palma.

Toda esta efervescencia política se explica por los graves problemas económicos y sociales a los que se vio enfrentado el país. La Gran Depresión había causado estragos terribles con una caída del producto nacional en más de 50%, y niveles de cesantía superior al 20%. Todos los indicadores demostraban la grave crisis que vivió el país en esa época de gran convulsión. Este era el escenario que marcaba a Chile en los momentos de la Gran Depresión.

CAPÍTULO III

EL FRENTE POPULAR LLEGA AL PODER

La década de los treinta fue sin lugar a duda una época dramática para Chile y su desarrollo económico, social y político. El panorama económico, francamente desalentador hasta 1933, empezó a revivir con Arturo Alessandri pero en forma muy modesta inicialmente y vigorosa después. En efecto, al asumir Alessandri su segundo período, las exportaciones habían disminuido de 2.293,7 millones de pesos oro en 1929 a 282,3 millones a 1932; por su parte las importaciones que alcanzaron a 1.617,6 millones en 1939 se desplomaron a 181,6 millones en 1932.

A partir de ese momento el presidencialismo autoritario de Alessandri empezó a lograr cifras alentadoras, tanto en las exportaciones como en las importaciones, como consecuencia de la aplicación de las tesis en boga en esos momentos, en orden a sustituir importaciones, mediante el fortalecimiento de la industria nacional, utilizando para ello medidas proteccionistas por parte del Estado destinadas a generar empleo y al mismo tiempo ahorrar los dólares que el país necesitaba con urgencia, principalmente para hacer frente a la abultada deuda externa que habían contraído gobiernos anteriores en tiempos de bonanza, dineros que se habían utilizado principalmente para el desarrollo de los planes de obras públicas llevadas a cabo por esos gobiernos.

Por otra parte los bancos, tan afectados por la crisis financiera internacional, que dieron origen a los graves problemas financieros que derivaron en la Gran Depresión, no estaban en condiciones de renovar los créditos otorgados a Chile, por lo que el gobierno se vio en la obligación de suspender los pagos externos, a la vez que se incrementaron los impuestos a la importaciones para una gran canti-

dad de productos, se devaluó el peso utilizando los pocos dólares que se disponían para el financiamiento de las actividades fundamentales del país. A Alessandri junto a su ministro de Hacienda Gustavo Ross les correspondió llevar a cabo el inicio de un cambio muy significativo en la sociedad chilena, transformando al Estado como un agente activo del desarrollo económico y social.

A partir de 1933 el país dio inicio a una recuperación económica importante. En ese año se logró eliminar el déficit fiscal, se procedió a disminuir la tasa de interés en dos puntos porcentuales, con lo que, acompañado de diversas políticas proteccionistas, se logró aumentar la producción industrial en un 18%, la construcción mostró un aumento del 31% y así todos los indicadores más importantes del desarrollo económico fueron claramente alentadores, con el consecuente incremento del nivel de empleo. En el país se acentuaba el convencimiento que el desarrollo "hacia adentro" constituía la fórmula ideal para superar la grave crisis que tan duramente había azotado a la nación.

El gobierno asumía un rol proactivo tendiente a otorgar exenciones tributarias y arancelarias para fomentar un desarrollo cuyos resultados estaban a la vista. La expansión del gasto público, la utilización de los recursos previsionales en el desarrollo de un vasto plan de obras públicas, las medidas de política económica que apuntaban a proteger la industria nacional mediante el mecanismo de cuotas de importación y una política cambiaria destinada a ese objetivo, estaban dando resultados más que satisfactorios.

El gobierno adoptaba con decisión medidas proteccionistas encaminadas a limitar las importaciones y favorecer la industrialización interna. La industria textil que se había instalado en el país antes de la crisis y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones incrementaron en forma importante sus inversiones en el segundo gobierno de Alessandri Palma, alentados por las medidas de protección al desarrollo interno que se estaban adoptando con tanto éxito.

Estos resultados generaron las cifras que se indican en el cuadro siguiente para el período previo al Frente Popular en los sectores de la construcción, minería y la industria:

Año	Construcción	Minería	Industria
1932	78.7	29.5	103.1
1933	103.3	36.8	113.6
1934	184.4	59.9	123.8
1935	197.5	68.6	142.6
1936	170.5	70.0	148.9
1937	204.9	96.4	153.1

Fuente: Cuentas nacionales de Chile. Año 1928 = 100.

A medida que fue pasando el tiempo, las políticas adoptadas por el ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa María, estaban dando resultados más que satisfactorios, mostrando el país un crecimiento notable en el segundo mandato de Alessandri, quien recibió, a los inicios de su gobierno, el apoyo de radicales y liberales demócratas. Sin embargo, en 1934 los primeros se alejaron del gobierno, optando Alessandri por aglutinar al Partido Conservador que se declaraba confesional y vinculado a la Iglesia Católica.

No obstante, a pesar de los evidentes progresos, la clase trabajadora y los partidos de izquierda buscaban transformaciones más profundas y una mayor participación del Estado en la economía nacional.

En mayo de 1936 se funda la coalición denominada Frente Popular, integrada por los partidos Radical, Comunista, Socialista, Democrático y Radical Socialista. Además, se integró al Frente Popular la poderosa Confederación de Trabajadores de Chile.

Al momento que esto ocurría en Chile, Alemania era gobernada por el fascismo de Adolfo Hitler; Rusia seguía con su nivel ascendente de desarrollo y prosperidad. Por otra parte, los países más desarrollados del planeta estaban demostrando resultados vigorosos después de la Gran Depresión.

Por cierto que la profunda crisis que afectó a la mayor parte del mundo desarrollado de aquel tiempo y con tan funestas consecuencias para los países subdesarrollados alentó el análisis de las causas que explicasen tan dramáticos resultados.

En efecto, la gran crisis permitió conocer los postulados de un economista excepcional: *John Maynard Keynes*, a quien le tocó vivir en plenitud la Gran Depresión. Impactado por las funestas consecuencias que la crisis provocó en los países más desarrollados del orbe, intenta poner toda su gran inteligencia en la búsqueda de explicaciones del porqué de ella. Así, en 1937 publica su conocido ensayo denominado "Teoría general de la ocupación, el ingreso y el dinero". En sus escritos establece la necesidad de una participación importante del Estado en la definición de políticas económicas que le permitiesen regular las ineficiencias que del libre mercado, sustentado hasta entonces en las teorías liberales de Adam Smith, habían quedado en evidencia en la crisis.

Así, muchos de los instrumentos de política económica que se utilizan hasta el día de hoy en muchos países, obedecen a los postulados de Keynes, quien incorpora en su análisis económico los conceptos de gasto agregado, demanda y oferta de dinero y demanda agregada. Su aporte al análisis de los ciclos y fluctuaciones económicas sigue teniendo aplicación hasta el día de hoy. A pesar que Lord Keynes fue un liberal clásico, defendió con sólidos argumentos la legítima intervención del gobierno en el manejo de ella.

Políticos y técnicos de distintas corrientes de pensamiento se convierten en "keynesianos", cuando en Chile recién hacía su aparición la primera Facultad de Economía del país, bajo el alero de la Universidad de Chile en el año 1935.

Socialistas, marxistas, radicales y comunistas y, en fin, todos aquellos que de alguna manera u otra deseaban una intervención gubernamental importante en la economía, se declaraban además como keynesianos, afirmándose en el prestigio alcanzado por Lord Keynes con su pensamiento intervencionista del Estado dentro de una economía de libre mercado.

El Partido Radical profundiza, a partir de 1934, su vinculación con los comunistas, socialistas y los trabajadores organizados. El origen del Frente Popular está directamente influenciado por las corrientes ideológicas que impe-

raban en Europa en esos momentos, cuando la expansión de las ideas del nacionalsocialismo, de Alemania, aproximó a demócratas y marxistas.

Resulta muy importante señalar que en esos años convulsionados, Chile tuvo el privilegio de contar con una figura notable. Se trata de Pedro Aguirre Cerda, quien pertenecía al Partido Radical, fundado en Chile el año 1888. Don Pedro era profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Desde su cátedra en la Escuela de Derecho y mediante su arraigado pensamiento humanista laico, observaba con preocupación la grave situación que la depresión mundial causaba en la economía nacional. Tenía el convencimiento que era necesario generar una gran corriente de promoción social para el pueblo de Chile a través de la educación. En el plano universitario sustentaba la necesidad de crear en la Universidad de Chile una Facultad de Economía, tendiente a estudiar, analizar y entregar fórmulas técnicas para la promoción del desarrollo económico nacional.

Pedro Aguirre Cerda tenía el convencimiento que el modelo de desarrollo para un país subdesarrollado como Chile requería de una fuerte participación del Estado. Compartía las tesis de los organismos internacionales que urgían a los países productores de materias primas a industrializarse, fomentando a través de políticas públicas las medidas de estrategia económica que hiciesen posible un desarrollo hacia adentro, con claras medidas proteccionistas, las que debían ser reguladas por el Estado.

No le fue fácil a Aguirre Cerda lograr en el Consejo Universitario la aprobación para la creación de esta nueva unidad académica, puesto que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se oponía tenazmente a ello. Sin embargo, el 11 de enero de 1935 el Decreto Supremo N° 39 aprobaba la creación de la Facultad de Comercio y Economía Industrial. Posteriormente, mediante el Decreto Universitario N° 280 del 25 de mayo de 1935, la Universidad de Chile nombra como decano interino a don Pedro Aguirre Cerda.

Con posterioridad a estos hechos, la facultad ha cambiado dos veces su nombre, denominándose primeramente

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y actualmente Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, siendo esta una de las primeras facultades de Economía de América Latina, la que muy prontamente logró un nivel de prestigio nacional e internacional que se mantiene hasta el día de hoy, destacándose como uno de los centros de estudios superiores de economía más importantes de habla hispana.

La gran crisis mundial iniciada en el año 1929, el descubrimiento del salitre sintético y la pobreza generalizada que estos hechos generaron, sumado a la crisis política en que estaba sumido el país, y por otra parte el éxito que mostraba el crecimiento de Rusia, a pesar de la crisis, alentaba la formación y la divulgación de organizaciones políticas que respaldaban un modelo de desarrollo de planificación central. Los partidos Comunista y Socialista recibían cada vez mayor respaldo popular. El Partido Radical, al que pertenecía Pedro Aguirre Cerda, también ganaba adeptos en forma significativa, en tiempos en que la mujer aún no tenía derecho a voto en las elecciones presidenciales. Solo podían hacerlo en las municipales.

Los partidos tradicionales de derecha y los que doctrinalmente habían sido partidarios y defensores a ultranza del libre mercado y la defensa del derecho a la propiedad, se vieron influenciados por la fuerza de un movimiento social y político que clamaba por un cambio importante en Chile.

Los partidos de derecha de la época, observaban con temor la posibilidad de que en Chile las propuestas marxistas tuvieran éxito, por lo que estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera de su parte para impedir su acceso al poder. Sin embargo, y a pesar del cohecho, herramienta permanentemente utilizada por la derecha para mantener sus privilegios¹, Chile iniciaba una nueva etapa en su histo-

¹ En esa época resultaba muy fácil comprar el voto ya que la papeleta respectiva era impresa por los partidos políticos. No existía el voto impreso y numerado del Registro Electoral. Así al cohechado se le registraba para cerciorarse que no llevaba otra papeleta y se le acompañaba hasta la mesa de votación respectiva. A la salida del recinto el acompañante procedía a cancelar el precio convenido por el voto.

ria institucional, la que le dio estabilidad política y un cierto nivel de desarrollo, a pesar que el mundo, en esa misma fecha, se encontraba al borde de un nuevo conflicto bélico: la Segunda Guerra Mundial, que convulsionó a todo el planeta con su devastadora secuela de horror, muerte y el doloroso holocausto de los judíos diseminados en Europa.

El programa del Frente Popular establecía como punto fundamental la “planificación de la economía nacional en forma de incrementar la producción minera, industrial y agrícola, regulándola y procediendo a una distribución más equitativa y más justa”. También se incluía la necesidad de “llevar a cabo una reforma agraria, legislar sobre las empresas imperialistas con el propósito fundamental de defender el patrimonio nacional y los intereses del Estado” (*Citas textuales extraídas del programa de gobierno*).

La sola observación del plan de gobierno del Frente Popular demostraba sus claros afanes estatistas y proteccionistas.

A pesar de los éxitos del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma y la destacada labor que cumplió su ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa María, quien fuera el candidato de la derecha en contra de Aguirre Cerda, el movimiento social y los sindicatos habían logrado afianzarse en la voluntad popular del chileno, y así el Frente Popular obtiene un estrecho triunfo con un 50.5% de las preferencias, y el candidato de la derecha un 49.5%. Se instalaba en Chile un gobierno de coalición presidido por el Partido Radical como partido dominante de la política chilena por 14 años.

Cuando esto ocurría, don Raúl tenía 31 años de edad. Recién se había ordenado sacerdote salesiano en Italia, el 3 de julio de 1938, en la ciudad de Turín, desde donde retornó por barco a Chile en diciembre de ese mismo año para incorporarse, en marzo de 1939, como profesor en el Teologado Salesiano de La Cisterna. Mientras él viajaba por el Atlántico, Pedro Aguirre Cerda asumía el 24 de diciembre, de ese mismo año, la presidencia de Chile en representación del Frente Popular. Estos hechos tendrían, posteriormente, repercusiones políticas, religiosas, sociales y económicas

que influirían notablemente en su acción pastoral. Como se señala en la Introducción de este libro, no es posible incursionar con objetividad en el análisis de los hechos pasados si no somos capaces de ubicarnos en el contexto en que esos hechos se produjeron.

CAPÍTULO IV

EL DESPERTAR DEL DESARROLLO PROTECCIONISTA

Pedro Aguirre Cerda intentó cumplir a cabalidad con lo prometido en su programa de gobierno. Logró mantener una estabilidad política y económica que el país ansiaba después de la convulsionada época vivida entre los años 1929 y 1938. A pesar del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el país logró niveles aceptables de desarrollo.

Sin embargo, el hecho más trascendente desde el punto de vista económico, lo constituyó la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, organismo destinado a promover el desarrollo industrial manufacturero, creando las condiciones legales y de política económica que hicieran posible el ansiado desarrollo “hacia adentro”, sustituyendo importaciones, ahorrando divisas, generando empleo, posibilitando la capacitación a trabajadores chilenos y otorgando ayuda del Estado a proyectos que fomentaran la manufactura en Chile de aquellos bienes que antes se importaban.

La CORFO se convirtió rápidamente en el motor del desarrollo económico chileno, transformándose, con el transcurrir del tiempo, en el instrumento que utilizó el gobierno para aplicar su política económica destinada a lograr un desarrollo vigoroso, el que poco a poco fue dejando en el pasado los sufrimientos desgarradores que vivieron muchos chilenos, como consecuencia de la crisis de las salitreras y la Gran Depresión.

El año 1939 fue un año muy importante para la sociedad chilena en su conjunto, puesto que el gobierno de Aguirre Cerda realizó un esfuerzo organizado y consciente en la búsqueda de un modelo de desarrollo dinámico, poniendo como eje la industrialización del país, cambiando de esta

forma la estructura económica y haciendo posible la incorporación de los sectores medios y populares a los beneficios que el nuevo modelo había comenzado a generar.

A mi juicio, los factores que más influyeron en la creación de la Corporación de Fomento de la Producción en el gobierno de Aguirre Cerda, lo constituyó la necesidad de dotar al país de un organismo estatal destinado a promover el desarrollo económico, la urgencia de efectuar un vasto plan de reconstrucción por parte del gobierno como consecuencia del violento sismo que azotó al país en enero de 1939, con epicentro en la ciudad de Chillán, y más de 30.000 muertos que conmovieron el alma nacional, y finalmente, la necesidad de pertrechar al Estado de un organismo con capacidad de gestión, que permitiese enfrentar con eficacia los continuos vaivenes de la economía mundial, de tan nefastos resultados para el país como consecuencia de la gravitante dependencia externa que había caracterizado a la economía chilena hasta ese entonces.

Con la creación de CORFO se abrieron en el país perspectivas insospechadas. Los temores de algunos se veían claramente superados por los hechos que empezaron a demostrar a la vista de todo el país que el proceso de desarrollo “hacia adentro” generaba resultados auspiciosos. Contribuyeron al éxito de esta política las corrientes migratorias que llegaron desde Europa, huyendo del posible y seguro conflicto bélico que azotaría a la humanidad entre los años 1939 y 1945. Los inmigrantes europeos trajeron el conocimiento tecnológico, la capacidad de emprender y las ansias de surgir y progresar en Chile.

La fórmula propuesta por el Frente Popular era en esos momentos la única alternativa posible para recuperar los niveles de normalidad económica –cuando Chile ya no disponía de los ingresos que generaba el salitre–, lo constituía la intensificación del proceso de industrialización, mediante el expediente de la sustitución de importaciones. El modelo institucionalizado durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y los siguientes, permitió alcanzar tasas de crecimiento industrial bastante satisfactorias del orden del 8 por ciento al año entre 1940 y 1950.

Al mismo tiempo que se intensificaba el desarrollo industrial mediante el apoyo de las políticas que se centralizaban a través de la Corporación de Fomento de la Producción, el gobierno de Aguirre Cerda y el de sus sucesores también pertenecientes al Partido Radical, con el apoyo inicial de los partidos Comunista y Socialista, hasta el gobierno de Gabriel González Videla, entre 1946 y 1952, se preocuparon de llevar a cabo un vasto proceso de urbanización y construcciones que permitió generar una gran cantidad de empleos en las zonas urbanas del centro del país, precisamente en las ciudades que habían recibido a los miles de mineros de la industria del salitre, los que obligatoriamente tuvieron que abandonar sus oficinas al descubrirse el salitre artificial, el que rápidamente copó el mercado de los fertilizantes en todo el mundo. Paralelamente con lo anterior se estaba logrando el mejoramiento de los niveles de vida y de consumo de las grandes masas asalariadas y también de los sectores medios de la población, los cuales empezaron a tener una influencia cada día más acentuada en la sociedad chilena.

Las ideas de proyectos en Chile empezaron abarcar una gran gama de actividades, las que se sustentaban ahora en la sustitución de importaciones y en el proteccionismo industrial con que el Estado chileno alentaba a los privados que incursionaban en el desarrollo manufacturero. Conjuntamente con lo anterior el propio Estado definió áreas de actividad económica, las que solo podían ser llevadas a cabo por empresas públicas. Así, los proyectos vinculados a las comunicaciones, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, caminos, obras de regadío, energía, embalses, correos, agua potable y muchas otras actividades solo podían ser llevadas a cabo por el Estado. Para lograr lo anterior se comenzó a adquirir a los inversionistas privados, chilenos y extranjeros, las empresas que estaban desarrollando sus negocios en las áreas ahora entregadas exclusivamente al monopolio estatal. Paralelamente con lo mencionado se multiplicaban las iniciativas destinadas a dotar al Estado de un poder económico cada vez más importante, mediante la inversión pública, la que incursionaba de manera creciente en actividades económicas productivas.

Chile había iniciado una etapa de desarrollo económico muy importante en su historia, dando cuerpo a los postulados económicos en boga de la época, los que se sustentaban en la tesis de la sustitución de importaciones y en el fomento industrial manufacturero como herramientas básicas del crecimiento, contando para ello con una fuerte injerencia y regulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los proyectos privados se preparaban y evaluaban tomando en consideración en forma muy significativa los apoyos que recibirían por parte del Estado, los que podían traducirse en otorgamientos de créditos blandos, los que normalmente fueron a tasas negativas como consecuencia que la tasa inflacionaria superaba al costo financiero del dinero en ese período. Por otra parte el Estado contaba con las herramientas legales para crear barreras arancelarias con el objeto de prácticamente prohibir las importaciones de los productos que ahora se manufacturaban en el país y así se estimaba conveniente.

Las tasas de interés negativas, como consecuencia que la inflación superaba el costo del crédito bancario, constituyó un factor positivo para el financiamiento de los proyectos, puesto que ya a partir de la década de los cuarenta el país comenzó a sentir los primeros brotes inflacionarios. A medida que fue pasando el tiempo esta situación se acrecentaría provocando fuertes distorsiones macroeconómicas como se verá más adelante.

El Estado se convierte paulatinamente en actor estelar del sistema productivo. Se promueven las inversiones públicas en empresas de propiedad estatal, por lo que buena parte de la economía es administrada por el Estado. Vastos proyectos se impulsan y se desarrollan durante los gobiernos del Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda fallece en 1942 en pleno ejercicio de su mandato presidencial, en momentos en que el mundo observaba con desaliento los horrores que se cometían a diario por los ejércitos de los países combatientes en la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo de ocurrir la muerte de Aguirre Cerda, aún no se podía establecer con certeza quién sería el triunfador de ese conflicto mundial.

Cuando ocurrían estos hechos en Chile, los aliados miraban con esperanza la reciente decisión de la Unión Soviética de declarar la guerra a Alemania y Japón, después de desahuciar el pacto de no agresión mutua firmado al inicio del conflicto bélico. Como consecuencia de lo anterior los aliados se mostraban más optimistas de conseguir el triunfo al contar con la participación de los rusos, lo que permitía incrementar sustancialmente la capacidad de armamento y logística de los aliados, como consecuencia del significativo aporte que representaba la única nación que a la época había abrazado el modelo de desarrollo marxista. Los aliados requerían de su capacidad bélica como quedaría demostrado posteriormente cuando Rusia finalmente declara la guerra a Alemania, y así los aliados logran el triunfo por sobre el nacionalsocialismo de Hitler.

A pesar del grave conflicto mundial, el que trajo aparejado la confiscación de las flotas mercantes de los países en conflicto, las que quedaron a disposición de las autoridades; cuando el comercio mundial se vio claramente disminuido; cuando los países desarrollados privilegiaron la producción de bienes destinados a la guerra; cuando no se produjeron muchos bienes manufacturados en esos países abocados al conflicto; cuando no hubo fabricación de automóviles en los Estados Unidos durante los años 1943, 1944 y 1945; cuando tampoco se fabricó tecnología para la producción de bienes que normalmente se elaboraban en tiempos de paz, ya que todo el mundo industrializado se concentró en los requerimientos bélicos del conflicto, Chile mostraba resultados económicos y un crecimiento del producto satisfactorio.

El modelo de desarrollo "hacia adentro" estaba dando sus frutos, quedando demostrado que la dependencia de la economía del país mediante el expediente de vender nuestras materias primas para adquirir productos manufacturados de los países industrializados, no era la vía adecuada para nuestro desarrollo.

La Primera Guerra Mundial, la crisis salitrera y la Gran Depresión mundial de los años 30 así lo habían demostrado. Por lo demás, tanto los análisis de los economistas nacionales como los datos y antecedentes que entrega-

ban los organismos internacionales demostraban que se estaba produciendo un evidente deterioro de los términos de intercambio, en el sentido que los países productores de materias primas requerían cada vez más cantidad de ellos para la adquisición de productos industrializados. Si en un momento se podían adquirir en el exterior determinados productos con tantas toneladas de una materia prima cualquiera, al cabo de un tiempo se requerían más y más de ellas para adquirir los mismos productos manufacturados.

Por otra parte estaba a la vista el éxito de la Unión Soviética, nación que había sido capaz no tan solo de desarrollar un modelo de economía estatista sustentado en las teorías de Karl Marx, sino que además había logrado sortear con éxito la Gran Depresión, conjuntamente con un nivel de industrialización que la convertía en una nación poderosa y respetada; todo ello aplicando la teoría marxista de que los medios de producción debían estar en manos del Estado. La puesta en marcha del primer experimento de una economía marxista con resultados tan satisfactorios, y ahora, en 1945, triunfante en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, constituían antecedentes más que suficiente para demostrar al resto del mundo en forma fehacientemente el éxito de ese modelo.

Por todo lo anterior, a nadie le puede parecer extraño que comenzaran a ganar adeptos los partidos Comunista y Socialista, declaradamente marxistas, en especial en el mundo del trabajo y los sindicatos en Chile. La estabilidad lograda por el gobierno del Frente Popular, presidido por Aguirre Cerda, era reconocida por amplios sectores de la población. Su muerte ocurrida en 1942, en medio del conflicto bélico mundial, genera una gran consternación nacional. La ciudadanía apreciaba positivamente los resultados de una política económica y social que estaba transformando las bases estructurales de la nación. Su acción decidida en orden a dar acceso a la educación a vastos sectores que no tenían oportunidades, genera en la población un sentimiento de real afecto al presidente radical del Frente Popular, quien había abrazado el eslogan de "Gobernar es educar".

Todo lo señalado en los párrafos anteriores es lo que estaba ocurriendo en Chile y en el mundo al momento del fallecimiento prematuro del presidente Aguirre Cerda. El Partido Radical se consolidaba políticamente como consecuencia de los éxitos logrados y que estaban a la vista de los ciudadanos. Por otra parte los partidos Socialista y Comunista, partidarios de replicar en Chile el modelo soviético de propiedad estatal de los medios de producción, también ganaban terreno como consecuencia del desarrollo soviético y sus notables éxitos. El Frente Popular se mantenía como el referente político de mayor poderío, y así, el país convocado a elecciones, elige a Juan Antonio Ríos, también militante del Partido Radical, como sucesor de Pedro Aguirre Cerda. Durante su período constitucional, que no logra terminar como consecuencia que también muere en el ejercicio del poder, se consolida el modelo de desarrollo "hacia adentro". Durante su gobierno se le entregan nuevas atribuciones a la CORFO, y logra acrecentar el poder del Estado en cuanto a su participación en la creación y fortalecimiento de las empresas de propiedad estatal. El modelo de desarrollo proteccionista seguía generando empleo, estabilidad y desarrollo.

Durante su mandato se produce finalmente el triunfo de los aliados. La participación de la Unión Soviética había contribuido eficazmente a lograr el triunfo sobre Alemania y Japón. La guerra había terminado. El mundo, ansioso de paz, observaba con esperanza el actuar de los vencedores y las políticas que ellos podrían adoptar para evitar nuevas confrontaciones que tanto dolor, muerte y destrucción habían creado. Nadie desconocía el aporte sustancial de la Unión Soviética al triunfo de los aliados. Tampoco nadie podía desconocer la fuerza arrasadora de los Estados Unidos, país que mostró un crecimiento y un desarrollo espectacular después de la Gran Depresión y cuya participación en el conflicto mundial fue determinante para el éxito de los aliados. Sin la participación de la Unión Soviética y de los Estados Unidos jamás los países de Europa habrían podido derrotar por sí solos a los alemanes. La historia se habría escrito de otra manera.

Los dos modelos en pugna se habían asociado para triunfar en la Segunda Guerra Mundial. Una vez ocurrido lo anterior, los vencedores tomaron la decisión de dividir Europa en razón a sus respectivos postulados políticos. Unos por el libre mercado, otros por la propiedad estatal los medios de producción.

Alemania se dividió en dos. Una parte de ella bajo el dominio y control de la Unión Soviética, que se denominó República Democrática de Alemania, y la otra parte bajo la potestad y control principalmente de los Estados Unidos y sus aliados, que se denominó República Federal de Alemania.

Los vencedores, más que disponer de territorios, les interesaba demostrar cuál de los dos modelos económicos y sociales resolverían de mejor forma el bienestar de las personas. La guerra no terminó con la firma del armisticio, lo que ocurrió efectivamente fue que una buena parte de Europa quedara bajo el control soviético, mediante la implantación del modelo de economía marxista en esos países que quedaron bajo la "órbita soviética" como se los comenzó a identificar. La otra parte de Europa quedó bajo la influencia del modelo de desarrollo capitalista, claramente liderado por los Estados Unidos. La Alemania Federal, muy controlada por los aliados occidentales, comienza su lenta reconstrucción bajo la conducción del gran líder democratacristiano Konrad Adenauer, quien inspira el modelo de economía social de mercado.

Había comenzado una nueva guerra, "la guerra fría", apodo con el que el mundo designó a esta confrontación de los modelos políticos y económicos que estaban en juego. Ambos modelos mostraban éxitos y también fracasos, ambos defendían con vehemencia sus puntos de vista, poniendo énfasis en lo mejor que podían mostrar cada uno de ellos para lograr adeptos en todo el mundo.

Por su parte el papa Pío XI en su conocida encíclica social *Quadragesimo Anno*, promulgada el 15 de mayo de 1931, con ocasión de cumplirse 40 años de la famosa encíclica *Rerum Novarum* del papa León XIII, ponía el dedo en la llaga acerca de los graves problemas que uno y otro modelo creaban en la sociedad y en las personas. Pero ciertamente,

más allá de los evidentes peligros que con tanta sabiduría los expresara Su Santidad Pío XI, los Estados Unidos y la Unión Soviética sentían el peso de la responsabilidad de demostrar al mundo, con resultados concretos, cuál de los dos modelos permitía un mayor y mejor desarrollo económico y social. La “guerra fría” había sido declarada silenciosamente, en forma tácita, a partir de 1946.

Este era el panorama mundial cuando Juan Antonio Ríos fallece, precisamente en ese año de 1946 en pleno ejercicio del poder. Chile estaba mostrando algunos progresos en lo económico y social, sorteando con relativo éxito los embates de la Segunda Guerra Mundial y con un modelo mixto de economía en donde coexistían empresas públicas con empresas de propiedad privada. Con los gobiernos de Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, Chile demostraba que los modelos podían coexistir, que podían ser complementarios y que la descalificaciones políticas de uno contra otro no eran convenientes para la convivencia nacional.

Sin embargo, esta coexistencia no era capaz de mostrar un crecimiento económico que ubicara a Chile como una nación en franca vía de desarrollo. El crecimiento en la producción agrícola apenas alcanzaba a cubrir el crecimiento poblacional de Chile, que en esa época se empinaba al 2.5% anual, cuando no existían los métodos anticonceptivos de la actualidad. La mortalidad infantil y la desnutrición comenzaron a ser problemas de debate nacional, dadas las alarmantes cifras que mostraba nuestro país. Por otra parte la inflación estaba haciendo sentir sus primeros efectos negativos en la economía chilena.

Durante el gobierno de Ríos, en 1945, se iniciaron en Magallanes los trabajos conducentes a extraer el petróleo descubierto tiempo atrás en esa zona del país. A pesar que la producción petrolera solo comenzaría a entregar sus primeros barriles en 1949, este hecho generó un clima de grandes expectativas, en consideración a que hasta esos momentos todos los requerimientos de petróleo y sus derivados debían de importarse, con la consecuente merma de las divisas que el país requería cada vez con mayor intensidad. El “oro negro” abría la esperanza que mediante la in-

tensificación de los trabajos de reconocimiento, exploración y perforación, por parte del Estado, aparecieran nuevos yacimientos que podrían permitir al país su autoabastecimiento y la posibilidad de convertirse en exportador de ese esencial producto energético. Por otra parte el país había iniciado los estudios que permitirían crear la siderurgia del hierro y el acero. Chile disponía de yacimientos para ello, por lo que el gobierno de Juan Antonio Ríos se comprometió a impulsar la creación de la Compañía de Acero del Pacífico, CAP. Así, el Consejo de la CORFO, el 19 de abril de 1943, acordó la formación de una sociedad anónima destinada a la producción del fierro y el acero, empresa que se inauguraría siete años después, en el año 1950.

Chile había iniciado una etapa de desarrollo económico muy importante en su historia, dando cuerpo a los postulados económicos de la época, los que se sustentaban en la tesis de la sustitución de importaciones y en el fomento industrial manufacturero y minero, como herramientas básicas del crecimiento, contando para ello con una fuerte injerencia y regulación por parte de las autoridades gubernamentales. El modelo proteccionista se había instaurado en el país en gloria y majestad y sin contrapeso.

Los proyectos privados se preparaban y evaluaban tomando en consideración en forma muy significativa los apoyos que recibirían por parte del Estado, los que podían traducirse en otorgamientos de créditos blandos, los que normalmente fueron negativos como consecuencia que la tasa inflacionaria superaba al costo financiero del dinero o mediante el expediente de crear barreras arancelarias con el objeto de prácticamente prohibir las importaciones de los productos que ahora se manufacturaban en el país. Por su parte el propio gobierno planificaba su desarrollo y así se llevaban a cabo significativos proyectos productivos de propiedad estatal.

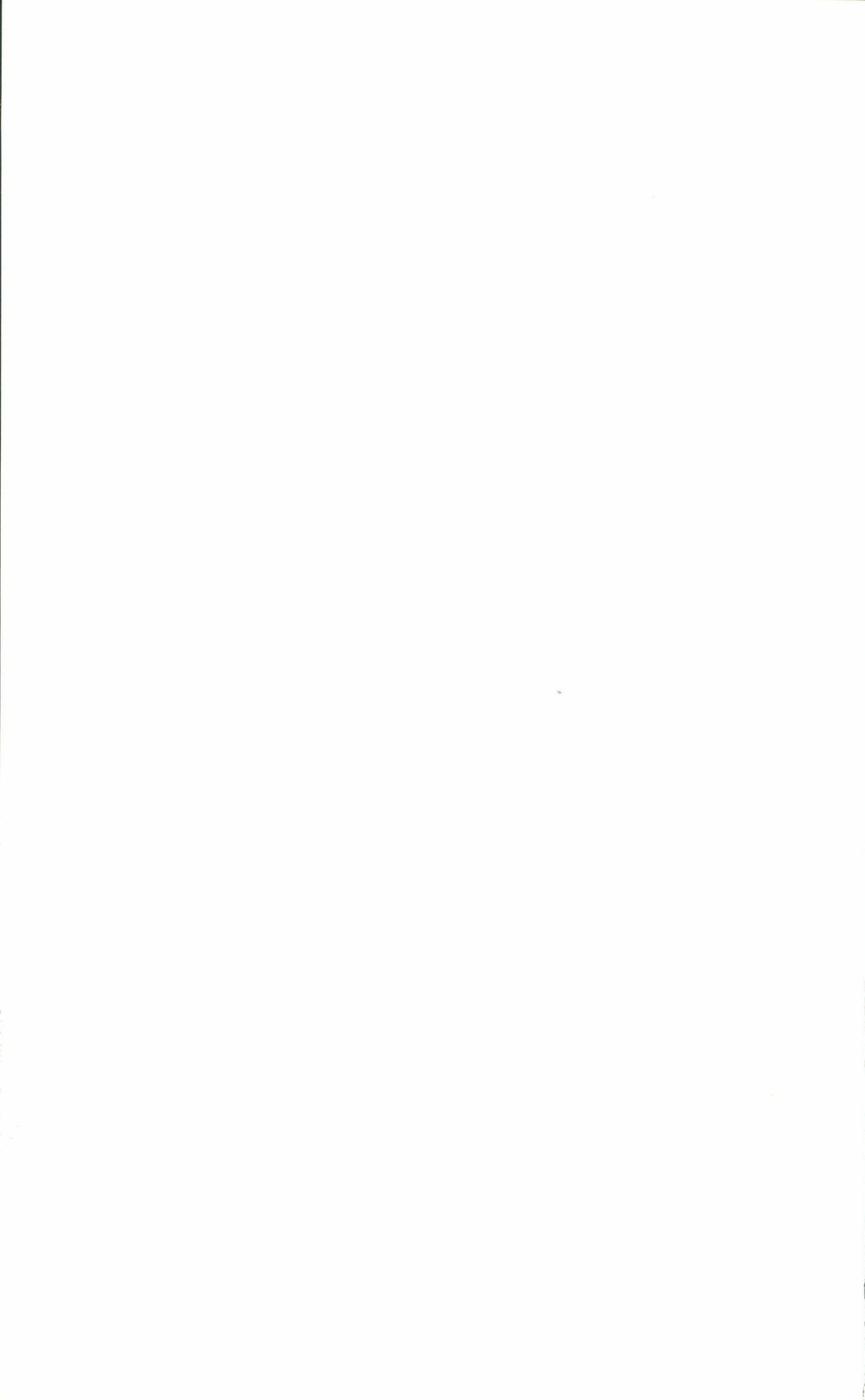
Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos la CORFO realizó un ambicioso plan para el desarrollo de la producción de energía eléctrica y combustibles, para lo cual se le otorgó importantes atribuciones en el área económica y financiera.

Por otra parte, durante el segundo gobierno del Frente Popular, CORFO desarrolló ambiciosos planes destinados a respaldar al sector agropecuario, lo que significó fuertes inversiones en riego, mecanización de los cultivos, producción y elaboración de madera, dando también los primeros pasos destinados a fomentar la industria pesquera y la elaboración de harina de pescado.

El país observaba con complacencia los resultados del modelo proteccionista. Durante los años 1944 y 1945 se llevaron a cabo un gran número de proyectos industriales, desarrollando sendos planes de inversión con apoyo estatal en la minería, en la construcción de los primeros frigoríficos industriales y la construcción de la central hidroeléctrica de Pilmaiquén, construyéndose 1.325 kilómetros de línea de transmisión.

En enero de 1946, Juan Antonio Ríos, aquejado por una grave enfermedad, debe retirarse del mando de la nación, razón por la cual asume como vicepresidente su ministro del Interior, Alfredo Duhalde. A pesar de los exitosos resultados económicos, la convulsión no amainaba, principalmente como consecuencia de los movimientos sindicales, los que asumían un rol cada vez más protagónico en tiempos de la "guerra fría", claramente alentados por los partidos marxistas.

A la muerte de Ríos, el país es convocado a una nueva elección presidencial para septiembre de ese año. La derecha fracasó en su intento de llevar un candidato único, por lo que el camino estaba allanado para un tercer gobierno radical encabezado por Gabriel González Videla, quien recibe el apoyo de los comunistas pero no de los socialistas, los que decidieron llevar como candidato a Bernardo Ibáñez. Gabriel González Videla sale claramente triunfador en el acto electoral, y así asume la presidencia de la nación, en forma consecutiva, un tercer representante del Partido Radical.



CAPÍTULO V

EL OCASO DE LOS GOBIERNOS RADICALES Y LA IRRUPCIÓN DEL GENERAL DE LA ESPERANZA

Llega al poder Gabriel González Videla, quien procede a formar un gabinete integrado principalmente por radicales acompañados por algunos liberales y comunistas. Por primera vez en la historia republicana llegan a ocupar cargos ministeriales representantes de un partido de inspiración marxista. El Partido Comunista, ahora en el gobierno, gana y ganaba terreno político hasta tal punto que en las elecciones municipales que se realizaron el año siguiente del inicio del período presidencial de González Videla, resultaron claramente vencedores por sobre los radicales, lo que impulsó a los liberales a retirarse del gobierno al constatar la fuerza política que habían ganado los comunistas. Ante la crisis de gabinete ocurrida como consecuencia de lo anterior, Gabriel González Videla decide pedirle la renuncia a todos sus ministros y procede a designar un nuevo gabinete compuesto exclusivamente por radicales, dejando fuera del gobierno a los comunistas. Influyó en esta decisión la presión norteamericana que no veía con satisfacción la presencia de los comunistas que se alineaban con las políticas y estrategias que provenían desde Moscú, en plena "guerra fría", cuando ambos sistemas económicos, sociales y políticos defendían con vigor sus respectivos puntos de vista.

La situación se torna insostenible como consecuencia del desplazamiento de los comunistas del gobierno y el evidente acercamiento de González Videla a las posiciones políticas y estratégicas lideradas por los Estados Unidos, distanciándose del poderoso partido marxista, sin cuyo apoyo no habría resultado electo presidente de Chile un año antes.

Así, el conflicto entre los comunistas y el gobierno se hace especialmente violento a mediados de 1947, cuando las principales organizaciones sindicales, controladas por

los comunistas, efectúan una serie de huelgas que generó un ambiente de gran conmoción interna.

La respuesta de Gabriel González Videla fue la de arrestar a numerosos dirigentes comunistas y relegarlos a Pisagua, en pleno desierto, a orillas del mar, a 2.000 kilómetros al norte de Santiago. Posteriormente, González Videla envía al Congreso un proyecto de ley que se denominó: "Ley de Defensa de la Democracia", la que privaba del ejercicio de sus derechos políticos a todos los militantes del Partido Comunista. Pablo Neruda, que había sido elegido senador, debió ocultarse ante su inminente detención y posteriormente huir del país hacia Argentina ante la brutal represión que el gobierno llevó a cabo en contra de los comunistas.

Las perturbaciones sociales, políticas y económicas acompañarían a Gabriel González Videla por el resto de su mandato. Los gremios continuaron con su secuela de paros reiterativos con exigencias sociales que obligaron al gobierno a llevar al Parlamento un sinnúmero de leyes misceláneas destinadas a satisfacer las exigencias de los distintos grupos sociales, los que presionaban a la autoridad, en función de sus propios intereses, creándose así un caos en materia previsional, de remuneraciones y beneficios sociales que cada organización sindical exigía de acuerdo a su propio poder negociador.

La inflación empezó a mostrar los primeros signos de crecimiento, puesto que para resolver los conflictos sindicales se incrementaron los gastos en muchas reparticiones y empresas públicas, cuyos déficit fueron financiados en buena medida mediante el expediente de la expansión monetaria vía emisión inorgánica.

Antes que surgiera esta ebullición social, que distorsionó toda coherencia en los planes de gobierno, Gabriel González Videla se había propuesto a seis meses de iniciado su mandato, en mayo de 1947, a poner toda su energía en el proceso de industrialización del país, planteando que Chile debía incorporar valor agregado a sus materias primas. De esta forma se pretendió transformar la industria nacio-

nal, para que fuera capaz no tan solo de lograr la sustitución de importaciones, sino que, además, pudiera ser exportadora de bienes manufacturados. Textualmente señaló: “resulta necesario e imprescindible transformar una vieja y atrasada economía por una industrializada que permita a la nación recuperar su independencia económica y al pueblo elevar su nivel de vida”.

Para lograr sus objetivos se le entregó a CORFO mayores responsabilidades en el proceso de industrialización y fomento de la producción. Los resultados de este nuevo impulso a la actividad industrial dio como resultado que durante el período presidencial de Gabriel González se inaugurara la fundición de Paipote; se transformara la Escuela de Artes y Oficios para dar paso a la Universidad Técnica del Estado cuyo principal objetivo fue la de dotar al país de profesionales altamente calificados para el desarrollo de la industrialización; se creara la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el 19 de junio de 1950 se iniciara la construcción de la Usina de Huachipato, procediendo a entregarle la administración posterior de este importante complejo acero a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la que había sido constituida como una sociedad anónima del Estado, el 27 de abril de 1946. También durante su gobierno se continúa desarrollando el ambicioso plan de electrificación destinado a dotar de energía eléctrica a la mayor parte del territorio nacional.

Por otra parte se inicia el proyecto de producción de azúcar proveniente de la remolacha, representando esta industria uno de los pilares fundamentales de la acción de CORFO hasta 1950 y el más ambicioso proyecto agroindustrial, puesto que se incorporaban miles de hectáreas a la producción de este tubérculo. Para la implementación de este importante proyecto se creó posteriormente una nueva sociedad anónima de propiedad estatal que recibió por nombre Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA), por parte del Consejo de CORFO en 1952.

El tercer gobierno radical continuó con la política ya institucionalizada de dotar al Estado de un fuerte poder industrial, manteniendo el desarrollo “hacia adentro”,

creando empresas productivas estatales, sustituyendo importaciones y generando nuevas fuentes de trabajo. El modelo económico estaba funcionando y dando frutos al país.

Sin embargo, el panorama económico tenía sus luces y sus sombras. En efecto, en el período de González Videla el Producto Geográfico Bruto creció a tasas del 3.9% acumulativo, superior a la tasa del período 1939 a 1944 cuando el producto creció en un 3.5% anual. Por otra parte el ingreso per cápita, a pesar del alto índice de natalidad de aquella época, del orden del 2.4% anual, creció en el período 1945 a 1952 en un 2.1% acumulativo anual, superior también al 1.8% del período 1939 a 1944.

Estos resultados tan auspiciosos que se estaban consiguiendo, contrastaban con otros indicadores económicos importantes, los cuales mostraban algunas declinaciones de significación. En efecto, a partir de 1945 y durante todo el período de González Videla se pudo detectar una disminución marcada y sostenida en los niveles de producción de la minería, el comercio, el transporte y la vivienda. En el hecho, la mayor participación de la industria en el producto nacional no compensaba las disminuciones que se observaban en especial en la agricultura y la minería. El país, a pesar de la gran cantidad de tierra cultivable que poseía, no estaba generando los alimentos que la población requería. El latifundio y la arcaica estructura agrícola nacional, que provenía de los tiempos de la colonia, estaban creando un foco importante de controversia política en donde ya se planteaba la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma agraria.

Mientras tanto el Partido Comunista, ahora en la clandestinidad, continuaba su política de exacerbar las posiciones extremas en las organizaciones sindicales que estaban bajo su control. El país no estaba satisfecho con los resultados que se estaban logrando, percibiéndose un clima de confrontación social que la mayor parte de la población rechazaba.

Por otra parte, una oposición cerrada y apasionada acusaba al gobierno radical de ser autores y cómplices en la

manipulación abusiva de los caudales públicos y de corrupción generalizada, culpando directamente a miembros del partido gobernante de enriquecimientos ilícitos y abuso de poder. Además, se les culpaba de utilizar las empresas públicas, protagonistas del desarrollo, para ubicar en cargos directivos a personas pertenecientes al Partido Radical e incondicionales del gobierno.

Todo lo anterior generó un clima de pesimismo colectivo, el que caracterizó los últimos dos años de la administración de González Videla. Adicionalmente, la población chilena, en forma mayoritaria, comenzó a mostrar un rechazo importante, no solo al partido gobernante, sino que en general a todos los partidos políticos. Sin embargo, el Partido Radical se llevaba la peor parte, existiendo en la conciencia colectiva que en Chile se había desatado el flagelo de una corrupción generalizada como consecuencia de los repartos a sus correligionarios radicales de los empleos públicos, las escandalosas pensiones de gracia y la corrupción administrativa.

El panorama político no podía ser más difuso: los comunistas claramente alineados con el modelo de desarrollo marxista bajo la sumisión a Moscú y ahora fuera de la ley; un Partido Radical herido y ampliamente rechazado por la población; y una derecha con fisuras internas de importancia. Por otra parte se observaba el surgimiento de la Falange Nacional, agrupación política que nacía como consecuencia de que un grupo de jóvenes, que se identificaban con la doctrina social de la Iglesia, no aceptaban la línea política del derechista Partido Conservador, por lo que decidieron abandonarlo para así conformar un nuevo referente político de muy poca importancia en esos momentos, pero que años más tarde, transformándose en el Partido Demócrata Cristiano, desarrollaría un papel extraordinariamente importante en la historia de Chile.

Ningún partido político estaba en condiciones de concitar el apoyo electoral necesario para gobernar el país. Los partidos habían defraudado los anhelos de desarrollo y de justicia social. Entonces las miradas se vuelven hacia el ex presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien habiendo sido

elegido senador por Santiago, criticaba abiertamente a los radicales de haber sido los autores y cómplices de la corrupción que se advertía en los organismos y empresas públicas. Adoptó como símbolo una escoba y como eslogan "Ibáñez al poder, la escoba a barrer", para representar que en su gobierno se barrería con todos aquellos que aparecerían como responsables de la inmoralidad administrativa, los repartos de los empleos públicos, las pensiones de gracia otorgadas a destajo y en general eliminar de raíz la corrupción que amenazaba al país.

En 1949, mediante una reforma a la ley electoral, se les otorgó a las mujeres la posibilidad de votar en la elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo que el padrón electoral aumentó en un 75% entre 1946 y la elección de 1952.

Los partidos políticos organizados nada pudieron hacer para contrarrestar la enorme adhesión popular que recibía Ibáñez con su discurso de cambios importantes en la conducción política y el desalojo de la corrupción. No se necesitó del Congreso Pleno, Ibáñez obtuvo una abrumadora mayoría en la elección de 1952, un caudillo había irrumpido a La Moneda sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales.

La llegada de Ibáñez al poder marcó el agotamiento del modelo económico y político que se gestó a partir del colapso de la economía chilena en 1929 como consecuencia de la Gran Depresión y la crisis del salitre cuando el país definió el "desarrollo hacia adentro", con los auspiciosos resultados a los que se ha hecho mención en los capítulos anteriores. Adicionalmente, el conflicto bélico mundial de 1939 a 1945 había reforzado las tesis del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, por lo que el país pudo sortear con relativo éxito los serios trastornos que la Segunda Guerra Mundial provocó en el comercio internacional.

Muy pronto el "general de la esperanza" se transformó en una gran decepción. La señal más dramática lo constituyó el proceso inflacionario que empezó a azotar con fuerza la economía del país. Ibáñez asume el 4 de noviembre

de 1952 cuando el índice de precios al consumidor marcó un alza del 12% para ese año, el último del gobierno de González Videla. Pero en 1953, al término del primer año afectivo de su gobierno, la inflación había alcanzado, un 56% y en 1954 a un 71%.

Las presiones inflacionarias provenían precisamente de las prácticas nocivas y permisivas que se habían heredado del gobierno anterior, no tan solo como consecuencia por la corrupción administrativa, las prebendas y privilegios que hipotecaban la acción del nuevo gobierno, sino que también por el hecho que muchas de la empresas estatales, al asumir Ibáñez, no generaban las utilidades esperadas, con altos costos burocráticos y administrativos, como resultado de las presiones que ejercieron los gremios, los cuales tuvieron la fuerza para doblarle la mano al gobierno de González Videla, logrando estatutos separados en materia de remuneraciones, beneficios sociales y sistemas de previsión social particulares para gremios organizados, muchos de ellos controlados por los comunistas, quienes, con gran odiosidad hacia el "traidor" González Videla, habían hostigado al gobierno desde la clandestinidad.

Poco podía hacer Ibáñez para hacer que "la escoba empezara a barrer"; las amarras legales no eran posibles de desatar en el Congreso cuando los partidos políticos que apoyaban, recientemente fundados para respaldar al gobierno de Ibáñez, no tenía la fuerza parlamentaria que permitiese cambiar el rumbo de los acontecimientos, como lo exigía la población.

Así, el gobierno al no poder configurar un apoyo político organizado que le diera gobernabilidad, frustró en forma muy rápida la confianza popular. Desde los inicios de su gobierno las esperanzas se diluyeron muy aceleradamente con una rotativa impresionante de cambios ministeriales, y así, a muy poco andar el gobierno se encontró sumido en la inoperancia, agudizando en la población la percepción de falta de liderazgo.

Ibáñez no disimulaba su antipatía hacia el Parlamento, acusándolo de las dificultades que le impedían llevar a cabo sus propósitos. La desilusión popular era evidente.

Por otra parte la situación económica seguía deteriorándose. Las emisiones de dinero continuaba siendo la herramienta que disponía el gobierno para saldar su escuálidas arcas fiscales donde los compromisos financieros superaban con largueza los ingresos en un aparato estatal que había crecido tanto como consecuencia del vigoroso esfuerzo por lograr un desarrollo "hacia adentro" impulsado por el Estado.

En 1955 la inflación llegó a una cifra record de 83,3%. Este hecho no hizo más que acentuar el desaliento en todos los sectores, tanto empresariales como sindicales.

El Partido Comunista continuaba en la clandestinidad, pero su acción política se encontraba absolutamente intacta, haciendo posible ese mismo año de 1955 echar las bases de la Central Única de Trabajadores, cuando 3.600 delegados decidieron formar esta poderosa organización sindical, la cual tendría una activa participación política a partir de ese momento.

Estrechamente ligada a la alta inflación se produjo una notable disminución en los niveles de la actividad económica puesto que la capacidad expansiva del modelo mostraba claros síntomas de agotamiento. En la década de los 50 el crecimiento anual per cápita fue de tan solo un 1,1% anual. Todos estos hechos provocaron la sensación de fracaso del modelo de desarrollo y el descrédito generalizado: el gobierno del general de la esperanza terminaba su período en la mayor desesperanza y frustración, solo comparable con lo ocurrido en tiempos de la Gran Depresión.

Otro hecho gravitante que conduciría al fracaso del gobierno de Ibáñez lo constituyó el estancamiento de la producción agropecuaria, requiriendo cada vez mayor cantidad de divisas para importar productos agrícolas que el país estaba en condiciones de producir, pero que, sin embargo, se mantenían las tierras improductivas. A pesar que algunos analistas culpaban de esta situación a factores monetarios o de política económica, cada vez ganaba más terreno y aceptación generalizada que la falta de dinamismo de la agricultura chilena se debía a factores estructura-

les, como consecuencia de los latifundios improductivos perteneciente a la aristocracia nacional y cuyo origen provenía de los tiempos coloniales y de la distribución de ella desde la conquista.

Por otra parte la “guerra fría” entre la Unión Soviética y Estados Unidos caracterizó todo el período de Ibáñez, quien claramente se alineó a favor de este último país. Sin embargo, el modelo marxista continuaba asombrando el mundo con sus éxitos y su desarrollo, lo que hacía que la adhesión popular a los partidos marxistas en Chile se acrecentara a pesar de la clandestinidad del Partido Comunista. A un año de entregar Ibáñez el poder, se realizó en la Unión Soviética el lanzamiento del primer satélite artificial denominado *Sputnik*, el 4 de octubre de 1957. Este hecho se interpretó en el mundo entero como una prueba más que suficiente de que en materia de tecnología el modelo de planificación central y del los medios de producción en manos del Estado, en muchos aspectos se hallaba a la altura de los Estados Unidos, y en otros, francamente lo superaba. Fue el momento de gloria para el modelo marxista puesto que estaba demostrando al mundo éxitos tecnológicos que realmente asombraron a la humanidad en aquel entonces.

Los éxitos espaciales rusos elevó enormemente la autoestima de los marxistas por estos logros, generando en el interior del pueblo ruso la sensación de un gran orgullo nacional. Orgullo del que se sintieron parte los marxistas criollos.

Mientras esos auspiciosos resultados ocurrían en la Unión Soviética, el gobierno de Ibáñez terminaba su período con un claro desorden político, una economía estancada y una frustración generalizada en todos los sectores de la sociedad chilena.

Diversos partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista en la clandestinidad, conforman el FRAP (Frente de Acción Popular) de claro tinte marxista. Por su parte la Falange Nacional lograba cada vez más adeptos, en especial en la juventud. El FRAP y la Falange se unen en las postrimerías del gobierno de Ibáñez y logran derogar en el Congreso la Ley de Defensa de la Democracia. Los comunistas

salían de la clandestinidad después de 10 años, la “ley maldita” había sido derogada.

Los partidos se organizan para llevar candidatos. Salvador Allende postularía por segunda vez como líder indiscutido del FRAP creado en 1956, Eduardo Frei Montalva por la Falange Nacional, Luis Bossay por los radicales y Jorge Alessandri por la derecha en representación de los partidos Liberal y Conservador.

Al momento de la elección presidencial, el país vivía un período de caos generalizado. La decepción con que se habían caracterizado los gobiernos de Gabriel González Videla y Carlos Ibáñez del Campo, hicieron posible que las preferencias se volcaran a favor de un gobernante con experiencia administrativa que permitiera recuperar la eficiencia perdida.

Así, mediante una mayoría relativa, Chile elige a Jorge Alessandri Rodríguez Presidente de la República, el 4 de septiembre de 1958.

Mientras estos hechos ocurrían en Chile y en el mundo, la Iglesia ya mostraba su preocupación concreta por los más pobres. En efecto, el padre Alberto Hurtado y el obispo de Talca Manuel Larraín descollaron en su preocupación por los problemas sociales de Chile. No solo había que predicar la palabra de Dios, sino que había que provocar instancias de acción para resolver los problemas económicos y sociales a la luz del Evangelio.

En 1952, en la VII Semana Social de Uruguay, don Manuel expresó en esa oportunidad:

“Trabajamos por una sociedad basada en principios que el capitalismo y el comunismo niegan y desconocen. No vamos a introducir parches en el capitalismo, cuyos principios y estructuras son materialistas, ni pretendemos colaborar con los marxistas, cuya postura anticristiana todos conocemos”.

El obispo Larraín respaldó, en 1952, la creación de la Federación Sindical Cristiana de la Tierra, que fuera una organización pionera en la sindicalización campesina en Chile.

Al año siguiente, en 1953, estalla en la ciudad de Molina, cerca de Talca, la primera huelga campesina de la historia de Chile. Ante este conflicto, el obispo Larraín adopta la decisión de respaldar a los trabajadores campesinos en huelga, recibiendo de los partidos de derecha fuertes críticas por ello. Don Manuel no se rindió ante las presiones que recibía: la Iglesia tenía que demostrar que las arcaicas estructuras del agro chileno habían que modificarlas de raíz.

Los patronos de los fundos despedían a los huelguistas, mientras Ibáñez les aplicaba todo el rigor de la Ley de Defensa de la Democracia, y el pastor los defendía. La figura del obispo Manuel Larraín empezó a tener gran gravitación en los jóvenes social cristianos y en la Falange Nacional, que lo consideraban como un referente concreto y decidido a poner en acción los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia. Monseñor Manuel Larraín fue uno de los fundadores de CELAM (Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe), organismo que reunió a los obispos del continente latinoamericano y en donde se percibió un proceso de cambio al interior de la Iglesia transformando su rol netamente predicador de la palabra, en una Iglesia comprometida con los problemas contingentes de la población. Don Manuel solía pronunciar una frase clave para el rol que debía jugar la Iglesia en los tiempos modernos: "El progreso es el nuevo nombre de la paz". Ese progreso pasaba por llevar a cabo profundas transformaciones en la sociedad chilena de la época.

Las críticas al obispo arreciaban en su propia diócesis. La provincia de Talca se caracterizaba por su carácter agrícola, en donde los latifundios y la existencia de tierras fértiles e improductivas eran la constante de un sector sin dinamismo, que no era capaz de producir los alimentos que la población requería, por lo que el país debía destinar cuantiosos recursos para su importación. Si a lo anterior se agregaba la verdadera explotación a la que era sometida la familia campesina, sin derechos de ninguna especie, en la misma ciudad de que era oriundo Ibáñez, era lógico que la actitud de monseñor Larraín provocara en la derecha y en el gobierno una ácida y violenta crítica en su contra, siendo

muchas veces víctima de una manera de pensar y actuar egoísta y mezquina. El obispo de Talca fue un pastor de avanzada cuando en el interior de la Iglesia chilena había muy pocos que pensarán como él, lo que le acarreó fuertes incomprensiones. Pero en contrapartida con lo anterior logró un gran respeto en el clero joven y en los idealistas falangistas social cristianos que buscaban ansiosos en el interior de la Iglesia la voz y la acción de un pastor que demostrara que la necesidad de cambios estructurales en Chile eran imprescindibles para todos aquellos que comulgaban con las enseñanzas de las encíclicas sociales.

Por su parte, don Raúl en esos instantes estaba a cargo de hacer funcionar en el país la filial de Caritas, organismo que con singular éxito funcionaba en distintos países del mundo, destinada a entregar ayuda principalmente alimenticia y de vestuario a la gran cantidad de familias chilenas que vivían en la miseria y la desnutrición.

Su trabajo en Caritas Chile, que había sido aceptada como institución integrante de Caritas International, estaba desarrollando, en las postrimerías del gobierno de Ibáñez, una tarea gigantesca en momentos que Chile se hallaba sumido en la desesperanza y la frustración. Los programas de ayuda de Caritas bajo la conducción del padre salesiano Raúl Silva, crecían notablemente y estaba dando atención a unas 700 mil personas con gran eficacia y con un empuje notable que provocaba la admiración en su congregación, en la Iglesia y en los más pobres.

En 1958, algunos productores de leche le solicitaron una audiencia al padre Silva, para quejarse de que Caritas estaba desarrollando una competencia desleal, puesto que se les estaba quitando consumidores al entregar leche de los excedentes internacionales que Caritas recibía para su distribución gratuita en el mundo pobre y desvalido de Chile. Don Raúl entonces les respondió diciéndoles:

“Señores, los pobres a los que Caritas les da no tienen dinero para comprarle ni un litro de leche a ustedes. Al contrario, yo les estoy creando el hábito de tomar leche”.

Don Raúl, cuando había llegado desde Turín recién ordenado sacerdote, tuvo la oportunidad de conocer al recién designado obispo de Talca en esos momentos, don Manuel Larraín, en el año 1939, en virtud de vinculaciones familiares. Esa relación permitió que el padre Silva, a cargo de Caritas, se pusiera en contacto con monseñor Larraín a fin de repartir los envíos alimenticios de los Estados Unidos para la zona de Talca, tierra en la que don Raúl había nacido. En esos momentos, cuando promediaba el año 1958, el padre Silva Henríquez sentía ya una gran admiración y proximidad doctrinaria con el obispo Larraín, lo había visto cómo impulsaba la Acción Católica, cómo estimulaba y alentaba la práctica de la doctrina social, cómo luchaba con resolución y solitariamente por romper los prejuicios conservadores del Chile de 1958.

Don Raúl, en los momentos de la elección que llevaría al poder de Jorge Alessandri Rodríguez, ya conocía y sufría la angustia por un país que él amaba entrañablemente pero que no se desarrollaba y en el cual la miseria, la desnutrición, la falta de oportunidades y la explotación del pobre y del campesino constituían características dolorosas e inaceptables del subdesarrollo endémico de Chile.



CAPÍTULO VI

LA DERECHA AL PODER.

RAÚL SILVA, ARZOBISPO DE SANTIAGO Y CARDENAL DE CHILE

El país, cansado de la inflación endémica, frustrado por los magros resultados económicos y claramente desesperanzado de Carlos Ibáñez del Campo, el general de la esperanza, elige el 4 de noviembre de 1958 a Jorge Alessandri Rodríguez como nuevo presidente de Chile. Su padre había sido presidente de Chile en dos oportunidades anteriores. La Constitución de 1925 se promulga durante su gobierno, Constitución que se mantendría vigente en el país hasta después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Jorge Alessandri, quien había sido ministro de Hacienda durante un cierto período del gobierno de Gabriel González Videla, no era precisamente un hombre político, era un independiente de derecha, ingeniero de la Universidad de Chile, austero, soltero y exitoso empresario. Recibió el apoyo de los chilenos con mayoría relativa, teniendo como principales adversarios a quienes posteriormente serían sucesivamente presidentes de Chile: Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. El pueblo estaba cifrando sus esperanzas en la derecha, después de los fracasos de los gobiernos anteriores.

Ya en esos momentos se comenzó a señalar que la política chilena se encontraba, puntos más, puntos menos, dividida en tres sectores políticos claramente identificables: la derecha, representada por los partidos Liberal y Conservador; la izquierda, representada principalmente por los partidos Socialista y Comunista; y finalmente el centro, representado especialmente por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Radical.

Cada sector tenía posiciones muy claramente diferenciadas entre uno y otro y en cada sector existían también matices que los caracterizaban y una historia de conducta y

de decisiones políticas que evidentemente gravitaban en el electorado.

Jorge Alessandri, claramente defensor y partidario de la libre empresa, había incursionado con especial éxito en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa privada que había logrado no solo sustituir importaciones, sino que además exportar parte de su producción, por lo que contribuía a generar divisas al país, las que en aquel tiempo se requerían con urgencia, en especial para la adquisición de alimentos desde el exterior. Chile no era autosuficiente mediante su producción agrícola para alimentar a la población, a pesar de las grandes superficies de tierra cultivable, las que se mantenían improductivas.

El diagnóstico de la situación de la agricultura chilena era un desastre. Grandes latifundios se mantenían en propiedad de la rancia aristocracia chilena, cuya historia se remontaba al período de la colonia y la repartición de grandes territorios a los súbditos del rey de España que llegaban a estas lejanas latitudes. La propiedad de la tierra era símbolo de poder, independientemente si ella se cultivaba o no, y su legitimidad propietaria nacía de la Corona española, la que las asignaba de acuerdo a los criterios que imperaban en aquella época. Además, de acuerdo a las Leyes de Indias, copiadas de la legislación española, la cual reconocía la existencia del mayorazgo (*lo que significaba que el hijo mayor recibía el total de la herencia*), lo que impidió en un principio la subdivisión de las tierras. Posteriormente, al abolirse el mayorazgo, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins las tierras comenzaron a subdividirse, pero dadas las grandes extensiones de ellas, en la mayoría de los casos la subdivisión mantenía la existencia de latifundios improductivos.

Al inicio del período presidencial de Alessandri, gobernaba en los Estados Unidos el presidente Dwight Eisenhower en su segundo período consecutivo, el que culminaría en enero de 1961. Nada hacía suponer en esos momentos que en enero de 1959, o sea, dos meses después de la asunción de Alessandri a la presidencia, ocurriría un hecho trascendental en la política mundial, como fue el triunfo de

Fidel Castro en Cuba, derrocando la dictadura militar de Fulgencio Batista, un títere del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno revolucionario cubano, al poco andar, se declaró partidario de llevar a cabo la reforma agraria cubana para posteriormente anunciar en forma abierta y desafiante que Cuba adheriría al modelo de desarrollo marxista y que por lo tanto todos los medios de producción pasaban a manos de la Revolución. Por cierto que en el paraíso cubano, llamado también el "prostíbulo de Estados Unidos", buena parte de los medios de producción pertenecían a ciudadanos y a empresas norteamericanas, como asimismo las grandes cadenas hoteleras, y los ingenios azucareros, principal riqueza económica de la isla.

El golpe al orgullo de los Estados Unidos fue certero y preocupante. A los pies de su frontera, un pequeño país bananero, como despectivamente se referían a los países caribeños en los Estados Unidos, se confiscaba sin pago alguno a los capitalistas norteamericanos con intereses en la isla de Cuba. El marxismo parecía atraer sin vuelta atrás a las naciones latinoamericanas que mostraban fracaso tras fracaso en sus intentos de despegar y de desarrollarse en los modelos sustentados en el libre mercado. Las cifras indicaban cada vez más un desarrollo magro en donde los índices de crecimiento económico apenas cubrían el incremento de la población. Chile no escapaba a ese diagnóstico. El entusiasmo inicial que despertó el Frente Popular y los gobiernos radicales que lo sucedían, se fue desmoronando por la corrupción, las erradas políticas económicas que se emprendían, la ineficiencia de las empresas públicas, y sus endémicos déficits, la concentración de la riqueza y el ingreso, la inflación creciente, la miseria y el hambre de la población, lo que provocaba una mortalidad infantil vergonzosa y una gran desnutrición en el pueblo chileno, que afectaba principalmente a la niñez.

Por otra parte las cifras indicaban que se estaba acrecentando el deterioro en los términos de intercambio, a los que se ha hecho referencia, lo que significaba que los países productores de materias primas (o *commodities* como se les llama ahora), cada vez requerían una mayor cantidad de

ellos para adquirir los bienes con valor agregado que se producían en las naciones más desarrolladas del planeta y que los países como Chile requerían con urgencia.

En el proceso de la “guerra fría” a que se ha hecho mención, la Unión Soviética asombró al mundo cuando en 1957, en las postrimerías del gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, lanzó con éxito al espacio el primer satélite artificial. La curiosidad del habitante común hizo que en todas las latitudes del planeta las miradas se dirigieran al espacio para poder ver este avance gigantesco con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Todos querían observar este verdadero milagro de la tecnología que revolucionaría de manera significativa el mundo de las comunicaciones. Cuando el mundo aún no salía de su asombro y los Estados Unidos reconocía su atraso respecto a los soviéticos en el desarrollo espacial, los rusos envían al espacio al primer ser viviente, la famosa perrita *Laika*, y poco después envía al primer ser humano: el astronauta *Yuri Gagarin*. Mientras tanto el proyecto *Polaris* de la Armada de los Estados Unidos, con objetivos similares a los de los rusos, se encontraba retrasado en 36 meses.

La historia de la humanidad había consignado que la vanguardia del desarrollo tecnológico de la humanidad en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, pertenecía a un país de economía marxista en donde las empresas de propiedad estatal habían hecho posible este gigantesco logro.

Así, a comienzos del gobierno de Alessandri, la población de todos los países del orbe observaba con admiración este desarrollo tecnológico de Rusia, la que además de lo anterior mostraba éxitos sociales, económicos, bélicos y ahora tecnológicos que asombraban al mundo entero. La falta de libertad, la imposición a sangre y fuego de su modelo, la persecución a ultranza a quien pensara distinto, la restricción de las libertades individuales, la violación sistemática de los derechos humanos y tantos errores y horrores que se cometían a diario en URSS, no impedían que se mirase con esperanza en Chile y en el resto de los países latinoamericanos al modelo de planificación central susten-

tado en el marxismo estatista. El fracaso de las estrategias de desarrollo de libre mercado hacía mirar con esperanza un modelo que, a pesar de sus limitaciones, estaba resolviendo los graves problemas de las grandes mayorías: salud, educación, empleo y vivienda.

Difícil tarea para Alessandri, más aún si se considera que los dos candidatos que le siguieron en la elección de septiembre de 1958, buscaban con distinto signo y énfasis transformaciones sustanciales que los partidos de derecha difícilmente podrían aceptar. Entre ellas la reforma agraria con expropiación de las tierras improductivas.

Sin embargo, algunos hechos tanto nacionales como internacionales harían cambiar sustancialmente este diagnóstico, y así ocurriría, contra todo pronóstico, que la primera ley de Reforma Agraria en Chile fuese aprobada durante un gobierno de derecha y con respaldo político de los que defendían a ultranza el derecho a la propiedad.

Planteaba la postura que los Estados Unidos se debía sumar a los cambios y no oponerse a ellos, que había que realizar reformas estructurales en América Latina respaldadas por la nación más poderosa del planeta. Que era necesaria una Alianza para el Progreso con los países latinoamericanos, que había que cambiar las viejas estructuras coloniales de tenencia de la tierra por otras que hiciesen posible dar un uso racional y económico de ellas. Mientras tanto, su contendor en esas elecciones, Richard Nixon, vicepresidente de Eisenhower, representaba el continuismo de un imperialismo que América hispana no estaba dispuesta, en su gran mayoría, a seguir aceptando. La "guerra fría" era una guerra ideológica, de dos modelos muy distintos de concebir la sociedad y con fórmulas muy opuestas en torno a cómo resolver las cuestiones fundamentales de la economía y la sociedad. Nixon inicia una gira por América Latina intentando recibir apoyo a la política continuista que él representaba. Fue recibido a salivazos por los universitarios en Caracas, obligándolo a desistir de su gira y haciendo posible que el grito de "*Yankee go home*" se transformara en una realidad patente publicitada en todo el orbe.

Triunfa Kennedy, despertando la esperanza de un mundo mejor y más solidario, construido sobre la base de la justicia para una América Latina sumida en el subdesarrollo. Ahora, a los sectores democráticos que luchaban por un estado de cosas distintas, se les abrían las perspectivas de llevar a cabo las transformaciones estructurales imprescindibles, las que contarían ahora con el apoyo de gobierno de los Estados Unidos.

La Iglesia chilena y latinoamericana observa también con esperanza la acción política que llevaría a cabo este joven y flamante presidente, el primer mandatario católico de los Estados Unidos. El mundo entero observaba con gran expectativa la forma en que actuaría en el manejo del poder.

Kennedy actúa con vigor y decisión, hace realidad la Alianza para el Progreso y condiciona la ayuda económica a Latinoamérica sobre la base de que por medios democráticos se impulsaran las reformas estructurales necesarias para destrabar el escuálido y preocupante desarrollo de nuestros países. Esta Alianza tenía para cada país características específicas de acuerdo a las circunstancias propias, que aquejaba a cada una de ellas, a través de un diagnóstico sustentado en antecedentes que disponía el gobierno de Estados Unidos, debidamente refrendado por estadísticas internas, por estudios que emanaban de organismos internos confiables y también de la CEPAL y otros centros de investigación dependientes de Naciones Unidas.

Kennedy asume en enero 1961, poco más de dos años después de haber asumido Alessandri en Chile y Fidel Castro en Cuba. En esos momentos la política económica adoptada por el gobierno chileno había centrado su lucha contra la inflación mediante la fijación nominal del tipo de cambio en E° 1,053 por dólar a partir del 1959. La oposición política al modelo de desarrollo implementado por el gobierno de Alessandri desató fuertes críticas, tanto de los partidos de izquierda como también del Partido Demócrata Cristiano. Un sector mayoritario del Partido Radical había decidido respaldar al gobierno derechista, lo que le ocasionó un deterioro importante en el electorado, el que mayoritariamente se sumaba a los cambios que el país requería con urgencia.

Las críticas de los economistas de los partidos de oposición a la fijación del tipo de cambio, en orden a que se produciría como consecuencia de ello serios desequilibrios macroeconómicos, demostraron tener la razón, y así el gobierno de Alessandri debió terminar con la paridad, disparándose nuevamente la inflación y requiriendo el país con urgencia de apoyo internacional y por tanto de la ayuda económica de los Estados Unidos. Desde la asunción al poder de John Kennedy, 11 meses habían transcurrido cuando estos hechos ocurren en Chile, un 28 de diciembre de 1961. La paridad cambiaria iniciada por Alessandri como una medida de política económica destinada a disminuir sustancialmente el proceso inflacionario, mal endémico de la economía chilena de aquellos años, llegaba a su fin. El país no disponía de divisas ni reservas para mantener artificialmente el tipo de cambio que se había fijado inicialmente en \$ 1.053, y cuando se produce el cambio de moneda de \$1.000 antiguos por 1 E°, la paridad se fijó en E° 1,053. Para resolver esta crítica situación, Chile necesitaba con urgencia el apoyo internacional.

Por cierto que la ayuda solicitada por el gobierno de Alessandri, a los organismos internacionales y en especial a los de Estados Unidos, fue utilizada por el gobierno de Kennedy para condicionar su entrega en la medida que el gobierno de Alessandri se sumase a la estrategia de las reformas estructurales, y la manera concreta de demostrarlo para el caso chileno, era a través de la presentación y aprobación de una ley que permitiese llevar a cabo la reforma agraria en los campos y latifundios de propiedad de la oligarquía nacional que apoyaba al gobierno derechista de Alessandri.

Por otra parte, la Iglesia y el CELAM, cada vez más preocupado por los problemas sociales, habían llamado la atención acerca de la situación de pobreza, explotación, analfabetismo y exclusión en que se debatía buena parte del campesinado latinoamericano.

En los momentos en que ocurrían estos acontecimientos Raúl Silva Henríquez había sido nombrado arzobispo de Santiago, cargo que asumió el 24 de junio de 1961. Don Raúl

había sido designado obispo de Valparaíso el 29 de noviembre de 1959 por S.S. Juan XXIII, quien decide nombrarlo posteriormente arzobispo de Santiago el 24 de mayo de 1961. Un mes más tarde asumía su cargo en la capital de Chile.

La severa crisis económica que trajo aparejada el término de la paridad cambiaria y la necesidad de contar con el apoyo de los Estados Unidos para resolverla, representó la gran oportunidad de condicionar la ayuda a la aceptación de los requerimientos de Estados Unidos a Chile, de acuerdo a los planteamientos diseñados por la administración del gobierno de Kennedy para hacer posible La Alianza para el Progreso. Las condiciones estaban dadas, puesto que Alessandri nunca contó con el apoyo mayoritario de la población chilena y del Parlamento. Su elección solo había recibido el 37% del electorado y su designación por el Congreso Pleno fue posible por la tradición chilena de que la primera mayoría relativa se le reconocía el triunfo y se le designaba presidente de Chile.

Por lo tanto, la posición favorable a la reforma agraria de los poderosos partidos opositores a Alessandri y el irrestricto apoyo que el cardenal Silva declaraba a favor de una reforma agraria en Chile golpearon fuertemente a la aristocracia nacional, propietaria de los latifundios y declaradamente católicos, la firme actitud del gobierno del presidente Kennedy y la imperiosa necesidad del gobierno de Alessandri de contar con el apoyo financiero de los Estados Unidos —dada la crisis económica que se había presentado en el país,— hizo posible que la primera ley de reforma agraria de Chile se promulgase durante un gobierno de derecha.

Aun cuando la aplicación concreta de la ley que permitía las expropiaciones no fue mayormente utilizada durante el gobierno de Alessandri, denominándose popularmente como la “reforma del macetero”. Sin embargo, el hecho no dejaba de tener una gran importancia política puesto que se había aprobado un marco legal y jurídico que permitiría efectuar efectivamente una reforma agraria en gobiernos de distinto signo político que a esas alturas y ante los magros resultados que mostraba el gobierno de Alessandri, nadie lo dudaba.

El papa Juan XXIII designa a Raúl Silva Henríquez cardenal de Chile en el año 1962. El recibimiento a don Raúl en el aeropuerto de los Cerrillos fue un gran acontecimiento nacional, el cual fue presidido por el propio presidente Alessandri. El pueblo de Santiago se volcó a las calles para recibir a su pastor en momentos que la Democracia Cristiana, bajo el indiscutido liderazgo de Eduardo Frei Montalva, ganaba terreno político en la base social chilena. Las federaciones de estudiantes de las universidades chilenas, de gran trascendencia en esa época, los jóvenes estudiantes universitarios se identificaban con las posiciones de cambio sustentadas en el humanismo cristiano, el pensamiento de Jacques Maritain, entre otros pensadores cristianos, los que eran estudiados y discutidos entre los jóvenes demócratacristianos. Los marxistas criollos se veían opacados frente al ímpetu seductor de los pensadores cristianos que se oponían con la misma fuerza al capitalismo salvaje de libre mercado y al marxismo estatista y totalitario que coartaba en forma tan profunda las libertades individuales y colectivas. Los jóvenes idealistas cristianos tenían poderosos referentes para luchar por el cambio de estructuras con solidez de principios. Así, la Democracia Cristiana fue ganando, poco a poco, el corazón del pueblo chileno ansioso de los cambios que procurasen una mayor justicia y participación.

La derecha política y económica se veía acorralada ante el surgimiento de este nuevo referente político que era capaz de denunciar con la misma fuerza las añejas estructuras imperantes, defendidas por la derecha política y económica, junto con oponerse abiertamente al totalitarismo marxista y su tesis de la propiedad absoluta por parte del Estado de los medios de producción, defendida tan ardorosamente por los partidos Comunista y Socialista.

Toda la iniciativa política se encontraba en manos de la oposición ante el rotundo fracaso del gobierno de derecha para lograr desarrollo económico y bienestar social. Los comunistas y socialistas luchaban arduamente con los demócratacristianos para conquistar apoyo popular con sus posiciones abiertamente reformistas y de profundo cambio social.

El gobierno de Alessandri se encontraba sin capacidad de respuesta ante un proceso de cambio que había ganado un terreno insospechado durante su gobierno. Solo restaba la llegada del año 1964, en el que se debía elegir un nuevo Presidente de la República, para que el cambio se enquistara en el poder, ya sea el cambio de la "revolución en libertad" de la Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei Montalva, o la revolución marxista liderada por Salvador Allende Gossens. No había otras alternativas.

Por su parte la Iglesia y el cardenal Silva no ocultaban sus temores de un triunfo de la izquierda en la elección de 1964. Muchos preladados tenían la convicción de que la Iglesia se jugaba el todo o nada en las elecciones, incluso se llegó a redactar, por algunos de ellos, un informe confidencial en el que textualmente señalaban: "La situación se presenta muy difícil. El candidato socialista, Salvador Allende, es en realidad un candidato comunista y su triunfo es un triunfo del comunismo, con todas sus consecuencias. La Iglesia, si ellos triunfan, entraría a corto plazo a la condición de la "Iglesia del silencio". Además, consideran los comunistas que el triunfo en Chile les asegura el triunfo del comunismo en toda América Latina, dada la influencia que tiene Chile en el continente".

A don Raúl le propusieron la difusión del documento en donde se condenaba abiertamente al Frente de Acción Popular (FRAP), organismo que aglutinaba a los partidos que apoyaban a Allende. A don Raúl le pareció que una condenación tan directa y abierta podía ser muy peligrosa para la Iglesia, por lo que decidió que la posición de esta debía ser la de difundir la doctrina social de la Iglesia y en especial la pastoral que llevaba por nombre "El deber social y político..." que se había escrito dos años antes. Esa pastoral había marcado un momento muy especial de la historia de Chile. El texto constituyó un llamado para que los católicos adoptaran un compromiso decidido por salir al frente de los problemas modernos, por hacerse cargo de ellos y también en la propuesta de sus soluciones.

"El deber social y político..." llamaba, sobre todo, a cumplir con los postulados y enseñanzas de la doctri-

na social de la Iglesia. Se señalaba la necesidad que el cristiano participase directamente en la edificación de una patria más justa y más generosa, indicando que el católico al proceder de esa forma, estaba cumpliendo con el mandato de amar al prójimo necesitado. El deber social y político significaba que el católico tenía que integrarse con decisión a la búsqueda de soluciones efectivas a la situación de subdesarrollo que afectaba al país. No había que eludir estos temas, sino que, por el contrario, había que abordarlos con decisión hablando de una verdadera espiritualidad del desarrollo económico al que el país aspiraba.

La derecha en retirada no tuvo alternativas en la elección del 4 de septiembre de 1964. La Democracia Cristiana aparecía como la gran solución ante los graves problemas sociales y las ansias de cambio que mostraba la sociedad chilena. Los dos candidatos con posibilidades ciertas de triunfar eran Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Dado este escenario, a la derecha no le cupo otra opción que apoyar a Frei con el único y gran objetivo de impedir la elección del candidato marxista, principalmente apoyado por los partidos Comunista y Socialista.

El 4 de septiembre de 1964, Eduardo Frei obtuvo una arrolladora mayoría en las urnas, superando por más de 430 mil votos a Allende. En sus memorias el cardenal Silva relata estos hechos de la siguiente manera:

“El candidato del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 56,1% de los votos, la más alta cifra conseguida por Presidente alguno en el Chile de este siglo en elecciones libres; en Santiago se empinó incluso por sobre el 60%. Seis días después reunido en convención el Frente de Acción Popular (FRAP), adoptó la decisión irrevocable de realizar una política de oposición al gobierno del señor Frei, convencido de que este, por su composición social y sus vínculos con el capitalismo extranjero y la oligarquía financiera, enviará en lo esencial los intereses de la clase dominante y no los del pueblo chileno”.

“Una nueva etapa comenzaba en Chile. La “revolución en libertad” que el PDC prometía hacer en la nación, planteamientos que había capturado los sueños y la imaginación de una gran mayoría de los chilenos. Comenzaban un enorme desafío, toda una prueba”.

CAPÍTULO VII

LA REVOLUCIÓN EN LIBERTAD

Al iniciarse el gobierno de la Democracia Cristiana el 4 de noviembre de 1964, los factores externos le fueron altamente favorables puesto que los postulados políticos y económicos de Eduardo Frei Montalba resultaban ser coincidentes con los de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos ya que ambos en sus planteamientos estimulaban la transformación de las viejas estructuras latinoamericanas. Otro tanto ocurría con los de la Iglesia a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), ahora volcada a lo social y propiciando también el cambio de estructuras.

Numerosos profesionales y técnicos bajo la dirección del propio Eduardo Frei habían preparado, con bastante antelación, un acertado diagnóstico de la realidad nacional, proponiendo medidas concretas tendientes a resolver los problemas más ostensibles que se apreciaban en el desarrollo de Chile. Por primera vez en el país, un partido político presentaba un programa coherente de acción en cada uno de los campos de la actividad económica y social.

En el diagnóstico se abordaban los rasgos más significativos de la crisis socioeconómica singularizados por la altísima inflación que afectaba a la economía por décadas, el lento crecimiento económico, la desigual distribución del ingreso y la progresiva dependencia económica respecto del exterior. A lo anterior había que agregar una estructura productiva inadecuada, en donde los sectores productivos mostraban una baja contribución al desarrollo, situación que se veía especialmente reflejada en la agricultura donde el país, a pesar de poseer vastas tierras cultivables, tenía que importar cada vez más trigo y otros productos agrícolas destinados a alimentar a la población. A su vez, la producción industrial, en parte como consecuencia del pa-

ternalismo y del desarrollo "hacia adentro", estaba controlada por empresas monopólicas como consecuencia de la estrechez del mercado y la falta de competencia externa. Adicionalmente a lo anterior, se advertían claros nexos entre el sistema financiero y el sector productivo, el cual obtenía fácilmente créditos blandos, en momentos que la tasa de inflación superaba largamente el costo del financiamiento, constituyéndose el endeudamiento en un verdadero subsidio que jugaba en contra del ahorrante y en favor del deudor.

Adicionalmente a los factores anteriores se advertía la gran dependencia externa en cuanto a las decisiones que se adoptaban en la explotación de la gran minería del cobre. En efecto, las empresas extranjeras que explotaban el mineral tanto en El Teniente como en Chuquicamata, adoptaban por su cuenta y sin injerencia chilena, decisiones de inversión, volúmenes de producción, utilización de tecnología, refinación y comercialización sin que estas decisiones fueran coincidentes con los intereses nacionales.

Por otra parte, el programa de Eduardo Frei sostenía que importantes sectores de la ciudadanía no tenían ninguna participación en la vida nacional, se encontraban marginados de las estructuras sociales existentes, por lo que resultaba imprescindible integrarlos a la vida nacional. El programa de gobierno diagnosticaba una crisis sociopolítica fundada en la falta de participación, de representatividad y de solidaridad para gran parte de la población.

En consideración a este diagnóstico, el gobierno de Frei Montalva consideraba absolutamente necesario llevar a cabo transformaciones de carácter estructural, en concordancia a los tiempos que se vivían en el entorno internacional, destinadas a superar el estancamiento económico que se observaba en el país, terminar con la inflación y lograr una mejor distribución del ingreso.

La estrategia de desarrollo planteaba la meta de que el ingreso por habitante fuese de 600 dólares al año 1970, al término del gobierno, que la tasa de ahorro e inversión fuese cercana al 20% del ingreso, que el endeudamiento fuese decreciente y que la tasa de crecimiento se situara en orden

al 5% anual. Hoy día al comparar los 14.000 dólares anuales por habitante que ha alcanzado el país, con los 600 dólares planteados como meta por el gobierno de Frei, se advierte por una parte la situación de grave pobreza que tenía el país en aquel entonces y por la otra el enorme crecimiento logrado en los últimos años.

Así, el plan de gobierno señalaba en palabras del propio Frei: que “la modernización de la agricultura es el más inmediato y más revolucionario de los cambios que Chile necesita llevar a cabo”. Lo anterior quedaba representado en el programa de transformaciones que impulsaría el gobierno jugando un papel fundamental el cambio estructural en la propiedad agrícola, utilizándose para ello el expediente de una profunda reforma agraria destinada a efectuar expropiaciones de las tierras improductivas. Para lograr lo anterior, el gobierno de Frei Montalva señalaba la necesidad de una reforma constitucional la que se postulaba que a la propiedad le correspondía cumplir con una función social. La enmienda constitucional que propuso el gobierno de Frei al Parlamento textualmente señalaba: “la ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses del Estado la utilidad y la salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes productivas y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes”. Para el cumplimiento de estos objetivos era necesario modificar la Constitución Política de 1925, la que reconocía el derecho a la propiedad sin mayores limitaciones.

A pesar que durante el gobierno de Jorge Alessandri se había aprobado una ley de reforma agraria, esta no le otorgaba al Ejecutivo la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la trascendencia, alcances e importancia que el gobierno de Frei le otorgaba a este sector, de allí la necesidad de la enmienda constitucional. Después de dos años de tramitación en el Congreso Nacional, se logró aprobar la modificación constitucional que hizo posible llevar a cabo la reforma

agraria en Chile. Dada la importancia de este aspecto del programa de Frei, se destinará el próximo capítulo a tratar más extensamente este tema.

El ambicioso plan de la Democracia Cristiana sostenía como consecuencia de su propio diagnóstico de la situación chilena que su acción estaría centrada en cinco áreas fundamentales: el desarrollo económico, la educación en todos sus niveles, la justicia social, la participación política y la soberanía nacional.

Para lograr las metas de un desarrollo sostenido, este se obtendría mediante la modernización de la agricultura, la conquista de nuevos mercados externos, la expansión de la minería, el crecimiento industrial y el desarrollo de sector habitacional procurando el acceso a la vivienda a amplios sectores de la población. En el hecho, el programa de gobierno contemplaba la construcción de 360 mil viviendas definitivas.

Por su parte, en el interior de la Iglesia, el programa de Frei despertaba simpatías indisimulables, en especial en gran parte del clero joven. Sin embargo todos tenían una muy mala imagen de lo que había sido una Iglesia ligada a un partido político cuando se la identificaba con el Partido Conservador. Ante el clima de presión política que existía en Chile en esos momentos, monseñor Manuel Larraín expresó: "El mundo, los fieles, quieren ver una Iglesia mas evangélica y menos política, de la cual es como símbolo el papa Juan XXIII".

Pero ciertamente el programa de gobierno de Frei, que apuntaba a las reformas estructurales en Chile, basadas en principios cristianos y en la doctrina social, atraían de sobremedera a los sectores más progresistas de la Iglesia.

El cardenal Silva al referirse al proceso de cambios iniciado por el gobierno de Frei, expresó lo siguiente en sus Memorias:

"Para nosotros era evidente que Frei marchaba en la dirección de realizar profundas reformas, pero que no quería hacerlo a costa de aplastar a ningún sector político o social. Prefería sobrellevar la carga de unas ex-

pectativas desmesuradas antes que arrinconar a sus adversarios, el gobierno debía soportar que se le criticara por su ritmo para hacer los cambios.

“Así es que, en este cuadro, la Iglesia no iba a estar ajena a las conmociones de aquellos años, estas nos iban a tocar a todos por igual. Sin embargo, mirando retrospectivamente, la Iglesia chilena debe dar gracias a Dios por la calidad de sus hombres, por la lucidez con que sus sacerdotes y seminaristas afrontaron ese período tan incierto. Todos ellos fueron partícipes de los debates de aquellos días, pero en su gran mayoría rechazaron las aventuras desviadas de la fe”.

“Los obispos de Chile tuvimos una preocupación preferente por nuestro clero en esa época. No queríamos perder su savia, ni por exceso de celo, ni por desidia. En mi caso, al regreso del Concilio inicié una serie de reuniones para explicar cuáles eran los puntos centrales en que debíamos trabajar”.

“Había tres metas claras: debíamos ayudar a los laicos para que pasaran de una actitud generalmente pasiva en la Iglesia a una presencia activa y responsable; teníamos que terminar el estilo de vida religiosa basada en las meras fórmulas, para adoptar una línea de vivencia más profunda; y el ideal colegiado debía hacerse presente desde ahora en la conducción de toda la comunidad cristiana”.

“Advertí una y otra vez en esas conversaciones que el camino estaría lleno de trampas. Era necesario cambiar, pero gradual y ordenadamente. Habríamos de afrontar dificultades de parte de los que querían todo de golpe, y también de los que se escandalizaban ante el más mínimo cambio”.

El ambicioso programa de gobierno concebido por la administración del presidente Frei no se cumplió cabalmente. Para muchos estudiosos el análisis del período presidencial de la Democracia Cristiana es necesario considerarlo en una perspectiva más amplia que los seis años que duraba su administración, puesto que las bases en que se sustentaba el programa no podía ser juzgado en un período tan corto

ya que muchos de los resultados esperados mostrarían su real madurez más allá del período presidencial.

Sin entrar a juzgar los beneficios que el país logró como consecuencia del proceso transformador de las viejas estructuras iniciadas durante el gobierno de Frei —de indudables repercusiones que se aprecian hasta el día de hoy— la comparación cuantitativa de las propuestas realizadas al país y el resultado concreto de ellas muestran resultados menores a los planteados en el programa de gobierno.

En efecto, la tasa de crecimiento del producto interno bruto no alcanzó la meta del 5% planteada en el programa de gobierno. En el hecho, la economía chilena creció más lentamente que la de otros países del continente en el período 1965-1970.

El volumen de ahorro e inversión propuesto de un 20%, solo alcanzó el 16.1 por ciento del producto nacional en 1969. Sin embargo es necesario destacar que el gran esfuerzo de inversión en el sexenio, lo realizó el sector público el que creció significativamente en el período desde un 53.9 por ciento de la inversión geográfica bruta en 1964 al 74.8 por ciento en 1969.

Por su parte la inversión del sector privado tuvo un comportamiento muy diferente a la del sector público puesto que ella decreció entre 1964 y 1969.

El vasto plan de expansión en los distintos programas nacionales impulsados por el gobierno de Frei a través de la CORFO, permitió importantes avances en el desarrollo en recursos naturales, hidráulicos, forestales, geotérmicos, pesqueros, mineros, agrarios, electrificación, mecanización agrícola, producción de semillas, red nacional de mataderos, desarrollo industrial en el sector de la química, petroquímica, celulosa, metalúrgica, electrónica, siderurgia, petróleo y comunicaciones lo que dio como resultado un importante aumento en la tasa de crecimiento del 12 por ciento del producto interno bruto para los dos primeros años de gobierno. Sin embargo, esta alta tasa de crecimiento no se mantuvo en los años siguientes por lo que en el sexenio no se consiguió el crecimiento esperado. Otro tanto

ocurrió con la inflación la cual tampoco logró las metas que se habían planteado en el programa de gobierno.

El propio Sergio Molina, quien fuera ministro de Hacienda durante el gobierno de Frei Montalva, textualmente expresa en cuanto a los resultados económicos y sociales del país en el sexenio 1964 al 1970:

“Debe reconocerse, no obstante, que el gobierno de la Democracia Cristiana logró solo en parte institucionalizar la participación popular; que no pudo derrotar la inflación y que la tasa de crecimiento de la economía fue inferior a la programada”.

Pero también Sergio Molina, al analizar los resultados del gobierno de la Revolución en Libertad señala:

“La aplicación del programa de desarrollo económico y social, y con él la redistribución del ingreso y las inversiones orientadas al cambio de la estructura productiva; el notable mejoramiento de la balanza de pagos y el decidido impulso dado a la integración, especialmente a través del Pacto Andino; la mayor independencia económica lograda a través de la política internacional y de comercio exterior; la iniciación de cambios estructurales de tanta trascendencia como son la Reforma Constitucional, particularmente en cuanto al derecho de propiedad, la nacionalización de la gran minería del cobre, la Reforma Agraria y la Reforma Educacional; la nueva organización del pueblo en entidades comunitarias; el crecimiento inusitado de la sindicalización; la estructuración de un sistema de planificación nacional, sectorial y regional; la institucionalización de mecanismos de coordinación y de toma de decisiones de política económica de corto plazo, vinculados con planes de mayor alcance, y sobre todo el cambio en la mentalidad que se produjo en los chilenos como resultado del nuevo estilo que se impuso durante el gobierno demócratacristiano, constituyeron importantes avances para lograr las transformaciones económicas, sociales y políticas que Chile necesita”.

Por su parte, el cardenal Silva al referirse a los resultados del gobierno de Frei Montalva expresa textualmente en sus Memorias:

“El gobierno de Eduardo Frei comenzó con el mayor apoyo nunca antes visto, numérica y socialmente hablando. Aunque se ha dicho mucho que ello se debió al “mal menor” elegido por la derecha, la verdad es que ese apoyo aumentó en las elecciones parlamentarias de seis meses después. La explicación de esto es sencilla: Frei le pidió al pueblo un Parlamento que le permitiera gobernar, porque el primer paquete de leyes que envió fue rechazado *ipso facto*, tanto por la derecha como por la izquierda; en consecuencia, las elecciones ratificaron la voluntad de que Frei dispusiese de las herramientas para gobernar”.

“Estos dos triunfos tan resonantes tuvieron, sin embargo, un efecto negativo puesto que el PDC adquirió una visión desproporcionada de su propio poder, se convenció de que, habiendo ganado solo, podía gobernar a solas; y algunos funcionarios transformaron esta confianza en una forma de arrogancia política. Pero aunque el PDC no hizo ningún esfuerzo por buscar aliados, tampoco hubo nadie que se lo quisiera ofrecer. Los dos pilares básicos de la gestión le fueron saboteados por lado y lado: contra la reforma agraria se levantó la derecha, que consiguió dilatar la ley hasta mediados del 67; contra la “chilenización” del cobre (la “viga maestra” de Frei), la izquierda puso dificultades que impidieron que el proceso se concentrara sino hasta 1968”.

“Así que Frei dedicó la mitad de su período, sus tres primeros años, a luchar contra la estructura económica del país y contra una legislatura adversa, en una batalla continua que fue sin duda muy desgastadora”.

“Frei debió poner todo su énfasis. Además, estaba convencido de que el crecimiento económico era la única base posible para la justicia social. Debido a esto, dio más importancia a las soluciones técnicas que a las políticas y sociales. Caso característico fue el desdibu-

jamiento de la Promoción Popular –una idea que sí nació en las filas de la Iglesia–, que tras ser bloqueada por la oposición en el Parlamento, permaneció como una entidad lateral; incluso en esa posición, la Promoción Popular logró hacer grandes cosas y significó el advenimiento de una nueva era para el mundo vecinal y poblacional”.

“La cuestión del cobre y la reforma agraria consumieron muchos esfuerzos del Presidente; la reforma de la empresa, en cambio, no estuvo en sus planes para el período de gobierno; tampoco la de la banca, que la juventud de su partido comenzó a exigir prontamente”.

“En materia social, sus resultados fueron más que eficientes: a pocos meses de concluir el gobierno la educación primaria había aumentado su cobertura en un 46% y el analfabetismo se había reducido de 16,4% a 11%, el total de “soluciones habitacionales” alcanzaba a 470 mil, muchas más que las 360 mil prometidas en el programa; 28 mil familias tenían tierras de la reforma agraria y más de 100 mil campesinos estaban sindicalizados; el desempleo había bajado hasta un 4%, las exportaciones crecido en un 50% y la balanza de pagos adquirido amplios excedentes. La inflación fue muy baja en los primeros cuatro años, aunque en 1969 comenzó a subir de nuevo, en parte por la sequía que azotó al país desde el 67”.

“Pero estos éxitos tenían un sabor técnico que no se ganó la simpatía y la comprensión de los más pobres: aparecían un tanto paternalistas, como soluciones impuestas desde arriba”.

“Los problemas políticos graves, que afectaron el desenvolvimiento económico del gobierno en su fase final, comenzaron el 67. Por un lado, la oposición adoptó actitudes definitivamente intransigentes, que se revelaron bien cuando el Congreso le negó a Frei el permiso para viajar a EE.UU. accediendo a una invitación del presidente Lyndon B. Johnson. Por otro, su partido comenzó a mostrar fracturas internas entre una línea “oficialista” y una “rebelde”, que quería ver transfor-

maciones radicales en materia de propiedad. Ese año el PDC cayó casi diez puntos en las elecciones municipales”.

“Se ha dicho a menudo que el gobierno de Frei desató expectativas que lo desbordaron, especialmente en las clases populares. Yo creo que esto es cierto; pero también lo es que muchas de esas expectativas fueron usadas políticamente por sus adversarios. Es sintomático que cuando se iniciaron los atentados por parte del MIR y las definiciones revolucionarias en los partidos de izquierda (el 67), fue justamente cuando los índices de producción y crecimiento comenzaron a caer. El 66, el PGB creció en un 6,6%; al año siguiente el aumento solo llegó a 2,7%”.

Cualquiera que sea la opinión con que la historia juzgue el período de gobierno de Eduardo Frei M., en el hecho la población chilena no estaba satisfecha con los niveles de desarrollo alcanzado. Lo anterior quedó claramente demostrado en la elección presidencial de 1970 en donde la derecha, encabezada por Jorge Alessandri R., estuvo a punto de retornar a la Presidencia de la República siendo superado por escasos 30.000 votos por el candidato Salvador Allende respaldado principalmente por los partidos Comunista y Socialista. El candidato de la Democracia Cristiana Radomiro Tomić ocupó un lejano tercer lugar, esfumándose la euforia que proclamaba 30 años de gobierno de la Democracia Cristiana para Chile.

CAPÍTULO VIII

EL ROL SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA LATINOAMERICANA Y LA REFORMA AGRARIA EN CHILE

El Consejo Episcopal Latinoamericano fue creado en el año 1955. Desde ese momento y hasta la revolución cubana, en 1959, el CELAM fue un organismo eclesial que más que nada se preocupaba de ser un custodio de la fe católica, preocupándose de atacar y criticar a los movimientos protestantes que con alguna fuerza estaban proyectándose en los países latinoamericanos. Por otra parte se apreciaba en los acuerdos que adoptaban los obispos, una exacerbada preocupación por el auge que lograban los postulados marxistas sustentados por los partidos Comunista y Socialista del continente.

Sin embargo, y quizás como consecuencia del camino que adoptaba la revolución cubana y los graves problemas que aquejaban a amplios sectores de la sociedad latinoamericana, el CELAM asume un rol muy importante de denuncia de estos hechos, apoyándose en serios estudios e investigaciones acerca de los reales problemas sociales de América Latina a la luz salvadora del Evangelio.

El cardenal Silva Henríquez juega un papel fundamental en esta nueva línea de acción de la Iglesia, muy distinta a la postura tradicional de ello, y así, en una suerte de autocrítica a la visión popular que la Iglesia en Latinoamérica y en Chile estaba más cercana a los ricos que a los pobres, expresa:

“La Iglesia parece estar presente y comprometida sobre todo en el mundo de los pudientes, participando de sus privilegios. El clero se acumula de preferencia en las Iglesias desarrolladas y se ausenta de las regiones necesitadas, en la misma nación y hasta en la misma diócesis o ciudad. La acusación de opio del

pueblo² se ha nutrido especialmente por haber sido la Iglesia un importante factor de orden y beneficencia. Se critica igualmente una predicación que espera todo de la conversión personal sin comprometerse con la misma energía en el cambio de estructuras que condicionan a las personas”.

Con el objeto de que no quede duda alguna de la opción preferente por los pobres, don Raúl agregaba:

“Sin embargo, la Iglesia declara que la promoción ha de ser nuestra línea de acción a favor del pobre, de manera que respetemos su dignidad personal, le enseñemos a ayudarse a sí mismo y se oriente a la denuncia de la injusticia y a la educación de la conciencia. A una catequesis y ministerio de la palabra que abarque la dimensión social y comunitaria, a alentar y favorecer los esfuerzos del pueblo, y a ser solidarios con los pueblos”.

Finalmente don Raúl deja en evidencia su apoyo a las reformas estructurales en Chile y América, pero también dejando en claro que las fórmulas marxistas son tanto o más dañinas que las capitalistas, cuando dice:

“Existe una estructura de colonialismo económico tanto externo como interno. El externo se caracteriza por una explotación unilateral de las riquezas materiales y humanas del país; el interno ha desembocado en el planteo de la alternativa entre dos estructuras posibles: capitalismo o social-comunismo; ambas concluyen en una sujeción a poderes exteriores. El sometimiento a un sistema neocapitalista, sigue permitiendo el desarrollo abusivo de pocos en detrimento de los derechos de la mayoría”.

Posteriormente, en una clara alusión a Chile y a la tentación de los oprimidos a encontrar en el marxismo la solución a sus problemas, señala don Raúl:

² Algunos autores marxistas, en todo el mundo, se referían a la Iglesia designándola como “el opio de los pueblos” para señalar que jugaba un rol de apoyo a los poderosos, adormeciendo con su prédica a los pobres para que aceptaran sumisos su condición.

“Dentro de nuestro país, diversas formas de opresión de grupos y sectores dominantes, crean una situación explosiva, la llamada violencia estructural que engendra a su vez la tentación de la violencia de los oprimidos, tendiente a implantar nuevas estructuras consideradas infaliblemente redentoras”.

Ciertamente que estas palabras tan contundentes, tan expresivas y que no dejan lugar a duda acerca de la posición de la Iglesia de Santiago, no podían dejar indiferente a nadie.

Sin embargo, es necesario señalar que las palabras de don Raúl estaban respaldadas por una situación insostenible en el campo chileno. En efecto, la situación de la agricultura chilena, a principios de la década de los sesenta, era catastrófica. El país era incapaz de producir los alimentos necesarios para una población que no superaba los nueve millones de habitantes. Existían grandes latifundios que no se explotaban, por lo que enormes extensiones de tierra cultivable se encontraban abandonadas. Para los propietarios de esas tierras era más importante el poder que generaba su tenencia, que la eficiencia económica de su uso para provecho de todos los habitantes. Por otra parte, los derechos laborales no se respetaban; una gran mayoría de campesinos no tenían previsión alguna, eran analfabetos, y su futuro dependía en gran medida más de actitudes comprensivas y paternalistas de sus patrones que del legítimo derecho que les correspondía como trabajadores y seres humanos.

El diagnóstico de la situación en los campos chilenos formaba parte sustancial de la fundamentación de don Raúl. A diario se constataba cómo la legislación laboral y social era infringida en porcentajes demasiados altos, desde la falta de contratos de trabajo hasta las malas condiciones de vivienda, educación, salubridad y alimentación.

Por otra parte la alta mortalidad infantil del país se manifestaba principalmente en el campo. Junto a lo anterior se podía constatar la difícil situación del pequeño agricultor, debido a los desequilibrios en los precios y la falta de apoyo técnico y crediticio; la depresión general del campesinado en materia de sueldos, estabilidad, trato justo y descansos; y,

en fin, los índices crecientes de emigración de la población rural a las ciudades en busca de mejores horizontes, todos ellos eran indicadores que no podían dejar indiferente a la Iglesia, a la Iglesia de Puebla, de Medellín, de las Encíclicas Sociales, a la Iglesia cuya opción preferente y públicamente declarada eran los pobres.

El Censo Nacional Agrícola y Ganadero de 1955 había puesto al desnudo la realidad del latifundio. Diez mil grandes fundos ocupaban el 81,2% de la superficie agrícola censada de Chile; en cambio, otros 25 mil predios de explotación familiar y subfamiliar ocupaban apenas el 7,4% de esa misma tierra. Por añadidura, muchos de los grandes fundos estaban subutilizados y había algunos en franco estado de abandono.

Como resultado de este cuadro, la producción agrícola no aumentaba al mismo ritmo de la población; la rentabilidad de su explotación venía en un descenso continuo, de varios años; el Estado había tenido que iniciar la importación de alimentos; y, por si fuera poco, una amplia capa de la población vivía en condiciones inaceptables. Todo el esfuerzo que desplegaba el país generando políticas tendientes a sustituir importaciones y así generar divisas, se desplegaba ante la imperiosa necesidad de utilizar esos recursos en la adquisición de alimentos que el país requería con urgencia.

Por su parte, el obispo de Talca, monseñor Manuel Larraín, apoyaba decididamente a don Raúl en su misión pastoral sumándose con entusiasmo a la urgente tarea de reformar la agricultura chilena. Después de la encíclica *Mater et Magistra* y las conclusiones de los obispos latinoamericanos en el sentido de comprometerse a través de la acción pastoral en los problemas reales de los pueblos y la sociedad, la Iglesia chilena sintió ese clamor con una fuerza inusitada. La reforma de la estructura agraria era un deber que no se podía soslayar. En las injusticias sociales y las desigualdades del campo podía estar incubándose la violencia que el señor Cardenal quería a toda costa evitar.

Todos los obispos del país estaban preocupados por esta situación y así, en 1961, poco antes del nombramiento

de don Raúl como cardenal, sale a la luz pública una pastoral colectiva con la firma unánime de todos los obispos del país titulada "La Iglesia y el problema del campesino chileno". En esa pastoral los obispos llamaban con vehemencia a la concurrencia de los chilenos a asumir con decisión cambios estructurales en el agro chileno que hiciesen posible romper con un sistema arcaico y de explotación a la familia campesina.

Para don Raúl tanto la encíclica *Mater et Magistra* como esta pastoral colectiva lo motivaban a cumplir en los hechos, lo que los documentos por él aceptados o firmados le obligaban en conciencia. De esta forma impulsó la entrega de las tierras que poseía el Arzobispado de Santiago a los campesinos, para así hacer posible el imperio de la caridad, el amor al prójimo y la conciencia social.

A principios de 1965, el superior de la Compañía de Jesús en Chile, consultó al señor Cardenal, por escrito, si era conveniente entregar los fundos que poseían los jesuitas a la reforma agraria, tal como lo había hecho ya la Iglesia de Santiago en 1962. La respuesta de don Raúl representa un planteamiento pastoral y económico que demuestra la coherencia de su pensamiento. En carta respuesta le expresa:

"Los Obispos de Chile en Pastoral Colectiva sobre la situación del campesino chileno han manifestado su opinión al respecto. Dicen textualmente: "Por nuestra parte, conscientes como somos de la situación del campesinado, y deseosos de colaborar no solo con la doctrina fundamental sino además con el ejemplo de las realizaciones concretas. Hemos acordado en la Asamblea Plenaria del presente año, encomendar el estudio de una eventual colonización de las propiedades agrícola que están en propiedad y libre uso de la Jerarquía, a una comisión técnica que prepare los antecedentes jurídicos, canónicos y técnicos a fin de facilitar el fácil acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra; con ello entendemos colaborar, en la modesta proporción que nos corresponde, a los dos fines de una eficaz reforma agraria, cuales son: la mejor utilización de la tierra para la comunidad nacional y una partici-

pación mayor de la familia campesina en la propiedad y rentabilidad de la misma”.

“El Cardenal Arzobispo de Santiago creyó de su deber entregar los fundos de la Diócesis a la Reforma, por este acuerdo de los señores Obispos. Esto le ha significado no pequeñas pérdidas económicas, pero, al mismo tiempo, cree que ha obtenido no pequeñas ventajas de orden moral y espiritual”.

“Se agrega a esto, el que el Gobierno de Chile ha solicitado la cooperación de la Iglesia en este campo, y estima que ella sería sumamente útil para la solución de un problema que considera vital para el país”.

Ciertamente que la respuesta de don Raúl no deja espacios para interpretaciones de ninguna especie, la Iglesia no solo debía predicar la necesidad del cambio de estructuras en Chile, sino que además debía dar el ejemplo entregando las tierras de su propiedad, en forma voluntaria, a la reforma agraria.

Al momento de escribir esta carta respuesta al superior de los jesuitas, el país estaba gobernado por la Democracia Cristiana. El 4 de setiembre de 1964 la ciudadanía había optado por la “Revolución en Libertad” eligiendo a Eduardo Frei Montalva por una amplísima mayoría por sobre el candidato marxista Salvador Allende Gossens.

La derecha, en franca retirada ante el apabullante proceso de cambio que se había enquistado en el alma de Chile, apoyó la candidatura de Frei, que obtuvo la mayoría absoluta del electorado, por lo que no fue necesaria su ratificación por el Congreso Pleno. La derecha había optado por el mal menor impidiendo la elección de un candidato que promovía el estatismo marxista.

Frei impulsó con decisión el proceso de reforma agraria, contando para ello con dos grandes profesionales, Rafael Moreno y Jacques Chochol, quienes formaron equipos coherentes que desarrollaron un trabajo lleno de contenido y mística, para hacer posible que se produjera de verdad en Chile el cambio de la viejas estructuras coloniales que habían generado una situación inaceptable en el agro chileno, relatado en el capítulo anterior.

Los terrenos improductivos estaban abriendo surcos para que el símbolo de poder de antaño, sustentado en la nueva tenencia de la tierra, se transformase en suelos productivos capaces de alimentar a un país otrora resentido e incapaz de producir los bienes que se necesitaban para su sustento.

Don Raúl, perteneciente a una familia de raigambre agrícola, no estaba ajeno al sufrimiento y dolor que las expropiaciones, que durante seis años se habían efectuado por la reforma agraria, provocaba en los terratenientes que veían como sus pertenencias pasaban a manos trabajadoras. El país no había aceptado que las tierras no entregaran sus frutos a una población que clamaba por ellos. Entonces don Raúl expresa:

“Hoy el proceso de Reforma Agraria está en marcha. Hoy muchos propietarios agrícolas deben entregar sus tierras, para que sean divididas según la ley. Se enfrentan así al dolor de abandonar lo que han considerado suyo durante toda una vida, y que a menudo han recibido de sus padres o abuelos, y ellos mismos han trabajado poniendo allí su esperanza y fuente de subsistencia. Esto es duro y difícil siempre. Más aún, es inexplicable para quienes no han pensado que todo bien que el hombre posee: educación, propiedad y riquezas, cualidades y aptitudes, no es algo para “atesorarlo para sí”, sino que tiene un destino social. Dios ha creado el mundo para todos, para que todos los hombres lo disfruten y no para que unos pocos se beneficien y se sientan seguros y los demás carezcan de lo necesario para una vida digna y un futuro tranquilo”.

Más adelante, en un claro propósito de mitigar el dolor que el proceso de reforma agraria provocó en muchas familias poseedoras de las tierras, dice don Raúl:

“Nosotros esperamos que la necesidad de una distribución justa de los bienes debe ser comprendida por todos los hombres de buena voluntad, especialmente por los cristianos. Cuando hemos defendido el valor de la propiedad, hemos pensado especialmente en la posibilidad y el derecho que todos tienen a ella, y no en la

defensa de la propiedad de unos pocos. Si hoy muchas familias deben aceptar la expropiación de sus tierras, las tierras de sus antepasados, deben recordar también que en ellas han trabajado generaciones de campesinos que han dejado en ellas su dolor, su esfuerzo de años, sin haber tenido nunca la posibilidad de establecerse en ellas como en lo propio, sin poder esperar el futuro con tranquilidad, porque no era su tierra”.

“Hoy, el sacrificio aceptado de muchos antiguos propietarios hace posible el acceso de cientos de familias a la tierra que han trabajado siempre como ajena. Esto debieran comprenderlo mejor que nadie los cristianos”.

Años más tarde, en abril de 1970, don Raúl entrega a los campesinos del fundo San Dionisio los títulos de dominio de las tierras que antes habían pertenecido al Arzobispado de Santiago. En efecto, desde 1962 la Iglesia de Santiago había cedido sus fundos a los campesinos, favoreciendo con ello a 168 familias. Ahora, en el momento solemne de entrega de los títulos de propiedad, textualmente les señala a las familias campesinas:

“La Iglesia tomó la decisión de distribuir estas tierras a quienes con su trabajo y esfuerzo prolongado demostrasen capacidad y responsabilidad para ser propietarios de ellas. Han sido años difíciles para ustedes, años de sudor, de fatiga y de lucha y también de esperanza y confianza. ‘Los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán’. Nosotros los hemos acompañado en este tiempo; hemos seguido con interés y cariño los esfuerzos que los preparaban para ser propietarios de estas tierras. Estas tierras donde ustedes han visto salir y ponerse el sol, regadas por las lluvias, y recorridas, palmo a palmo, por el caminar de cada día. Hoy estas tierras les pertenecen, y esto nos llena de alegría, emoción y esperanza. Por eso en este momento deseamos agradecer a Dios que nos inspiró para iniciar la Reforma Agraria, para distribuir las tierras de la Iglesia”.

Posteriormente, don Raúl se hace a sí mismo una pregunta clave. Resultaba necesario aclarar ante los campesi-

nos, ante la Iglesia y el país el verdadero propósito que movía al Arzobispo y a la Iglesia de Santiago para haber tomado la decisión de contribuir en forma directa y pública al proceso de cambio de que se estaba viviendo en el país, y expresa:

“¿Por qué lo hicimos? Porque la Iglesia debía ser leal y sincera consigo misma y con todos los chilenos. La Iglesia ha nacido para continuar la misión de Cristo y esta misión se resume en esta palabra: DAR. La Iglesia debe dar la Verdad y el Amor. Y estas no son solo buenas palabras. Su verdad y su amor son la generosidad, la solidaridad, la unión entre los hombres. Esto significa que los bienes de la Iglesia son los bienes de todos los hombres, especialmente de los que menos tienen, los bienes de los pobres”.

“Y porque los bienes de la Iglesia, espirituales y materiales, son para todos los hombres, debíamos dar este paso efectivo que favoreciese especialmente a quienes habían contribuido con su trabajo a mantenerlos y aumentarlos en estas tierras. Estas tierras sirvieron durante mucho tiempo para ayudar al culto de Dios, a las obras del apostolado, a la mantención del clero. Pero consideramos que por encima de estas necesidades estaba el porvenir de los trabajadores de la tierra, su dignidad y sus posibilidades de cultura. Creíamos que nuestro ejemplo contribuiría a crear un espíritu de reforma y de transformación de nuestros campos, cambiando sistemas de dependencia y opresión por nuevas formas de vida, donde el trabajador campesino se siente responsable, respetado y digno. Un sistema que le permitiese trabajar en lo que suyo, que asegurase su porvenir y el de sus hijos. Un sistema de más justa división de tierras, demasiado extensas o mal explotadas, que beneficiase al trabajador y, a largo plazo, a todo el país”.

Al momento de la entrega de los títulos de propiedad a los campesinos de San Dionisio, el país vivió un período de gran convulsión política puesto que este se encontraba en pleno período electoral. Tres candidatos disputaban la pre-

sidencia de Chile. Salvador Allende Gossens por los partidos Comunista y Socialista, Jorge Alessandri Rodríguez en representación de la derecha herida por la reforma agraria, durante cuyo gobierno se había aprobado la ley que la hizo posible, y Radomiro Tomić en representación de la Democracia Cristiana.

La “guerra fría” seguía dominando el escenario de la política internacional. Kennedy había sido asesinado en el año 1963. Los Estados Unidos habían finalmente conseguido adelantar a los rusos en la carrera espacial logrando éxitos tan notables como el de hacer posible lo que parecía imposible: el hombre había llegado a la Luna. El héroe mundial ya no era *Yuri Gagarin*, ahora se llamaba *Neil Armstrong*.

El experimento soviético mostraba ya sus fisuras y debilidades intrínsecas y propias del modelo estatista que coartaba las libertades y las iniciativas de las personas; el Estado se anquilosaba, la productividad disminuía y los bienes y servicios que el modelo estatista entregaba a la población eran de baja calidad, con diseños pasados de moda y con tecnología muy retrasada al compararla con los avances que se observaban en los países capitalistas de libre mercado. La situación había obligado a la Unión Soviética a prohibir las informaciones del mundo occidental, en Alemania se había construido el muro divisionario en Berlín, vergüenza para el mundo libre y civilizado. Se había instaurado “la cortina de hierro”, la que funcionaba como símbolo de un mundo irreconciliable de dos modelos antagónicos que miraban la política, la sociedad, al hombre y sus circunstancias en forma diametralmente opuestas.

Intentando don Raúl justificar los procesos de cambio y reforma que se advertían en la sociedad chilena, les dice a los campesinos de San Dionisio:

“Todos queremos vivir en paz, todos deseamos trabajar en tranquilidad y libertad para construir nuestro destino. Pero no nos hagamos ilusiones: la paz solo es posible si existe la justicia social. Y una forma principal de justicia es la de distribución equitativa de los bienes y

las tierras. La desigualdad injusta y opresora engendra la violencia, el odio, el rencor que ya presenciamos en nuestra patria. La libertad solo es auténtica y duradera cuando es para todos, y no cuando es el patrimonio de los que poseen dinero y cultura. El verdadero orden que tantos anhelamos, es el orden de la justa distribución de la riquezas: porque no puede haber orden donde existe la explotación, donde existen unos pocos privilegiados y una multitud de explotados. Lo demás será un orden aparente, que durará mientras dure la represión de las justas aspiraciones, pero tarde o temprano este 'orden' caerá víctima de su propia injusticia y error. Dios quiera hacer comprender a los propietarios que hoy pierden parte de sus tierras, que con su sacrificio están contribuyendo a la paz y la justicia en nuestro país”.

“En esta ocasión en que ustedes reciben los títulos de dominio de estas tierras, pensamos especialmente en todos los nuevos y futuros propietarios que va estableciendo el proceso de Reforma Agraria. En este título de propiedad está la esperanza de días mejores, de mayor dignidad, de más cultura y seguridad. Pero está también la exigencia del esfuerzo diario, sacrificado, responsable. Este título es una enorme responsabilidad para ustedes y sus familias. Ustedes adquieren con él un medio de ganar su pan honradamente y de preparar su futuro y el de sus hijos, pero la tierra que reciben es algo más que esto. Es sobre todo un medio de contribuir al bien del país, al beneficio del pueblo chileno. Cuando ustedes trabajen y cosechen, piensen que lo hacen no solo para ganar lo que justamente les corresponde: piensen también lo que el país espera de ustedes, nuevos propietarios: una mayor y una mejor producción, una contribución patriótica, sin egoísmos, al progreso de la patria”.

Antes de finalizar don Raúl expresa sus sentimientos de esperanza frente al cambio de estructuras que él mismo, con toda su investidura, había querido ser fiel al mensaje pastoral que había entregado con valentía y generosidad al pueblo, a su grey, a los campesinos. Entonces les dice:

“Finalmente, quisiera expresarles la alegría que siento al hacer entrega de estos títulos de propiedad. San Pablo dice que para el cristiano ‘hay más satisfacción en dar que en recibir’. La Iglesia se alegra hoy de poder dar. Desearíamos que se comprendiera nuestro gesto, en una época de violencia y rencor. No queremos predicar un amor que es pasividad y resignación ineficaz. Queremos recordar una vez más que el amor es más cristiano si es más universal, si beneficia a más hombres. De este amor real y universal brota nuestro deseo de transformar las estructuras de la sociedad; queremos que las estructuras sociales beneficien y aprovechen a todo y no a unos pocos. Solo así puede darse el amor y la unidad entre los chilenos”.

“En este amor eficaz y universal creemos y esperamos nosotros. No creemos en la violencia de los que defienden solo sus intereses egoístas, ni en la violencia de los que creen interpretar al pueblo y con sus actos solo están preparando la represión y una mayor injusticia. Creemos en la generosidad, en el esfuerzo y el patriotismo de nuestro pueblo para consagrarse a cambiar injustas formas de vida social, para luchar en sus organizaciones y sindicatos por la dignidad de su familia, por un porvenir mejor”.

Finalmente don Raúl reafirma en forma inequívoca que la Iglesia no solo debía predicar sino que debía mostrar en su acción de todos los días su opción preferente por los pobres, al señalar:

“Hoy queremos comprometer a la Iglesia, no solo con nuestra palabra, sino también con nuestros actos en esta lucha del campesino y del obrero por su liberación y bienestar”.

El clima de violencia que fuera incentivado por algunos sectores que se oponían al proceso de reforma agraria, que no aceptaban el imperio de la ley, provocaron muerte y dolor.

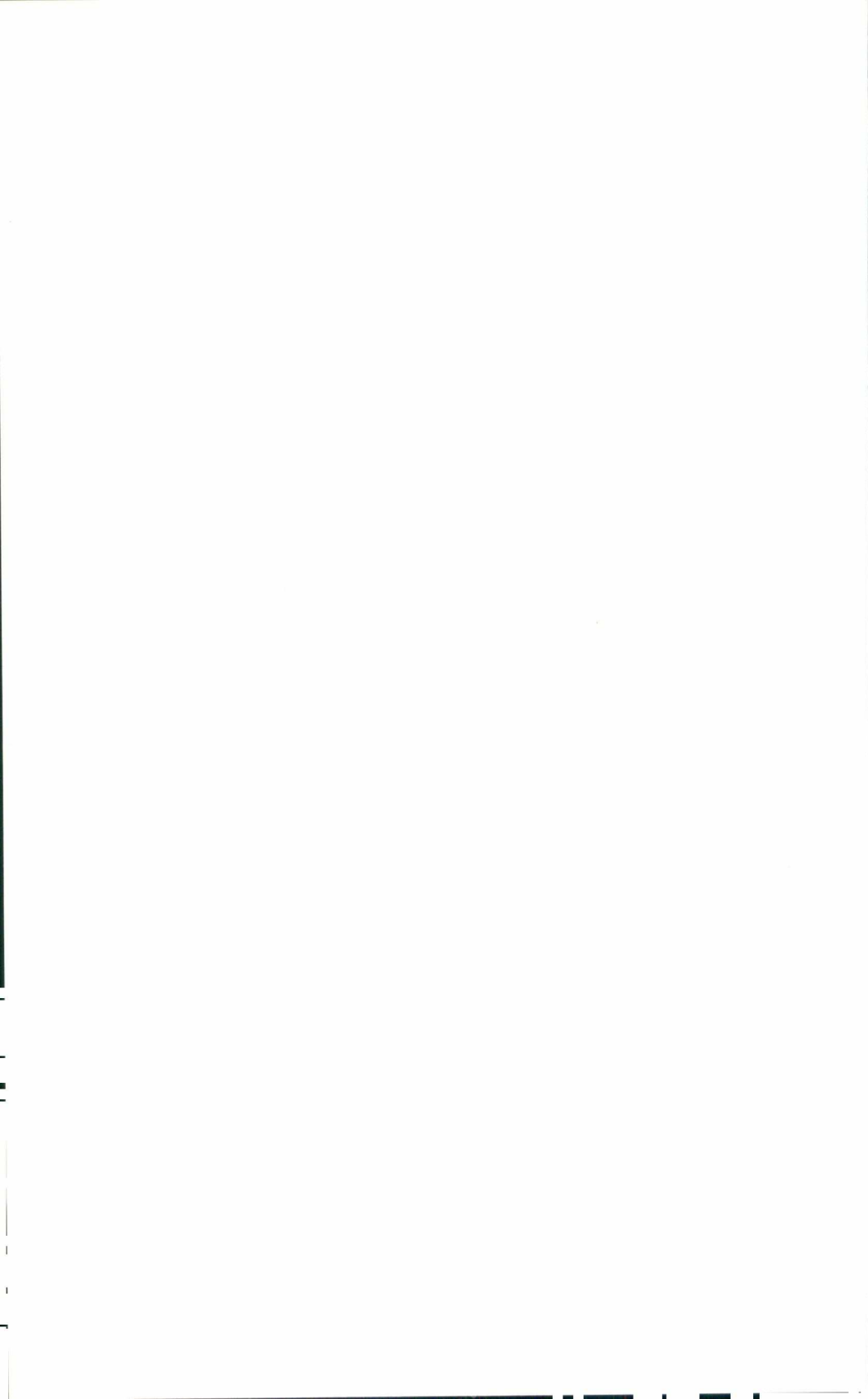
Creo importante reproducir parte del mensaje que don Raúl dijera con motivo del asesinato del ingeniero agrónomo don Hernán Mery, por sectores de derecha cuando cumplía

su deber, como director zonal de la Corporación de la Reforma Agraria, al tomar posesión legal de un predio expropiado por el gobierno en la provincia de Linares:

“A mi consternación como ciudadano por este hecho que ensombrece nuestra convivencia nacional, quiero añadir mi oración de Pastor, en la esperanza de que esta inmolación, como el grano de trigo que se sepulta y muere, llegue a dar abundantes frutos de justicia, en la posesión y goce de la tierra que el Señor hizo para todos”.

Claramente se advierte que don Raúl jugó un papel fundamental en la reforma agraria chilena. Probablemente cualquier análisis objetivo que se efectúe acerca del proceso reformista desde el punto de vista productivo y de sus resultados económicos de corto plazo, no entregue cifras elocuentes, más aún si se considera que todo el profesionalismo y mística que se advirtió en el gobierno de Frei Montalva se derrumbó en el gobierno posterior de Salvador Allende; pero sin lugar a duda la reforma agraria chilena, impulsada por los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Henríquez y por los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, tuvo una trascendencia fundamental en el desarrollo chileno de los últimos años.

Por cierto que tanto don Manuel y don Raúl lograron definitivamente un éxito notable desde el punto de vista pastoral. También se logró la promoción humana y el desarrollo social del campesinado chileno. Hoy prácticamente no existen analfabetos en el sector agrícola como ocurría antes de la reforma agraria cuando cerca del 50% de la población campesina no sabía leer ni escribir, no tenía mayor acceso a la salud, a la tecnología, a la vivienda o a la salud dental, o tener la posibilidad de educar a sus hijos. Hoy día vemos cómo los nietos de esas familias campesinas promovidas por la Iglesia y los gobiernos de Frei y Allende, llegan a la universidad y demuestran que el ser humano, al dejar de ser explotado y humillado, puede llegar a los más altos niveles de desarrollo personal como lo destacaba don Raúl al defender con vehemencia, coraje y decisión la reforma agraria chilena.



CAPÍTULO IX

LA UNIDAD POPULAR AL PODER

A pesar de la gran esperanza que despertó la Revolución en Libertad y sus evidentes logros, el país no estaba satisfecho de los resultados del gobierno de Eduardo Frei Montalva. La participación popular, la reforma agraria, la inequívoca preferencia por los más desposeídos, la dignificación del campesinado, el que ahora disponía de instituciones públicas que lo apoyaba, el vasto plan de construcción de viviendas o el significativo esfuerzo por privilegiar la educación y otorgar oportunidades a quienes no la tenían, no fueron suficientes para mantener en el poder a la Democracia Cristiana por 30 años, como lo decían sus dirigentes en la euforia del triunfo de 1964.

El desarrollo económico fue débil, la inflación endémica no pudo ser controlada y los ingresos reales no mostraron los crecimientos estimados. El país esperaba más, en momentos en que persistía en la conciencia del chileno tendencias ideológicas en que le asignaban al gobierno un papel fundamental en la economía. En la conciencia colectiva existía el convencimiento, en forma mayoritaria, que la responsabilidad de generar políticas públicas positivas y efectivas dependían del gobierno y de sus decisiones.

La derecha que en la elección parlamentaria de 1965, a seis meses de la elección de Frei Montalva, logró obtener un magro 5% del electorado, se había rearticulado en los años siguientes hasta tal punto que en la elección de 1970 su candidato, el ex presidente Jorge Alessandri, logró un 34.9% de los votos contra un 36.2% de Salvador Allende y un 27.8% de Radomiro Tomic, quien representaba, en el papel, la continuidad en el gobierno de la Democracia Cristiana. Allende había conseguido la victoria en su cuarto intento consecutivo.

Así, los partidos Comunista y Socialista llegan al poder por vías democráticas, a fin de llevar a cabo en Chile la estatización de la economía en un claro intento de lograr la propiedad estatal de los medios de producción. El modelo de una economía mixta desarrollada en Chile en los últimos 35 años, daba paso a las teorías de Karl Marx, transformando a Chile en el primer país del mundo que optaba por un gobierno de corte marxista por la vía de una elección democrática, aun cuando hubiese obtenido solo un 36,2% de la preferencia popular. La Democracia Cristiana, antes de aceptar votar por Allende en el Congreso Pleno, como consecuencia de no haber obtenido la mayoría absoluta, paso imprescindible de acuerdo a la Constitución de la época, exigió la firma de un documento que se denominó "Estatuto de Garantías Constitucionales", con el objeto de que el nuevo gobierno marxista respetase normas de convivencia democrática y así no convertir a Chile en una "dictadura del proletariado", situación normal ocurrida en todos los países de la órbita de la Unión Soviética de aquella época, estatuto que no demostró posteriormente tener la efectividad que esperaba ese partido político.

Los obispos de Chile también mostraban su preocupación por la llegada de un gobierno marxista al país. En un extenso documento denominado "Evangelió, política y socialismos", en mayo de 1971, expresaron textualmente:

"En Chile no se está construyendo un marxismo cualquiera sino un socialismo de inspiración marcadamente marxista" y más adelante advertían: "nuestra intención es precisar los excesos antihumanos a que tienden a conducir -por su propia dinámica interior- la doctrina y el método marxista, si se les aplica en forma consecuente con su propia lógica".

La Iglesia, a través de su doctrina social expresada en las encíclicas papales, había criticado abiertamente al capitalismo y el marxismo. En ese mismo documento a que hemos hecho mención, los obispos chilenos reiteraban su compromiso con el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, a la vez que se pronunciaban acerca de los dos modelos, señalando:

“Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la persona humana, pues uno tiende a consagrar la primacía del capital, su poder y su discriminadora utilización en función del lucro; el otro, aunque ideológicamente sostenga un humanismo, mira más bien al hombre colectivo, y en la práctica se traduce en una concentración totalitaria del poder en el Estado”.

Finalmente los obispos al inicio del gobierno de Allende, manifestaban su honda preocupación por el devenir de Chile gobernado por marxistas, cuando expresaron:

“En todos los países socialistas de inspiración marxista, aun cuando en un principio hayan comenzado con sistemas pluripartidistas, se ha llegado al final, al menos prácticamente, a un régimen de partido único, lo que significa la muerte de la democracia, la imposición de un monolitarismo ideológico y el establecimiento de la dictadura de los espíritus, la peor de todas las dictaduras”.

El conglomerado político de la UP asume finalmente el poder el 4 de noviembre de 1970, dando así inicio a lo que el propio gobierno denominó como “La Revolución con Empanadas y Vino Tinto”, para señalar que el modelo marxista que se aplicaría no sería una réplica de los utilizados por la Unión Soviética, sino que sería un experimento criollo. Sin embargo, nadie podría sostener con seriedad, en esos momentos, que el gran objetivo del gobierno se centraría en que los medios de producción estuviesen en manos del Estado. De esta manera el gobierno podría conseguir la apropiación del “excedente económico” que generaban las empresas privadas. Todo el poder del Estado, el que con el apoyo de los sindicatos haría posible, paso a paso, la instauración en el tiempo del modelo ideado por Marx más de un siglo atrás.

Resulta importante destacar, para entender lo que ocurrió posteriormente en materia económica, que la responsabilidad fiscal demostrada por el gobierno de Frei Montalva, bajo la conducción de Andrés Zaldívar, Carlos Massad, Jorge Cauas y Sergio Molina, habían dejado en arcas fiscales un excedente en dólares muy significativo,

incluso muchos culparon al gobierno de Frei de la derrota de Tomic, aludiendo a que si se hubiesen adoptado las medidas que correspondían para el éxito electoral, esos excedentes debieron haber sido utilizados para crear una sensación de bienestar y desarrollo en la gran masa de la población.

Salvador Allende y Pedro Vuskovic, cabeza de su equipo económico, utilizando los importantes excedentes en dólares existentes en arcas fiscales, podían crear una sensación de éxito y bienestar en el corto plazo, objetivo político importante, puesto que la Unidad Popular requería disponer del apoyo de la población para llevar a cabo el proceso de estatización, postulados básicos de los partidos Comunista y Socialista que respaldaban al gobierno marxista.

El control de precios se exacerbó de tal forma que la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), institución estatal dependiente del Ministerio de Economía, más que buscar un precio justo para el natural incentivo económico de los inversionistas, jugó un rol netamente político no autorizando reajustes de precios compatibles con el aumento de costos. De esta forma la política económica intentó lograr de manera muy rápida la plena ocupación de los factores productivos, reajustando las remuneraciones en forma significativa, con el consiguiente respaldo popular, puesto que una masa muy importante de la población activa constató mejorías inmediatas en sus niveles de consumo, produciendo, de paso, una redistribución del ingreso. Como era evidente, esta política podía generar en el corto plazo desajustes importantes entre la oferta interna y el incremento notable de la demanda, situación que en un principio fue resuelta precisamente con los excedentes dejados por Frei Montalva en arcas del Banco Central.

Esta estrategia permitió a la población, a mediados de 1971, apreciar resultados económicos espectaculares. El incremento de la demanda había conseguido efectivamente utilizar en mejor forma la capacidad instalada, con precios bajos controlados por el Estado, con un dólar subsidiado, con emisiones inorgánicas que permitía entregar a una población activa muy dependiente del Estado, aumentos de

remuneraciones, lo que generó resultados económicos sorprendentes, puesto que se pudo apreciar un sentimiento de bienestar generalizado, en especial en los sectores más populares, con una disminución de la cesantía y un aumento en el producto de un 9% para 1971. La expansión monetaria había hecho posible un milagro que hacía pedazos las tesis de los equilibrios macroeconómicos, lográndose resultados desconocidos en la historia económica y con una inflación controlada que no guardaba relación con el hecho de que la cantidad de dinero en la economía prácticamente se había duplicado en 1971, al compararla con la de 1970.

Hasta tal punto estos auspiciosos resultados complicaban políticamente a la oposición al gobierno de Allende, que el ex presidente Eduardo Frei Montalva, en agosto de 1971, envió una carta al equipo económico de su gobierno, recriminándoles por no haberle permitido la expansión monetaria que tan buenos dividendos le estaba reportando al gobierno de la Unidad Popular, lo que le estaba permitiendo, de paso, acelerar su política estatista.

En una parte de su carta, Frei Montalva expresó a los responsables de la conducción económica del país durante su mandato:

“Es un hecho que la expansión del crédito ha revelado que una inyección monetaria al mercado es capaz de estimular el desarrollo, por lo menos en cierta áreas y, por la otra, que las catástrofes previstas no se producen, por lo menos en los tiempos previstos, y aun quienes preveían la catástrofe creen que habría un segundo tiempo capaz de eliminar los precios negativos y quedar un saldo positivo”.

Y a continuación, en esa misma carta, Frei Montalva agregaba que los resultados que mostraba la Unidad Popular demostraban que una expansión monetaria destinada a crear fuentes de trabajo y obras productivas, junto con el aumento de la emisión monetaria para lograr esos laudables objetivos sociales y económicos, no eran perjudiciales para la economía y que realmente el país tenía una capacidad para lograr esa expansión, sin poner en riesgo los equilibrios, logrando

además bienestar y desarrollo. Posteriormente Frei Montalva pudo comprobar cómo la política desarrollada por la Unidad Popular conduciría el país a una de sus más complejas y serias crisis económica, social y política.

Paralelamente con las medidas populistas, el gobierno procedió a efectuar un vasto plan de estatización o intervención de las empresas. Bastaba con que los trabajadores iniciaran una huelga en las industrias privadas o el gobierno, utilizando una reglamentación obsoleta pero vigente desde la Gran Depresión, procediera a la intervención de las empresas. En efecto, a partir de enero de 1971 el gobierno inicia un vasto plan de estatización de las empresas privadas. Utilizaba para ello distintas argucias como calificar a las empresas como monopolios u oligopolios, o productores de bienes imprescindibles de consumo popular, para que el gobierno tomara posesión de ellas. Así, en el año 1971 catorce empresas textiles, que en su conjunto producían más del 50% de los bienes del rubro, fueron expropiadas. Asimismo el gobierno adquirió, intervino y expropió las más importantes empresas carboníferas, las empresas productoras de alimentos, las pesqueras y avícolas, la principal industria cervecera y de bebidas de fantasía, etc. Al cumplirse un año del gobierno de la Unidad Popular el proceso estatizador había avanzado vertiginosamente. Otro tanto ocurrió con la banca comercial, puesto que al 20 de septiembre de 1971 la CORFO controlaba el 57.2% de las acciones de la banca privada. También la política de estatizar a destajo, incorporó los rubros de transportes y servicio, amén de numerosas empresas en el área de la distribución, e incluso de esparcimientos.

Al 11 de setiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, las empresas estatizadas o intervenidas por la Unidad Popular alcanzaban a 507. Se estaba logrando por esta vía la propiedad estatal de los medios de producción, incluyendo la aceleración del proceso de reforma agraria pero ahora con las tierras en manos del Estado. El gobierno esperaba que a través de los excedentes económicos que se producirían, los que antes eran de propiedad de los dueños, hoy serían de

los trabajadores a través del Estado y con ello financiar la inversión pública y así lograr incrementar la capacidad productiva.

El Presidente Allende manifestó en cierta oportunidad:

“A través de CORFO y gracias a sus atribuciones legales, el Estado ha tomado el control de numerosas empresas y actividades económicas que constituyen centros estratégicos en la conducción del complejo sistema económico. Se ha ido formando el área de propiedad social”.

El vertiginoso empeño de la Unidad Popular por estatizar todo el sistema productivo, transformó a CORFO en un instrumento de la función política destinada a estatizar la industria y la banca, dejando de lado las tareas de investigación, fomento y desarrollo que habían sido los objetivos iniciales del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, al crearla en 1939. Se había desvirtuado el rol de una institución que tan buenos resultados había entregado a Chile y su pueblo.

Sin embargo, lo que ocurrió fue una situación absolutamente distinta a las expectativas del gobierno, puesto que entregadas la administración de las empresas productoras y las del sector agrícola a funcionarios inexpertos, sin capacidad gerencial y designados principalmente por su adhesión política a los postulados marxistas, muy pronto se pudo apreciar que tales excedentes no se produjeron, sino que al revés.

En efecto, las empresas dejaron de pagar impuestos a las utilidades ya que empezaron a producir pérdidas, ya sea por una pésima gestión o por la falta de control de ellas como consecuencia que ya no importaba dar cuenta a nadie de sus resultados. Otro tanto ocurría con los precios fijados por el gobierno, los que en muchos casos no cubrían los costos. Todo esto obligó al ministro de Hacienda a destinar, del escuálido presupuesto fiscal, enormes recursos para subsidiar las grandes pérdidas del sector público, recurriendo al Banco Central para que mediante el expediente de la emisión inorgánica se pudiesen saldar los enormes y crecientes déficit que mostraba el aparato estatal.

Obviamente que con este panorama interno, que fue la característica del año 1972, las cifras de inversión tanto pública como privada habían disminuido a niveles desconocidos en la historia económica de Chile. Los medios de producción y la tecnología no se reemplazaban, produciéndose un evidente deterioro de ellos. No había dólares para la adquisición de los repuestos necesarios, las pocas divisas disponibles no eran suficientes para adquirir siquiera los alimentos que el pueblo reclamaba. La emisión había multiplicado por cuatro veces la masa monetaria; la gente disponía de papel moneda, de billetes, pero no había bienes en qué utilizarlos. Los precios seguían bajo el férreo control de DIRINCO y así obviamente se produjo a mediados del año 1972 y durante todo el período de 1973 desabastecimiento generalizado.

Con este panorama obviamente que los índices de crecimiento empezaron a cambiar de signo, la inflación pasó a ser incontrolable, el mercado negro dio inicio a su reinado de caos y corrupción. El país se desmoronaba a pasos gigantescos, puesto que no tan solo había que financiar el déficit de las empresas públicas, sino que ahora había que incluir a todas aquellas que habían sido estatizadas, no existiendo los recursos que se necesitaban ni para las unas ni para las otras. A lo anterior había que agregar el descenso en la producción agrícola, requiriendo el país cada vez de mayor cantidad de dólares para importar los alimentos que se necesitaban con urgencia; otro tanto ocurría con la producción minera y la industrial, la deuda externa aumentaba, la construcción de viviendas y obras públicas iban en claro descenso, la emisión de dinero que había sido de 8.700 millones de escudos en 1970, llegó a ser de 216.000 millones en 1973, la inflación se encontraba desatada y sin control. Los encuestadores del IPC, al no encontrar en el mercado los productos que componían la canasta, para determinar el aumento de los precios mantenían el valor vigente en la encuesta última. Por otra parte estaba el mercado negro, imposible de cuantificar, para poder determinar lo que efectivamente estaba pagando la población chilena para abastecerse de los bienes necesarios para subsistir. Las cifras del Índice de Precios al por Mayor marcaron un crecimiento de 1.147% para 1973,

valor que incluye los cuatro meses de gobierno militar en donde se “sinceraron los precios”.

Resulta importante destacar el apoyo de la Central de Inteligencia Americana (CIA) a los gremios que fustigaban al gobierno de Allende. La intervención de los Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon, en esa época, desarrolló una estrategia de apoyo económico a la prensa, los gremios y a los partidos políticos opositores a la Unidad Popular. Este hecho, sumado a los propios errores del gobierno de Allende, crearon un clima de gran convulsión social ante las graves dificultades económicas que vivía el país. Por su parte el Partido Socialista adoptó una política de total intransigencia en la búsqueda de alguna solución transada con la oposición que significara un cambio en la línea revolucionaria y de confrontación social que los socialistas proponían a ultranza.

Ciertamente que la población se encontraba ya hastiada del experimento marxista. La búsqueda permanente del cambio revolucionario no había resuelto los problemas del desarrollo, sino que al revés, los había acentuado, encontrándose el país francamente en la bancarrota al momento de producirse el golpe militar.

El cardenal Silva y los obispos chilenos observaban con angustia los acontecimientos que estaban ocurriendo y con vehemencia entregaron un mensaje a Chile en abril de 1973, expresando en parte de él:

“Las envidias, los odios, las luchas que la desangran, las pasiones desatadas que los acosan, ponen en el rostro de nuestra patria, la corona de espinas, los golpes, los salivazos que también han desfigurado el rostro de Cristo”.

Y más adelante, elevando su voz con vehemencia, criticaban abiertamente el estado de descomposición social a que se había llegado en dos años y medio del experimento marxista expresando:

“Vemos con inmensa aflicción y pena que en la prensa diaria con grandes titulares se invita a la violencia, a la desconfianza, a la enemistad”.

“Vemos que en el mundo del trabajo, en vez del entendimiento y la cooperación entre hermanos, prevalece una lucha de clases cargada de odios y de violencias”.

“Vemos que la juventud, que anhela vivir los nobles ideales de justicia y fraternidad, es utilizada por unos y otros y es lanzada a la misma lucha de odios y violencia que viven los adultos”.

“Vemos que en los grandes debates públicos en vez de buscarse honestamente la verdad y las soluciones que hagan posible la convivencia y mejoren realmente la vida social, se trata a toda costa de desprestigiar a los adversarios con la mentira y la injuria imposibilitando escuchar la voz del pueblo y oír sus legítimos anhelos”.

“En el servicio público y en el comercio vemos que el desabastecimiento y el mercado negro hacen cada vez más difícil la vida de los ciudadanos y, particularmente, de los más pobres”.

“El libertinaje, la pornografía, el aumento desmedido de la criminalidad sexual, junto con hacernos constatar una especie de escapismo ante la realidad, nos hacen temer la pérdida de las mejores energías del pueblo y la depravación de la juventud”.

De nada sirvió el vehemente llamado de don Raúl y los obispos. El gobierno seguía su marcha con el manoseado eslogan de “avanzar sin transar”. Avanzar hacia la “dictadura del proletariado” a pesar del deterioro popular que la imagen del gobierno estaba generando en la opinión pública. Incluso en junio de 1973 los trabajadores del cobre de El Teniente, tradicionalmente partidarios de los partidos marxistas, marcharon sobre Santiago para manifestar su protesta ante el estado de situación que vivía el país.

En ese mismo mes, el 1 de junio de 1973, el cardenal Silva Henríquez firma, en conjunto con otros obispos, un documento que llevó por título: “Solo con amor se es capaz de construir un país”. En parte de esa declaración se dijo:

“Estamos preocupados por la marcha del país, por el desarrollo de los acontecimientos. Nos duele ver las largas colas de chilenos –las millones de horas que se

pierden cada semana- sufriendo la humillación de vivir en esas condiciones. Parece un país azotado por la guerra”.

“Nos preocupa el mercado negro, desatado por la inmoralidad de quienes negocian en forma injusta con los alimentos y otros productos esenciales”.

“No aprobamos, por principio, el éxodo de profesionales. El país debe encontrar caminos realistas y verdaderos para evitar esta sangría. Es deber moral de todo chileno permanecer en la tierra que lo vio nacer y le proporcionó su profesión”.

“Nos preocupa que los medios de comunicación no sean veraces y sobre todo que inciten al odio. Al destruir la verdad y el amor faltan a sus deberes fundamentales, son inmorales”.

“Contemplamos, con angustia, la inflación que nos invade en forma creciente de día en día y la crisis de nuestra economía”.

“En estos días presenciamos el problema de los mineros del cobre de El Teniente, con las implicaciones que tiene en la vida sindical, en la marcha de la economía. Condenamos la violencia que crece en este conflicto laboral y pensamos en los sufrimientos que habrían podido evitarse”.

“Entendemos que el mal está más allá de las palabras, y que no bastan consejos de bondad. Sabemos que el papel de la Iglesia no es dar soluciones técnicas, pero queremos aportar algunas reflexiones que pueden iluminar la situación que vivimos, sin pretender decirlo todo”.

Y a continuación señalaban don Raúl y los obispos:

“Socialismo y Capitalismo son dos expresiones ideológicas que se han convertido en símbolo. Querer reducir todo el problema chileno a estas dos palabras es una simplificación que no se ajusta a la verdad. La realidad es mucho más compleja que los símbolos y sistemas, porque los hombres somos mucho más que una palabra”.

“Vivimos realidades mezcladas con mitos, con utopías, y no basta repetir una palabra para creer que todo está solucionado”.

“Hasta ahora en Chile la palabra socialismo representa un sistema bastante indeterminado. Y tampoco es posible dar el nombre de capitalismo a todo lo existente hoy día”.

“No puede estructurarse la sociedad partiendo del principio que somos un conjunto de enemigos. La paz no vendrá del dominio de un grupo sobre otro. El bien de la sociedad requiere el aporte y la colaboración de todos y el pleno reconocimiento de todos los derechos. Lo exige la justicia; y solo sobre la justicia puede cimentarse la paz”.

“Pedimos buscar más lo que nos reúne y no lo que divide. Nos parece necesario servir más a los hombres concretos, con nombres y con rostros, antes que jugar con definiciones o palabras. Valen más los hombres que los sistemas; importan más las personas que las ideologías. Las ideologías dividen; la historia, la sangre, la lengua común, el amor humano y la tarea semejante que los chilenos tenemos hoy deben ayudarnos a formar una familia. Nuestra palabra no tiene otro objetivo ni otra esperanza que la de ayudar a mirarnos como iguales, como hermanos. No merecemos vivir en la angustia, la incertidumbre, el odio o la venganza”.

El mensaje de la Iglesia y del propio cardenal Silva no podían ser más claros y precisos en momentos de tanta convulsión y preocupación por el devenir de la patria.

CAPÍTULO X

EL GOBIERNO MILITAR Y EL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL

Al momento del golpe militar, el 11 de setiembre de 1973, el colapso de la gestión económica del gobierno de la Unidad Popular era claramente visible, incluso para los partidarios más acérrimos. Todas las cifras mostraban graves desequilibrios macroeconómicos, una inflación incontrolable, una balanza comercial y de pagos con evidentes desajustes estructurales, cuentas fiscales que no resistían ningún análisis, desabastecimiento generalizado y largas colas para adquirir los bienes de consumo imprescindibles. El gobierno socialista había creado el sistema denominado "Juntas de Abastecimientos y Precios" (JAP), las que proporcionaban, especialmente alimentos, en forma discrecional, preferentemente a las juntas de vecinos que respaldaba al régimen marxista.

Todo ello hizo posible la aparición de un mercado negro desatado en donde los acaparadores y algunos funcionarios públicos, en concomitancia con algunos comerciantes, obtenían importantes e inescrupulosas ganancias. El dólar era tremendamente apetecido, no solo en consideración a su escasez, sino que principalmente como consecuencia que los sectores medios y más pudientes por el temor a la consolidación de una economía marxista, vendían sus bienes y propiedades para adquirir dólares, en momentos que la única forma de hacerlo era en el mercado negro. Las disposiciones legales de esa época obligaban a que toda tenencia de dólares o divisas debía ser administrada en forma exclusiva por el Banco Central, por lo que se encontraba prohibida su tenencia en manos de particulares, los que arriesgaban penas punitivas en caso de ser sorprendidos con ellos.

Al momento del golpe militar el dólar se cotizaba en el mercado negro a razón de E° 3.300 por dólar cuando el

cambio oficial determinado por el gobierno tenían valores diversos de acuerdo al tipo de transacción que se efectuara, partiendo en E°12 por dólar. Para disponer de un nivel de comparación que muestre la magnitud de las distorsiones que se habían generado, basta un ejemplo: el día del golpe un litro de gasolina tenía un valor de E° 3, precio fijado por el Estado, y por lo demás muy difícil de obtener en la red nacional de distribución de combustibles como consecuencia del desabastecimiento. O sea, con un dólar se podían adquirir 1.100 litros de gasolina.

Esta caótica situación afectó a la gran mayoría de los chilenos y también a los propios adherentes del experimento marxista. Quizás lo más gráfico acerca del sentimiento que embargaba en esos momentos a quienes aún apoyaban a Allende, lo constituyó un vistoso cartel que un trabajador llevaba en sus manos en las últimas movilizaciones convocada por la Central de Trabajadores, el que textualmente decía: *“Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”*.

Pienso que ningún observador de la historia económica de Chile durante el período de la Unidad Popular podría discutir que la grave y colapsada economía que afectaba en forma tan brutal a la población, en septiembre de 1973, fue el detonante más gravitante en el quiebre del sistema democrático chileno, del cual nos sentíamos muy orgullosos, en especial cuando se hacía un análisis comparativo con el resto de las naciones de Latinoamérica.

Antes del colapso que motivó el golpe de Estado un grupo de economistas opositores al gobierno de la Unidad Popular trabajaron en la confección de un extenso documento denominado “El Ladrillo”, en consideración a sus características volumétricas, el que había sido solicitado reservadamente por la jefatura de la Armada al economista Emilio Sanfuentes, quien, sin mencionar a nadie que la petición provenía del almirante José Toribio Merino, uno de los militares más proclives al golpe de Estado, se preocupó de aglutinar a los más destacados economistas de oposición a fin de elaborar un programa económico alternativo. La mayor parte de los economistas que participaron en su confección pertenecían a la Universidad Católica de Chile, con

estudios posteriores en la Universidad de Chicago, pero también participaron economistas de la Universidad de Chile, muchos de los cuales adherían en esos momentos a la Democracia Cristiana, quienes también habían estudiado, en su gran mayoría en la Universidad de Chicago.

Desde diciembre de 1972, cuando fueron convocados por Emilio Sanfuentes, al día del golpe en septiembre de 1973, habían transcurridos nueve meses de un trabajo sistemático, en el que se fueron incorporando, durante 1973, especialistas en diversas áreas sectoriales. Aun cuando muy probablemente ninguno de los que intervinieron conocía íntegramente el documento, dado su gran volumen, en todos los participantes de los estudios sectoriales había unanimidad de criterio en orden a que el modelo de desarrollo que se había comenzado a construir institucionalmente a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, había colapsado, y que el "Programa de Desarrollo Económico" (título oficial de "El Ladrillo") se proponía incorporar un modelo sustentado en el libre mercado, consensuado por economistas de distinto signo político, quienes pensaban que la libertad económica y la libre iniciativa resolverían de mejor forma que el proteccionismo estatal los agudos problemas de miseria y pobreza en que se debatían millones de compatriotas, males endémicos que ningún gobierno había sido capaz de resolver. Chile había sido un gran laboratorio económico donde se habían implementado políticas de muy diversa connotación económica social, de signos políticos muy distintos a partir de la Gran Depresión, hasta el 11 de septiembre de 1973. Un hondo sentimiento de frustración nacional embargaba el alma de Chile en los angustiosos hechos que marcaron la historia patria, en tantos años de convulsión social y de esperanzas frustradas.

Del proteccionismo de Aguirre Cerda al estatismo de Allende, el país desembocaba nuevamente en el libre mercado, en la libertad de precios. Adam Smith se imponía a Karl Marx, para decirlo en términos simplistas. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia económica y los resultados que mostraban las economías de corte socialista y los modelos capitalistas en todo el mundo, habían recorrido un largo camino

que había marcado de alguna forma u otra el devenir de Chile en 40 años de su historia.

El país, hasta el día del golpe, se había familiarizado con el control de precios, la protección desmedida a la industria manufacturera nacional y la existencia de un Estado fuerte que intentaba regular la actividad económica, bajo el supuesto que las decisiones del Estado garantizaban de mejor forma el desarrollo y la equidad distributiva que la iniciativa privada y los medios de producción de propiedad común.

Pocos días después del golpe, la Junta de Gobierno decide efectuar un cambio en el Ministerio de Economía. Reemplaza al general Rolando González por Fernando Léniz Cerda, justamente a los 30 días del gobierno militar, un 11 de octubre de 1973. Cuatro días más tarde la Junta de Gobierno promulga un decreto que disponía la libertad de precios. De la noche a la mañana cambiaba absolutamente el sistema de control y fijación de precios, tan arraigados en la mentalidad de los consumidores y los productores chilenos. Los centenares de ingenieros y especialistas con que contaba la DIRINCO, para fijar los precios de más de 3.500 productos diferentes, fueron despedidos. Ahora sería la libre competencia, la oferta y la demanda los encargados de determinar los precios en la economía.

Otro hecho relevante, que marcaría el cambio de rumbo en el modelo económico, lo constituyó la determinación de un tipo de cambio único para cualquier operación de comercio exterior, eliminando los cuantiosos tipos de cambio diferentes fijados por la autoridad y destinados a controlar la inflación a fin de no aumentar los precios de los productos básicos como la harina y otros bienes finales o intermedios, destinados a dar protección a los sectores productivos. Al momento del golpe militar el dólar podía valer 12 escudos para la importación de determinados bienes, hasta los 3.300 escudos en el mercado negro. La política cambiaria durante la Unidad Popular había sido un desacierto que solo se puede explicar por las especiales y extremas condiciones que vivía el país.

Las medidas que estaba adoptando el nuevo equipo económico designado por el gobierno no contaban con el apoyo de todos los sectores que habían respaldado el golpe militar. Habían concepciones distintas y por cierto que el fantasma del proteccionismo y la fijación de precios seguían latentes; no en vano habían transcurrido 40 años de proteccionismo estatal. No resultaba fácil esperar que tanto los consumidores como los productores asimilasen con entusiasmo las nuevas políticas que se estaban implementando.

El primer año de gobierno no fue fácil, precisamente por la coexistencia, entre los partidarios del golpe, de posiciones económicas y políticas no consensuadas. No todos los sectores respaldaban "El Ladrillo" de Emilio Sanfuentes. En la propia Junta de Gobierno existían diferencias importantes, en especial las que representaba Gustavo Leigh. En el equipo económico del gobierno empezaron a surgir también diferencias no tan solo en cuanto a las medidas que se adoptaban y su drasticidad, sino que además por el camino abusivo que adoptaban los organismos represivos creados por el Estado. Lo anterior constituía para algunos afrontas morales y éticas inaceptables. Para otros, además de lo anterior, estaba trayendo como consecuencia una animadversión internacional hacia Chile que lo aislaba y le impedía insertarse internacionalmente y disponer de colaboración mutuas y principalmente la llegada de inversionistas extranjeros que impulsaron el desarrollo nacional.

Por otra parte estaba claro que Pinochet no aceptaba que su equipo técnico opinara acerca de su estrategia política y su decisión de reprimir con drasticidad a la población civil. Los partidos políticos habían sido clausurados. No existía prensa opositora y los partidarios del régimen de la Unidad Popular eran encarcelados, torturados y miles de ellos engrosaron filas de los que se denominaron "detenidos desaparecidos".

El cardenal Silva y el Episcopado observaban con atención los acontecimientos. En su declaración pública del mismo día del golpe instaban a los militares a recuperar la convivencia nacional, a respetar los derechos logrados por

los trabajadores, restaurar el orden institucional y retornar a la democracia al más breve plazo posible.

Sin embargo, tanto en los hechos vinculados a la profunda violación de los derechos humanos como también a las políticas económicas que se estaban llevando a cabo, los resultados mostraban cada vez mayor desempleo, miseria y frustración. El Cardenal y los obispos se mostraban cada vez más decepcionados por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos a fines del año 1974.

El gobierno tampoco estaba satisfecho con los resultados económicos. El fuerte déficit fiscal heredado del gobierno de Allende, el que se financiaba principalmente con emisión inorgánica de dinero, generaba inflación y un círculo vicioso difícil de romper. A pesar de que muchos empresarios y también algunos militares estimaban que era necesario retornar a las viejas fórmulas proteccionistas, Pinochet en particular decidió respaldar a aquellos que proponían un aceleramiento del cambio drástico liderado por Sergio de Castro y Jorge Cauas, en desmedro de lo que planteaban principalmente los democristianos que respaldaban a la Junta entre los que se encontraban Carlos Massad, Andrés Sanfuentes y Juan Villarzú, encabezados por Raúl Sáez, hasta ese momento el hombre fuerte en el área económica del gobierno militar. Ellos no tan solo no compartían la estrategia económica, planteando la necesidad de graduar el modelo de libertad económica, sino que además estaban convencidos que la sistemática violación a los derechos humanos no solo resultaba inaceptable desde el punto de vista moral, sino que además constituía un freno evidente en la posibilidad de un desarrollo económico y social efectivo mirando el futuro. Por su parte el ministro Léniz se encontraba dubitativo, puesto que por una parte aceptaba los argumentos de Raúl Sáez y los que deseaban rectificar el rumbo del modelo y, por otra, también compartía la estrategia que con pasión defendía Sergio de Castro, Álvaro Bardón, Hernán Büchi, Juan Carlos Méndez y otros.

En el mes de noviembre de 1974, Pinochet reemplaza al ministro de Hacienda Lorenzo Gotuzzo, un almirante designado por la Junta en septiembre de 1973, sin mayores

conocimientos de economía, por Jorge Cauas, un ingeniero que había sido vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Frei Montalva, vinculado a la Democracia Cristiana, quien se había incorporado al Instituto de Economía de la Universidad Católica en 1971, donde trabajó amistad con Sergio de Castro. Además, Jorge Cauas había sido presidente de la Acción Católica, por lo que era conocido por el cardenal Silva Henríquez, el que se alegró por esa designación. El nombramiento de Cauas significó el triunfo de los partidarios de acentuar los cambios de libertad económica a fin de seguir aceleradamente con las transformaciones que tendieran a liberalizar la economía y los mercados.

Sergio de Castro asume, al mismo lugar, el Ministerio de Economía, por lo que la estrategia de desarrollo económico quedaba entregada decididamente a un grupo que solo deseaba cambiar a ultranza las viejas estructuras proteccionistas sin hacer cuestión alguna a los graves problemas de los derechos humanos. Este hecho no era menor, puesto que para Pinochet nunca resultó aceptable que sus subalternos en el área económica, se inmiscuyeran en ellos, aun con el argumento que las relaciones internacionales con los países desarrollados serían de gran utilidad para el modelo económico que se deseaba implantar vigorosamente.

La preocupación de la Iglesia por estos acontecimientos estaba a la vista en Chile y en el mundo. Los obispos no solo levantaban su voz reclamando justicia y paz, manifestando con claridad sus puntos de vista, sino que además, mediante la directa acción del cardenal Silva, se había creado bajo el alero de las iglesias de diverso signo religioso el Comité Pro Paz para defender a los perseguidos políticos por el régimen militar.

Posteriormente, y bajo el control directo del Arzobispado de Santiago, don Raúl creó la Vicaría de la Solidaridad. Con coraje y valentía la Iglesia de Santiago se convirtió en la "voz de los sin voz" brindando apoyo legal y protección a los miles de perseguidos por una dictadura implacable. Ante el giro que estaban tomando los acontecimientos y en vista de su amistad con Jorge Cauas, el Cardenal decide invitarlo a almorzar a su casa. Don Raúl tenía la esperanza de encon-

trar eco a sus preocupaciones acerca de los estragos que estaban causando en los más pobres el modelo económico y la persistente violación a los derechos humanos, confiaba en encontrar a un católico comprometido que entendiera los puntos de vista de la Iglesia. Sin embargo, el Cardenal reconocería más tarde que esa reunión no logró ningún acercamiento efectivo entre la Iglesia y el gobierno. Por el contrario, el 24 de abril de 1975, por cadena de radio y televisión, se dio a conocer públicamente lo que se denominó el "Plan Cauas", el que había sido ideado bajo la conducción de De Castro y Cauas, quien anuncia un conjunto de drásticas medidas tendientes a imponer por la fuerza de las armas el modelo económico en que ellos creían. Por cierto que no les fue fácil lograr el apoyo de la Junta y el Comité Asesor, pero finalmente Pinochet los apoyó, aun cuando no todas las medidas que se anunciarían ese 24 abril él las compartiera absolutamente.

El Plan Cauas era definitivamente drástico y aceleraba las reformas iniciadas a partir del golpe de Estado. Entre otros objetivos se pretendía reducir en forma drástica el gasto fiscal. La política gradual iniciada un año antes no había dado los resultados previstos. Se aceleró la baja de aranceles, se obligó a todas las instituciones públicas a reducir aún más de lo que había sido aprobado en el presupuesto el gasto público en un 15% en moneda nacional y en un 25% en dólares. Las plantas de personal, como consecuencia de estas medidas, significó disminuir el tamaño del Estado en un 30%, se anunció el aceleramiento en la venta de las empresas estatales no estratégicas, la liberación de las tasas de interés dejándole al libre juego del mercado, el aumento del impuesto a la renta, el autofinanciamiento a las pocas empresas estratégicas que quedaban en manos del Estado. Todo lo anterior destinado no tan solo a liberalizar la economía, sino que además destinadas a reducir la rebelde inflación.

Los resultados de esta política de *shock* significó a diciembre de 1975 que la producción industrial se redujera en cerca de un 30%, que el desempleo superara el 20% de la población activa al incorporarle el sistema de empleo míni-

mo entrenado por el gobierno a través de los municipios, el Producto Interno Bruto cayó en un 13% y las tasas de interés real cobradas por el sistema bancario alcanzó a un 117% por sobre la inflación, según indica un estudio preparado por Roberto Zahler para el Instituto Latinoamericano de Mercados de Capital.

Por cierto que estos resultados golpearon duramente a los chilenos, en especial a los más pobres. Los principales líderes empresariales, incluyendo al ex presidente Jorge Alessandri, se manifestaban en contra del modelo impuesto a sangre y fuego por De Castro y Cauas. Por otra parte al propio Comité Asesor, ante estos resultados tan desastrosos, emitió un informe en donde criticaba las medidas adoptadas y planteaba la necesidad de incorporar severas correcciones al modelo.

Los obispos también se pronuncian en contra de las medidas adoptadas, centrando su análisis, en la cuaresma de 1976, a las altas tasas de interés. El cardenal Silva, por su parte, señaló textualmente en esa oportunidad:

“La usura ha resurgido y proliferado como dramática consecuencia e ilustración del proceso materialista y ateo, que hace del dinero un absoluto y del lucro el móvil de todas las relaciones sociales y económicas, un ídolo al que todo se sacrifica” y agregaba: “la usura es un práctica que la Iglesia ha condenado y reprobado sistemáticamente, por más que cambien las circunstancias de hecho y los regímenes económicos”.

Poco antes, en la homilía del 18 de septiembre de 1975, con la presencia de la Junta Militar y sus ministros, entre los que se encontraban Jorge Cauas y Sergio de Castro, don Raúl les dijo:

“Todo esto vale particularmente cuando se pretende fundar un orden socioeconómico, político y cultural nuevo, de inspiración nacionalista y cristiana. Su elaboración y orientación requiere el aporte de todos los ciudadanos y, en forma especial, de quienes ‘cargan con la mayor cuota de los sufrimientos’. Es su deber. Y consecuentemente, tiene el derecho de que se les pro-

porcionen o reconozcan los medios para cumplirlo. Es, también, condición indispensable para toda auténtica reconciliación: 'La reconciliación en la sociedad y los derechos de la persona exigen que los individuos tengan una influencia real en la determinación de sus propios destinos. Tienen derecho a participación en el proceso político, con libertad y responsabilidad' (Mensaje del Santo Padre y de los Obispos del Sínodo, Octubre 1974)".

"Este derecho y deber están íntimamente relacionados con otro, que ha sido siempre un pilar fundamental en la doctrina de la Iglesia: el derecho de los trabajadores a asociarse y hacer escuchar libremente su voz".

Por cierto que las opiniones de los obispos y la del cardenal Silva no fueron escuchadas. Don Raúl no era un técnico, no tenía estudios en la Universidad de Chicago.

Posteriormente, con motivo del 1º de mayo de 1976, en un extenso documento entregado a los trabajadores en otros alcances, les dijo:

"Los Papas y el Episcopado han denunciado la voracidad insaciable del liberalismo económico y la servidumbre deshumanizante del comunismo ateo.

"Esta fiesta testimonia, también, que la Iglesia no se olvida de su cuna. El hijo del carpintero participó largos años del trabajo y fatiga de quien era su padre a los ojos de los hombres. Más tarde, cuando ya era el Maestro, manifestaría por eso una espontánea predilección hacia quienes mojan con su sudor -y a veces con sus lágrimas- el escaso pan de cada día".

En clara alusión a los trabajadores y dirigentes que fueron brutalmente reprimidos por la dictadura, muchos de ellos directamente asesinados o enrolando la legión de detenidos desaparecidos, les dijo ese 1 de mayo de 1976:

"Ni el trabajo ni el trabajador le son extraños a la Iglesia. Están en el centro mismo de su corazón. Ella sabe el lento y doloroso camino que millones de trabajadores han venido recorriendo en busca de su dignidad. Y en ese itinerario, sembrado de tantos obstácu-

los, enrojecido a veces por víctimas cruelmente inmoladas –como lo recordamos cada Primero de Mayo– en ese itinerario de progresiva liberación ha estado presente la Iglesia, señalizando, iluminando el camino, alimentando la esperanza, urgiendo amor y justicia”.

“Lo ha hecho siempre. Y tendrá que hacerlo siempre. Es parte de su tradición y parte de su misión, irrenunciables las dos. Hace 85 años esa tradición, que arranca de la Iglesia apostólica, tomó cuerpo doctrinal en la Encíclica *Rerum Novarum*, del Papa León XIII. Fue un grito, una apasionada defensa del más precioso patrimonio de la Iglesia: la dignidad inviolable del hombre, redimido por la Sangre de Cristo. La dignidad, también y sobre todo, de la persona y derechos del trabajador, siempre más expuesta a ser profanada”.

Posteriormente, refiriéndose al modelo económico que estaba generando desigualdades inaceptables y al clima de represión y atropellos sistemáticos a los derechos del hombre, les dice:

“Ha denunciado, como escandalosa, la coexistencia del lujo y la miseria, del poder sin límites de anónimas minorías y la marginación de grandes mayorías; los abusos del poder político y económico, los atropellos –múltiples y sutiles– al derecho a la vida, a comer, a creer, a saber, a decir”.

Don Raúl con coraje y valentía, en momentos que muchos callaban, cuando no existía prensa libre, no había libertad de expresarse, él se manifiesta diciendo:

“No ha sido en vano. Podemos hoy constatarlo. Lentamente la conciencia de la Humanidad se ha ido impregnando de este aliento que brota desde el Evangelio, anunciado por boca de la Iglesia. Pero hay que exhortar, y urgir, y predicar con ocasión o sin ella, porque el corazón del hombre no se abre espontáneamente al amor. La Iglesia ha recibido muchas veces el rechazo, la incomprensión y el escándalo de quienes pretendían beneficiarse con las situaciones denunciadas. ¡Cuántas veces se ha querido hacerla callar o reducir el alcance de su voz a los límites del templo o

descalificaría como intrusa en materias que escaparían a su competencia”.

En muchas ocasiones la derecha y ahora los militares respaldados por ella, tildaban al cardenal Silva de “cura rojo” o “vendido al marxismo”. A los militares les había parecido inaceptable que don Raúl en una conferencia de prensa dada en la Casa Salesiana de Roma, hubiese señalado, apenas producido el golpe, que la Iglesia había ofrecido al gobierno militar la misma colaboración que en su oportunidad entregara al gobierno marxista de Salvador Allende en todas las obras de bien común. Los militares no aceptaron la comparación y procedieron a publicar una y otra vez fotos de los actos del 1 de mayo, donde don Raúl aparecía junto a Allende para mostrar la supuesta concomitancia del Cardenal con el régimen marxista. Muchos fueron los ataques que recibió don Raúl por su defensa de la dignidad humana y en especial la de los trabajadores. Por ello, don Raúl aprovechó la ocasión de un 1 de mayo para decir:

“¡Cuántas veces se la ha acusado de estar sirviendo o de haber sucumbido al marxismo, solo por salir en defensa del derecho de los desvalidos, por hacer suya la preferencia de Cristo por los pobres, por creer y proclamar que todos los hombres tienen el mismo derecho a vivir humanamente! ¡Qué inexplicable ceguera es la que no permite ver que así, tachando de marxista a todo aquel que lucha por el pobre, se arroja en brazos del marxismo a la gran masa de los desposeídos y desesperados!”.

“Pero es inútil: la Iglesia no puede callar. Sería como traicionarse a sí misma. Sería, también, dejar al hombre, a la Humanidad, sin su conciencia. Y sin la voz de la conciencia el hombre se pierde, ya no es capaz de distinguir entre el bien y el mal”.

En enero de ese año 1976, el papa Pablo VI publicó la exhortación apostólica que llamó “*Evangelii Nuntiandi*”.

El documento impactó muy hondamente a don Raúl, puesto que el Papa se hacía cargo de los avances del Concilio Vaticano “en el que el Cardenal tuvo tan destacada participación y energía, como una síntesis nueva, iluminadora y

estimulante. Sustentada en esa exhortación, el Episcopado de Chile entregó en marzo de ese mismo año las "Orientaciones Pastorales" en la que los obispos declararon el deseo fervoroso de que la Iglesia viviese valores cruciales en la hora histórica que vivía el país: el aliento de la esperanza, la afirmación de la verdad, la proclamación de la libertad y la expresión del amor en la solidaridad.

Sustentado en estos valores don Raúl expresó ese 1 de mayo:

"Cuando la Iglesia aplica las exigencias del Evangelio o de la ley natural a la vida concreta, personal y social, nacional e internacional; cuando denuncia e invita a combatir situaciones muy concretas de injusticia; cuando anuncia y da testimonio de la liberación a millones de hombres condenados a quedar al margen de la vida, y ayuda a que esa liberación nazca y sea verdadera, total, ella no invade un terreno extraño: está cumpliendo con su tarea primordial: evangelizar. 'No se puede aceptar -nos decía recientemente el Santo Padre- que la evangelización olvide las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad'. (Discurso de apertura a la 3ª Asamblea General del Sínodo de Obispos, 27-XI-74. Citado en *Evangelii Nuntiandi*, n. 31)".

"Vivimos una etapa muy decisiva de nuestra historia. Muchas de nuestra formas de vida institucional aparecen cuestionadas o en proceso de transformación. En la medida en que dichas transformaciones se prueben indispensables para nuestro desarrollo y favorezcan nuestra unidad, ningún chileno querría o podría marginarse de ese proceso".

De los conceptos señalados en este capítulo se aprecia con claridad la posición de la Iglesia y la de don Raúl frente a un modelo de desarrollo aplicado a sangre y fuego, sin discusión parlamentaria, sin participación alguna de la ciudadanía y en la creencia que el fin justifica los medios.

La palabra de los obispos no fue escuchada. Se menospreció el aporte que ellos querían hacer fundamentados en el amor, en amor al prójimo, en el que sufre, cualquiera fuere su posición política. Eran nuestros hermanos los que sufrían el experimento neoliberal, era necesario levantar la voz de una Iglesia y de un Cardenal que no estaba dispuesto a callar y no ser consecuente con su doctrina social.

CAPÍTULO XI

LA APLICACIÓN DOGMÁTICA DEL NEOLIBERALISMO

Sergio de Castro y Jorge Cauas, más el primero que el segundo, lograron imponer su visión acerca de cómo implementar la política económica en el gobierno militar. Ante una junta militar ignorante de cómo debería funcionar la economía y dada su oposición a todo aquello que tuviera alguna connotación de un modelo económico sustentado en las teorías marxistas, obviamente que la definición de un modelo de libertad económica cuajaba perfectamente con la mentalidad. Por lo demás, la crisis económica de proporciones descomunales, incubada en el experimento marxista de Salvador Allende, había sido elemento gatillante del golpe de Estado. Además, estaba el estudio de Emilio Sanfuentes y su equipo, el que había sido encargado secretamente por la Armada, a fin de preparar un plan estratégico para la reconstrucción económica ante una posible caída de la Unidad Popular.

Habían quedado en el camino aquellos que tenían un pensamiento más humanista y menos dogmático, por lo que el general Pinochet había entregado toda su confianza y toda iniciativa en el plano económico a los grupos neoliberales más extremistas cuyo origen teórico se encontraba en la universidad norteamericana de Chicago, siendo su mentor el destacado profesor y premio Nobel de economía, Milton Friedman, identificado como el defensor a ultranza de la libertad económica sustentada en una concepción del modelo capitalista al que se le reconoce con el nombre de neoliberalismo, para distinguirlo del liberalismo de Adam Smith. Este nuevo liberalismo, según sus defensores, contempla las necesarias herramientas de política económica que permitan el libre juego de la oferta y la demanda, definiendo para el Estado un rol subsidiario pero con capacidad de manio-

bras que impedirían que los graves desajustes ocurridos en la Gran Depresión volviesen a ocurrir.

El experimento iniciado por Jorge Cauas y Sergio de Castro, denominado por algunos como el “Plan Cauas”, llevado a cabo a partir de abril de 1975, significó la aplicación de diversas medidas de política destinadas a restringir en forma sustantiva el crédito y el gasto fiscal. Como consecuencia de ello la inversión pública disminuye en un 50% respecto al año anterior. Los aranceles bajan desde cerca del 70% a mediados de 1974 a un 33% a mediados de 1976. El impacto de estas medidas tiene efectos devastadores en la industria, la cual ve reducida su producción en un 25%. El producto nacional disminuye en 12%, la mayor caída desde la Gran Depresión, la tasa de cesantía supera el 16%. Toda esta política extrema apuntaba a disminuir la inflación, la que a pesar de las medidas adoptadas sigue siendo extraordinariamente alta, situándose en un IPC de 340% (trescientos cuarenta por ciento) para el año 1975.

El cardenal Silva, al referirse a las medidas adoptadas por el equipo económico, señaló en sus Memorias:

“Sergio de Castro –ex decano de la UC– había instaurado un nuevo estilo, caracterizado por la inflexibilidad y por la energía con que se aplicaban las medidas de corte liberal, sin escuchar a los enormes sectores afectados. La cesantía alcanzaba niveles históricamente desconocidos, las cifras económicas eran elocuentes, pero el ministro descalificaba toda opinión distinta con argumentos de competencia técnica”.

Ante las críticas que recibía Sergio de Castro, en especial cuando reemplazó a Jorge Cauas en el Ministerio de Hacienda, aquel se defendía señalando que debía lidiar con el paso de cuatro décadas estatistas. Todos al mismo saco: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, quienes gobernaron Chile desde 1938 a 1973; todos ellos estatistas, según De Castro, partidarios de una economía de planificación al estilo de Marx, hasta la llegada salvadora de los militares con el equipo de Chicago. De Castro y Cauas

no aceptaban las críticas que surgían de la Iglesia Católica, única institución con capacidad de expresarse, de ser la voz de los sin voz, como consecuencia del férreo control de la prensa, la eliminación de los partidos políticos y de cualquier otra entidad o iniciativa de organización social no autorizada por la dictadura. Sarcásticamente, Sergio de Castro, haciendo recuerdo el año 2007 de la gran preocupación de don Raúl por los niveles de cesantía que alcanzaban cifras históricamente desconocidas, a una tasa de interés por sobre la inflación de un 117%, muchos compatriotas en precarias situaciones de hambre, miseria y exclusión, además de persecución, tortura, cárcel y desaparición de los opositores, declaró el 2007 para un libro editado por Libertad y Desarrollo³, lo siguiente:

“Por supuesto que el rol de un prelado de la Iglesia y el de un ministro de Hacienda no son similares, sea la sociedad libre, socialista o confesional. A mí –dice De Castro– no se me habría ocurrido mandar recados a Punta de Tralca cuando los obispos se reunían para tratar sus temas y, a veces, los de los demás. Ellos conocen su oficio y yo el mío. Lo que tengo claro es que una economía de solidaridad, a las que nos invitó el Papa cuando estuvo en Chile, como todas, presupone la existencia de los recursos necesarios para ir en ayuda de los más desposeídos. No puedo estar más de acuerdo con aquello de que ‘los pobres no pueden esperar’. Si alguien se preocupó por primera vez en serio del problema de la miseria que había en Chile, fue el Gobierno de las Fuerzas Armadas. Pero eso, aunque ayuda, no se logra solamente rezando el rosario. Miguel Kast lo rezaba todos los días, paseándose de arriba abajo por las oficinas de ODEPLAN. Me parecía estúpido; pero su contribución a la superación de la pobreza, importante como la de nadie más en nuestro país, radica en las medidas que concibió y sacó adelante a pesar de muchos buenazos para golpearse el

³ El libro lleva por título “Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno”, de los periodistas Patricia Arancibia Clavel y Francisco Balart Páez. Editorial Biblioteca Americana.

pecho y acordarse de los pobres solo cuando hay elecciones. Los mismos que hacían gárgaras con los pobres habían sido los responsables de haber arrastrado a la miseria a cientos de miles de familias. ¡Claro que costó mucho sacrificio sacar adelante el país! Quebraron los que querían seguir vendiendo helados en la Antártica con subsidio estatal, la cesantía encubierta quedó a la vista y los ingresos de todos los asalariados bajaron. ¿Por qué? ¿Habíamos estropeado acaso un país boyante? ¿Alguno de nuestros críticos recordaba que durante la Unidad Popular el único país latinoamericano que creció menos que Chile fue Haití? Yo estoy convencido que la única fórmula para que no haya miseria es que tengamos trabajo productivo, trabajo de verdad. Y para eso la economía tiene que crecer acelerada y sostenidamente. Y eso se logra poniéndole el hombro en un sistema presidido por reglas claras e impersonales fijadas de manera inteligente, usando la cabeza antes que el sentimentalismo. ¿Cuáles son las únicas naciones en el mundo que ofrecen un nivel de vida digna de seres humanos a quienes de desloman y cumplen la ley y hasta son generosos con las naciones más pobres? No las que se empeñan en repartir solidariamente la pobreza, sino las que crean riqueza. ¿Y quiénes la crean? Los que trabajan como Dios manda. La economía es un método racional –concluye–, no una religión, ni una superstición ni una ideología. Lo que yo hice fue poner esos conocimientos al servicio de una causa que me parecía buena para los chilenos. No tenía por qué andar pidiéndole permiso al Cardenal para hacer mi trabajo”.

Estas expresiones de Sergio de Castro datan de fines del 2007, haciendo recuerdos de la posición de don Raúl cuando defendía a los más desposeídos que habían perdido trabajo y esperanzas con la aplicación de un modelo que se distinguió por lograr metas y fines sin preocuparse de los medios que se utilizasen para ello.

Por cierto que el modelo chileno de economía liberal que fue impuesto por la fuerza de las armas, no habría sido posible llevarlo a cabo en democracia, puesto que el pueblo

organizado no habría aceptado las medidas adoptadas que ocasionaron tanta miseria y tanta desesperanza. El fin justificaba los medios, puesto que al final del túnel se podrían ver los resultados, y así la prosperidad del país y la de los empresarios permitiría resolver definitivamente los problemas de la miseria de los más desposeídos.

La arquitectura del nuevo modelo obligaba a demoler las estructuras proteccionistas construidas por cerca de cuatro décadas. Ni siquiera el empresario de derecha y ex Presidente de la República en esas cuatro décadas, Jorge Alessandri Rodríguez, se salvaba de las opiniones dogmáticas del ministro de Hacienda, quien acusaba de estatista a todo aquel que se opusiese o tuviese una opinión distinta a la suya, incluso los propios colaboradores de Sergio de Castro lo tildaban de “tener un sesgo antiestatista muy enraizado”.

Recuerdo que en una reunión social, en la que estaba presente Álvaro Bardón, defensor apasionado del modelo neoliberal, a pesar de haber sido demócratacristiano en su juventud, hizo en voz alta una consulta a sus amigos de la Escuela de Economía allí presentes. Dijo: ¿quién de ustedes está de acuerdo con que el gobierno tenga un canal de televisión propio? Prácticamente todos los presentes le señalamos que creíamos que sí era conveniente para el país que hubiese un canal de todos los chilenos. Entonces él replicó despectivamente: “Entonces ustedes son una tropa de estatistas”.

Posteriormente, a principios de 1979, conversábamos con don Raúl acerca de la efervescente situación existente en el país, producto de una serie de factores que generaron una inusitada tensión entre la Iglesia y el gobierno. Tanto razones de índole humanista, de defensa de los derechos humanos y de la aplicación dogmática del modelo de desarrollo, claramente denunciadas por don Raúl, generó un clima muy conflictivo entre el Cardenal y los militares.

A finales de 1978 se revelaron los crímenes de los hornos de Lonquén, donde se habían ocultado los cadáveres de decenas de detenidos desaparecidos que por vez primera comenzaron a aparecer. En el año 1979 la justicia había

declarado la amnistía para los responsables de esos crímenes y el gobierno había ordenado sepultar los restos de los macabros hallazgos, sin conocimiento de sus familias.

El Cardenal y la Iglesia levantaban su voz para denunciar estos hechos. El coraje de don Raúl quedó claramente demostrado en esta oportunidad, tal como lo había sido desde los inicios de la dictadura.

La situación económica no era menos grave. El modelo de economía neoliberal estaba causando efectos desastrosos en los trabajadores. Se apreciaba una creciente concentración del poder económico en unos pequeños grupos que pugnaban vorazmente por lograr la supremacía de uno con respecto a los otros. El año 1979 fue también el año en que el general Pinochet censuró buena parte de la homilía que don Raúl debía pronunciar en la iglesia catedral con motivo del tradicional *Te Deum* del 18 de septiembre. Se le dijo al señor Cardenal que el texto del mensaje —que se le pidió mostrar previamente a su elocución en la catedral— no sería aceptado por la Junta, la cual podría retirarse del templo en el caso que él insistiera en leer todo lo que había preparado para la ocasión. Las relaciones no podían estar más tensas.

El Cardenal reaccionó con enojo, pero aceptó eliminar la mayor parte del texto. Leyó al final un disminuido discurso en el que solo quedaron las invocaciones a Dios, por lo que se había desvirtuado absolutamente la palabra que el pastor quería entregar a Chile y sus gobernantes.

En la parte pertinente a la situación económica del país, el mensaje que el señor Cardenal quiso expresar y que no pudo decir fue lo siguiente:

“Los obispos en Puebla hemos afirmado las mismas doctrinas que el Santo Padre ha proclamado y hemos dicho que en América Latina todas las iglesias, todos los episcopados, tienen que tener una opción preferente por los pobres. Esta opción “es urgida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos que existen en América Latina y deben llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir

una sociedad justa y libre. El cambio necesario de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas no será verdadero y pleno si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva respecto al ideal de una vida humana digna y feliz que a su vez dispone a la conversión. No será efectivo –decimos nosotros– si no se oye la voz de Cristo el Señor”.

La alusión crítica al modelo de desarrollo económico aplicada por el gobierno no podía ser más clara. Sin embargo, don Raúl se sentía muy poco apoyado en su crítica, necesitaba el respaldo de especialistas en el área económica, quienes dando argumentos técnicos respaldasen su autorizada voz de pastor. Es por ello que habíamos acordado con don Raúl que para esa misma fecha de su homilía en la catedral, sería muy importante que un grupo de economistas laicos, comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, respaldáramos la posición de la jerarquía a través de un documento público.

Conversé sobre ello con mi amigo el economista Humberto Vega, quien a la fecha estaba a cargo del Programa Economía del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano, institución creada por el señor Cardenal en 1976 y de la cual yo era su secretario de Finanzas, siendo don Raúl su presidente. El directorio de la Academia estuvo compuesto, además del Cardenal y yo, por destacadas personalidades del mundo intelectual y académico del país, entre los que se encontraban el padre Beltrán Villegas, Fernando Monckeborg, el padre Renato Poblete, Edgardo Boeninger, Fernando Castillo, Domingo Santa María, Ricardo Jordán, Duncan Livingston y otras importantes figuras del mundo universitario de los tiempos de la democracia.

De esta forma nos pusimos de acuerdo con Humberto y con don Raúl para editar en septiembre de ese año un documento que, revisado y trabajado en conjunto, pudiera expresar una opinión distinta a la de los economistas de gobierno y de grupos católicos que públicamente aparecían discrepando de don Raúl y la jerarquía.

Así, en septiembre de 1979 se editó, bajo el alero de la Academia de Humanismo Cristiano, un documento titulado

“Ante un deber de conciencia, de fidelidad y de justicia social”, el que aparecía firmado por Humberto Vega y por mí. Don Raúl había tenido una activa participación en su revisión y también en aportar antecedentes que permitieran que el documento reflejara con fidelidad los planteamientos del Magisterio de la Iglesia y también su propio pensamiento. Para ello se trabajó durante tres meses, principalmente en la casa de descanso que el Arzobispado de Santiago tiene en Melocotón, justo al frente de la casa que el general Pinochet se había construido en ese lugar.

El documento que hicimos junto a Humberto Vega y el Cardenal se iniciaba de la siguiente manera:

“Desde fines del año pasado, diversos grupos de católicos han manifestado públicamente sus puntos de vista divergentes con la jerarquía de la Iglesia. Ellos han sostenido su firme convicción de que no hay contradicción entre la doctrina o la moral católica y el proceso de llevar a cabo la nueva institucionalidad por parte del gobierno: tampoco la hay, señalan, en el contenido fundamental de la estrategia de desarrollo social y económico que el gobierno impulsa. Por otra parte, a juicio de estos grupos, las posiciones manifestadas por el Magisterio de la Iglesia constituyen una intromisión en materias que no son de su incumbencia, para las que no tienen competencia y que implican el renacimiento de un nuevo clericalismo que conllevaría el peligro de coartar la libertad de los católicos, estarían produciendo el alejamiento del culto religioso de católicos que respaldan al actual Gobierno provocando conflictos entre la Iglesia y el Estado”.

Más adelante, y en concordancia con lo que habíamos acordado con don Raúl, hicimos una defensa muy evidente al rol de los obispos al denunciar los resultados dolorosos para el pueblo chileno a raíz de la aplicación dogmática de un modelo económico que había traído como consecuencia tanto dolor y sufrimiento. Respaldando las orientaciones de los pastores, expresamos:

“Como creemos que las posiciones enunciadas por estos grupos discrepantes no tienen fundamento doctri-

nal ni pastoral, y sí una clara intención política de aislar a la jerarquía del laicado y de los verdaderos problemas que enfrentan el pueblo chileno, hemos creído necesario señalar nuestra posición sobre las tareas y responsabilidades que debemos asumir como católicos ante la actual realidad nacional y frente a la cual la Iglesia ha cumplido con su derecho a precisar su posición de acuerdo al Evangelio, a la doctrina católica y a las orientaciones pastorales, tan claramente precisadas en múltiples documentos papales, encíclicas y mensajes que constituyen la palabra de la Iglesia y, por lo tanto, el deber de conciencia de tratar de comprenderla, obedecerla y acatarla. Este derecho ha sido ratificado en la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, que continúa con la línea doctrinal del Concilio Vaticano II: "El Magisterio de la Iglesia es el único intérprete auténtico de la Palabra de Dios. Aún más, es la verdadera palabra de Dios y el Magisterio de los Obispos debe aceptarse con el religioso respeto (CONFER. L.G. N° 25 D.V. N° 10). Todo católico, sea este laico o sacerdote, debe aceptar la palabra de los Obispos, la que en definitiva constituye la verdadera Palabra de Dios".

Más adelante, decidimos clarificar el derecho moral que les asiste a los pastores de expresarse en torno a los acontecimientos que ocurrían en Chile, entregando nuestra convicción fundada en la doctrina social y sus postulados. Así lo expresamos:

"No se puede imprudentemente juzgar las enseñanzas de los Obispos; no puede el laicado, ni siquiera los sacerdotes, dudar con ligereza de la prudencia y equidad que detentan por el propio carisma que poseen. Cuando los Obispos expresan su pensamiento cumpliendo con el derecho y deber que les corresponde para enseñar la doctrina social, están cumpliendo con lo que constituye la esencia de sus altas investiduras espirituales".

"La Iglesia ha ido desarrollando, a través de los siglos, su enseñanza social. Ella representa la aplicación y la

extensión de sus principios de moral naturales y revelados a la vida de los hombres en sociedad, en función de las necesidades y de los problemas propios de cada época. Puede seguirse este desarrollo en las obras de los Padres de la Iglesia, en sus doctores, en los teólogos escolásticos hasta en los escritores católicos de nuestro tiempo, que conocen la eflorescencia de la doctrina social” (Radiomensaje del 1 de junio de 1941. C.E.D. p. 473, N° 14).

En otra parte del documento decidimos con Humberto Vega expresar con claridad nuestro punto de vista acerca del abismo humano que se había instaurado en Chile entre pequeñas minorías que ostentaban todo el poder y las grandes mayorías marginadas como consecuencia de la aplicación mediante la fuerza de un modelo económico excluyente. Dijimos en esa oportunidad:

“El problema de la creciente desigualdad económica y social entre los chilenos se origina en la aplicación dogmática y autoritaria de la estrategia económica y social del Gobierno. Esta estrategia ha favorecido un proceso acelerado de concentración de la propiedad, el ingreso y el control de los recursos económicos. Este proceso, al ser acompañado por una reducción de las funciones redistributivas y de protección de los grupos más débiles por parte del Estado, la negación o suspensión de los derechos de los trabajadores y la represión directa o indirecta a sus organizaciones, ha generado un abismo humano entre una minoría privilegiada y una mayoría marginada de los beneficios de la estrategia económica y social. La creciente desigualdad atenta contra la justicia y la fraternidad entre los hombres, esencialmente iguales por naturaleza y destino, tal como lo revela nuestra fe y lo enseña la tradición católica. Esta discriminación en la distribución de los frutos del trabajo humano es agudizada por fenómenos que violentan la tradición moral de la Iglesia como son los de la usura, explotación y degradación humana de los trabajadores que la Iglesia ha condenado desde sus mismos orígenes. Resulta peregrino tratar de eludir esta condenación apelando a la ciencia

económica, que a lo más podrá dar una explicación provisoria de las causas que generan estos fenómenos, pero nunca podrá legitimarlos moralmente”.

Dando una respuesta categórica al derecho de los pastores a dar su juicio moral acerca de la aplicación de modelos técnicos en cualquier orden de materia, escribimos con Humberto Vega lo siguiente:

“De este modo, la aplicación de la ciencia y de la técnica al servicio del hombre, el respeto a la vida humana y sus derechos, constituyen elementos que necesariamente caen bajo el juicio de la moral. Y esto es lo que los Obispos chilenos han manifestado: el juicio moral que a ellos compete frente a la aplicación teocrática y deshumanizada de la ciencia, que ha traído como consecuencia el dolor, la injusticia y el sufrimiento a tantos chilenos”.

“El Magisterio eclesial no pretende entrar en lo científico-técnico, pero no puede renunciar a lo que es su derecho y deber de subrayar el valor moral de la honestidad intelectual que ponga como centro focal al hombre, al hombre entero, en su dimensión corporal, espiritual y religiosa. Por ello la Iglesia, experta en humanidad, escruta los signos de los tiempos a la luz del Evangelio (Cf. *Gaudium et Spes*, 4,1), comparte las aspiraciones del hombre, sufre con él y desea que alcance su pleno desarrollo de una ‘visión global del hombre y de la humanidad’ (Cf. *Populorum Progressio*, 13)”.

Hasta aquí parte del documento que habíamos escrito y acordado hacer público, de común acuerdo con don Raúl, en la misma fecha de la homilía que el Cardenal debía leer en el *Te Deum* del 18 de septiembre de 1979.

Por su parte don Raúl, acusado de gasfiter por sus críticas al modelo que tanto dolor y sufrimiento cansaba al pueblo pobre de Chile, decidió responder a sus críticos expresando:

“Yo no soy técnico, y si uso palabras técnicas no lo hago en cuanto a técnico, sino como cristiano y obispo, deseoso de conocer la realidad en la que estoy situado

para evangelizarla, para comunicarle el designio salvífico del Padre, que Él nos ha dado en la Vida, Muerte y Resurrección de su Hijo, por medio del cual nos ha liberado del pecado y nos ha reconciliado con Él, y, por lo tanto, entre nosotros y con la naturaleza”.

“De esta manera, la Iglesia exige, fomenta y comparte la búsqueda de distintas soluciones tratando de descubrir en ellas, con el carisma que la asiste, aquellas que más se acercan al espíritu evangélico”.

El modelo aplicado dogmáticamente había dejado una secuela de sufrimientos éticamente inaceptables por sus elevados costos sociales y políticos que afectaron a la gran mayoría de la población chilena.

CAPÍTULO XII

DEL TRIUNFALISMO A LA CAÍDA

Los resultados de la política de *shock* aplicada por el equipo económico del gobierno militar, de tan duras consecuencias principalmente por su alto costo social, tuvo, sin embargo, en los años siguientes a 1974 algunos logros que son importantes de destacar. En efecto, el ritmo inflacionario, cercano al 700% en 1973, se redujo a un 340% en 1975, al año siguiente disminuyó a un 170%. A partir de 1977 se mantuvo a niveles del orden del 40%.

Por otra parte la balanza de pagos comenzó a mostrar resultados positivos a partir de 1978, principalmente como consecuencia del alto volumen de ingresos provenientes de créditos externos al sector privado. Por su lado la producción industrial comenzó a recuperar la acentuada baja ocurrida al principio de la implementación de las políticas neoliberales, creciendo a un ritmo del 8% entre 1976 y 1979. Las exportaciones no tradicionales se expanden de manera significativa, puesto que antes de la decisión del gobierno de fijar el tipo de cambio a \$ 39, las exportaciones crecen a un ritmo superior al 22% anual entre 1975 y 1979. De esta forma los ingresos de exportación provenientes de la minería, que en 1970 explicaban el 85% de ellos, en 1979 se habían reducido a menos del 60%.

Hasta 1979 los resultados tan exitosos demostraban que el experimento neoliberal chileno estaba generando un verdadero milagro económico. Existían tanto a nivel nacional como internacional vastos sectores de opinión que elogiaban con entusiasmo los resultados que se estaban obteniendo bajo la conducción de Sergio de Castro, al aplicar con un dogmatismo inusitado el modelo neoliberal. En 1980 la página editorial del *Wall Street Journal*, prestigioso diario económico de Nueva York, alababa en forma poco usual al

modelo económico chileno. Por su parte el influyente *Time* afirmaba, a principios del mismo año 1980, que "Chile es un caso de estudio de un sistema de administración económica sana, señalando que aun cuando muchos economistas y expertos en materias económicas deploran que el modelo se esté implementando bajo una dictadura autoritaria, Chile constituye un ejemplo de lo que se puede obtener cuando se reestructura eficientemente una economía que se encontraba enferma y postrada".

La Junta Militar también celebraba con entusiasmo estos resultados, sin advertir si existía en el modelo algunos síntomas que podrían generar serios tropiezos a futuro y ennegrecer un panorama que se advertía en esos momentos tan auspicioso.

Los resultados que justificaban la euforia fueron los siguientes:

Años	PGB real %	Inflación %	Desempleo %
1975	-12.9	343.3	18.6
1976	3.5	197.9	21.8
1977	9.9	84.2	19.0
1978	8.2	37.2	18.3
1979	8.3	38.9	17.5
1980	7.8	31.2	17.2
1981	5.7	9.5	15.9

El 1 de junio de 1979 el equipo económico, presidido sin contrapeso por Sergio de Castro, decide fijar el tipo de cambio en \$ 39. El general Pinochet respaldó de inmediato esta medida, los militares no podían estar más satisfechos del trabajo realizado por el equipo económico y solo tenía palabras de elogio para su conductor, por lo que cualquier propuesta que este hiciera en materias económicas tenía en esos instantes un alto nivel de credibilidad y confianza, por lo que la Junta aprobó sin reservas la iniciativa de la fijación del tipo de cambio. También en el segundo semestre de 1979 se puso en marcha el Plan Laboral con la propuesta de un cambio sustancial en el sistema previsional de reparto,

el que había dado muestras de un desgaste importante. En "El Ladrillo" se había calificado el sistema de seguridad social existente en el país en ese entonces como injusto, discriminatorio e ineficiente.

La euforia existente, la infalibilidad del equipo económico y el apoyo incondicional que ellos tenían del general Pinochet, absolutamente convencidos y muy seguros de su estrategia, buscaron acelerar el proceso de cambios. Además, tenían la certeza que la fijación del dólar a un valor que se mantendría inalterable, cualquiera fuesen las circunstancias, lograría efectos muy beneficiosos para el desarrollo económico, en especial para contener la rebelde inflación.

Ningún economista del equipo de gobierno, y menos aún Sergio de Castro, prestaban atención a las voces disidentes que alertaban acerca de la existencia de síntomas preocupantes en la economía chilena, los que podrían traer como consecuencia una nueva crisis de hondas repercusiones políticas y sociales.

En especial los economistas Alejandro Foxley, Ricardo Ffrench-Davis, Óscar Muñoz, José Pablo Arellano, René Cortázar, Nicolás Flaño, Patricio Muller, Ernesto Tironi y Jorge Marshall, quienes se agrupaban en CIEPLAN (Centro de Investigación y Estudios de Planificación Nacional), levantaban sus autorizadas opiniones para señalar, con sólidos argumentos, que existían antecedentes y síntomas de debilidades macroeconómicas más que suficientes para pensar que había que ser cuidadosos con la euforia y el optimismo generalizado que existía entre los partidarios del gobierno.

La primera gran observación se sustentaba en que los beneficios alcanzados eran muy relativos al compararlos con los costos que se estaban pagando. Lo anterior estaba muy en la línea de los obispos y de la postura del propio Cardenal. Por lo tanto existían sólidos argumentos de carácter moral que objetaban el modelo como consecuencia de la nula participación social mediante la aplicación dogmática de un modelo en el que el fin justificaba los medios. La segunda gran observación que concentraba la atención de los grupos de

economistas disidentes se refería a aspectos de carácter económico y social entre los que destacaban los siguientes:

1. Los ingresos reales de los trabajadores no mostraban un crecimiento que permitiese asegurar incrementos en la demanda.
2. La gran restricción monetaria y fiscal no había traído como consecuencia tasas de inflación razonables, las que se mantenían todavía demasiadas altas, antes de la fijación del tipo de cambio.
3. El superávit que mostraba el país en relación a las reservas internacionales se debía fundamentalmente al endeudamiento externo con la banca internacional de corto plazo, que en algún momento se debía cancelar con sus respectivos intereses.
4. La balanza comercial a fines de 1979 seguía siendo negativa. Las importaciones superaban a las exportaciones a pesar de los esfuerzos de diversificación que el gobierno había realizado.
5. Más de la mitad del valor total de las exportaciones anuales debía destinarse al pago de la deuda externa, lo que estaba generando una gran vulnerabilidad del país al financiamiento externo.
6. Una muy baja tasa de inversión en el período 74 al 79, siendo de un 11% del producto geográfico, la más baja en la historia económica reciente, al compararla con el período 1960 a 1973, incluido el período de la Unidad Popular.
7. La drástica disminución en la inversión pública como consecuencia de la política de *shock* aplicada con el objetivo de disminuir el gasto fiscal, la que de ninguna manera fue reemplazada por inversión privada.
8. El alto costo del crédito y de la tasa de interés real cobrada por el sistema bancario, conjuntamente con la ausencia de mecanismos de financiamiento de largo plazo en activos reales.

Por otra parte el proceso financiero y de liberación de los mercados de capitales había permitido que se produjera una concentración de patrimonio. Los grupos económicos

que se organizaron en esa época habían fundado su poder de gestión en el acceso al crédito bancario internacional, adquiriendo con esos recursos las numerosas empresas públicas que se estaban privatizando.

Los años siguientes a la euforia, 1980, 1981 y 1982, demostraron que los temores que públicamente señalaban algunos economistas de que en el modelo existían distorsiones y fisuras que podían colapsarlo, no eran infundados. Aun cuando se pueda aceptar que internacionalmente se produjo una crisis, ciertamente que los alcances de ella jamás podrían explicar el colapso de la economía chilena de 1983, con la quiebra de muchos bancos, la intervención estatal de prácticamente todo el sistema financiero, la caída del producto interno bruto en más de un 15%, en dos años, cifra desconocida en cualquier otro país del planeta en esa época.

La fijación del tipo de cambio a \$ 39 por dólar, cuando aún no se encontraba controlada del todo a la inflación, resultó ser una medida desastrosa para el sector exportador, razón por la cual a partir de 1980 las cifras tan positivas mostradas en los años anteriores comenzaron a cambiar de signo. Resulta necesario destacar que en los tiempos de la euforia, cuando el país mostraba en sus principales indicadores cifras tan alentadoras, la tasa de desempleo no cejaba, manteniéndose a niveles francamente preocupantes. Así la tasa de cesantía de acuerdo a cifras de CEPAL (y muy parecidas a las de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile), señalaban a diciembre de 1983 una cesantía de un 36% de la fuerza de trabajo. El modelo se derrumbaba ante cifras no solo preocupantes, sino que inaceptables para cualquier país del mundo, más aún si se consideraba que el equipo económico estaba dirigido por profesionales de alta preparación en la universidades más prestigiosas del mundo.

La euforia de 1978, 1979 y principios de 1980 se convertía en el pesimismo más generalizado que conociese el país desde la Gran Depresión y el descubrimiento del salitre sintético. La confianza ilimitada del régimen militar en el equipo económico presidido por Sergio de Castro, se desmoronaba día a día, con noticias cada vez más desalentadoras que golpearon la economía chilena a partir de 1980. Lógica-

mente que se produce la caída del arquitecto del modelo, siendo reemplazado De Castro por Sergio de la Cuadra, en abril de 1982, quien fue el encargado de romper la paridad cambiaria, punto de alta sensibilidad para Sergio de Castro, quien defendía su política de fijación por decreto a razón de \$ 39 por dólar. En efecto, el 14 de junio de 1982 se anuncia la devaluación del tipo de cambio, fijándose este a razón de \$ 46 por dólar.

Duro golpe para Sergio de Castro, puesto que buena parte de sus expectativas estaban dogmáticamente vinculadas a la fijación y mantención de la paridad cambiaria, cualquiera fuese la situación interna. Curiosa posición la de quien siendo partidario de la libertad económica más absoluta en todo el resto de las variables económicas, con el dólar adoptaba la posición de los países de economía marxista, los que se distinguieron por fijar el tipo de cambio, sin importar el funcionamiento del resto de las variables económicas. No importaba que el país no tuviera dólares; tampoco importaba que la inflación interna fuese mayor que la externa en los tres años que duró el experimento paritario, no era relevante que resultara cada día más barato importar productos de otros países como consecuencia de un dólar subvalorado, haciendo cada vez menos atractiva la industria nacional, ni que las exportaciones se paralizaran por no ser convenientes ante el retorno a un dólar tan bajo. Ninguna de esas variables importaba, solo la defensa a ultranza del tipo de cambio. Ello constituía, para el arquitecto del modelo económico chileno, una verdad absoluta a pesar que todos los sectores económicos y las agrupaciones empresariales veían con consternación cómo las tesis, que tan alto costo social había significado para la gran masa de trabajadores, se desmoronaban estrepitosamente.

No duró mucho Sergio de la Cuadra como ministro de Hacienda, los problemas se agudizaban día a día y no se percibía conducción alguna en el área económica. El desconcierto era la característica generalizada, por lo que el general Pinochet decide el 30 agosto de 1982 designar ministro de Hacienda a Rolf Lüders, quien fue el encargado de anunciar, el 13 de enero de 1983, que el experimento de los "Chicago boys" había llevado al país a una crisis económica devastado-

ra. Roberto Zahler (destacado economista, quien fuera posteriormente presidente del Banco Central de Chile), en un seminario internacional organizado por el Instituto Interamericano de Mercados de Capital, en 1985, señaló lo siguiente:

“En los siete años comprendidos entre mediados de 1975 y mediados de 1982, las autoridades económicas del régimen militar intentaron cambiar de raíz dos elementos fundamentales, y en cierta medida, tradicionales, de la estructura del sistema económico chileno. Por una parte, se redujo y reorientó la acción económica del Estado, privatizándose un importante número de bancos y empresas no financieras (hasta ese entonces bajo control del sector público) y el sistema de seguridad social. Ello respondía al imperativo ideológico que asignaba al sector privado un rol prioritario en cuanto agente del desarrollo económico”.

“A su vez, y en forma más o menos simultánea, se implementó un conjunto de reformas tendientes a la liberalización de precios, a reducir la intervención estatal en el funcionamiento de los mercados y a integrar a la economía chilena con la internacional”.

“Aquí destacan la eliminación de subsidios y el levantamiento de controles de precios, la reducción de restricciones oficiales, cuantitativas y cualitativas, en la generalidad de los mercados, la unificación del tipo de cambio, la uniformidad y rebaja arancelaria, la reforma tributaria y las reformas al sistema financiero. Estas políticas, orientadas a que en Chile predominara, con un mínimo de excepciones, una economía de mercado, tenían su sustrato ideológico-técnico en una confianza irrestricta en el funcionamiento del mercado libre y autorregulado como el mecanismo asignador de recursos por excelencia y en la correspondiente aprehensión y recelo respecto del control administrativo y del manejo intervencionista de la economía”.

Y a continuación Roberto Zahler agregaba:

“Los años extremos del período coinciden en algunos aspectos interesantes de mencionar. Después de haber estado controlada por años, y en general a niveles rea-

les negativos, en 1975 se libera la tasa de interés bancaria, fenómeno que termina en 1982 con la nueva política de 'sugerencia' de tasas de interés. Por otra parte cabe destacar que en 1975, año en que se inician decididamente los programas de liberalización y estabilización de precios, la economía sufrió una profunda crisis, cayendo el PGB en un 14.3%".

Las cifras de la decepción que provocaron la caída de Sergio de Castro fueron las siguientes:

Año	PGB real %	Desempleo %	Inflación %
1982	-14.3	32.6	20.7
1983	-0.8	36.0	23.1

El 27 de septiembre de 1982 el cardenal Raúl Silva cumplió 75 años, edad en la que debía entregar su renuncia al papa Juan Pablo II. El propio don Raúl había contribuido a que se promulgara, al final del Concilio Vaticano II, la norma que establecía que todo obispo debía entregar a Su Santidad el Papa su renuncia en el año en que cumplierse los 75 años. En virtud de esa disposición, ahora el propio cardenal Silva debía presentar la suya como arzobispo de Santiago. Habían transcurrido 21 años a cargo de la diócesis hasta ese momento, y en su sangre corría aún la savia del obispo joven ilusionado con el rol que podía seguir jugando en su patria a la que tanto quería y a la que tanto deseaba restituírle libertad, justicia y paz. Don Raúl había decidido entregarla en una fecha muy cercana, anterior a su cumpleaños, y así decide viajar a Roma y hacer entrega personal de ella al Papa. La carta estaba fechada en Roma el 20 de septiembre de 1982. Para esa ocasión tan solemne, le pregunté a don Raúl si podía acompañarlo junto a mi esposa Sylvia, a lo que él responde afirmativamente y con mucho entusiasmo. Él tenía que pasar primero por Lima a una reunión de obispos organizada por CELAM, así que viajamos en fechas distintas, acordando reunirnos en Roma en la casa que regentan los salesianos ubicada en las cercanías de las Catacumbas de San Calixto en la Vía Apia. Tres meses antes de su cumpleaños se había anunciado el término de la paridad cambiaría y

los acontecimientos económicos ensombrecían el panorama nacional, previéndose una catástrofe que golpearía con inusitada crueldad a los más pobres y con niveles de cesantía pocas veces vistos en la historia económica del mundo.

Don Raúl sufría por lo que estaba pasando en Chile y lamentaba la situación de incertidumbre y decepción generalizada que estos hechos estaban generando en todos los sectores de su patria. A pesar del cuestionamiento ético al modelo neoliberal implementando por el régimen militar y Sergio de Castro con sus "Chicago boys" –permanentemente denunciado por don Raúl– y por las declaraciones de los obispos, en estos momentos de decepción y fracaso optó por guardar silencio. Él hubiese preferido haberse equivocado en sus reiteradas denuncias a la usura y su crítica a las políticas que se estaban llevando a cabo con tanto dolor y sacrificio de los más pobres. Los hechos demostraban una caída estrepitosa de ese modelo. Todo estaba dicho.

El resultado de esta política de absoluta liberalización de la tasa de interés, sin intervención alguna de la autoridad, situación tan distinta a la que utilizan todos los bancos centrales del mundo, a fin de promover el desarrollo y mantener equilibrios macroeconómicos, dio como resultado los siguientes guarismos de tasas de interés real cobrado por los bancos en los 8 años comprendidos entre el 1 de enero de 1975 (cuatro meses antes del plan Cauas) y el 31 de diciembre de 1982 (13 días antes del anuncio de Rolf Lüders, declarando el fin de la libertad de las tasas de interés):

Año	Tasa nominal cobrada	Tasa real Cobrada
1975	505.6	114.76
1976	350.7	51.26
1977	156.4	39.15
1978	85.3	35.09
1979	62.0	16.60
1980	46.9	11.90
1981	51.9	38.67
1982	63.1	35.11

Fuente: Boletines mensuales del Banco Central.

El promedio anual para el período 1975 a 1982 fue de una tasa de interés cobrado de UF+42.82% para cada uno de los 8 años analizados.

Por cierto que estas altas de interés, desconocidas en la historia económica del país, significó que las empresas endeudadas no pudieran pagar sus créditos. Por otra parte aquellos privilegiados que habían logrado transformar sus acreencias de moneda nacional a dólares debido a su menor costo real, cuando se fijó el tipo de cambio a \$ 39, pudieron constatar cómo sus deudas se multiplicaban por un precio del dólar que al momento del rompimiento de la paridad subía un 20%, sin que nadie pudiese asegurar que no habrían alzas sucesivas posteriores, como efectivamente ocurrió.

Por otra parte la autoridad económica, en los momentos que el dólar se cotizaba a un precio subsidiado de \$ 39, permitió libremente la adquisición de la moneda norteamericana a cualquier particular con un límite de hasta US\$10.000 por mes. Muchos particulares obtuvieron utilidades importantes como consecuencia que al decretar la autoridad un precio flotante para el dólar, este solo se movió al alza, por lo que muy pronto la divisa se cotizaba a más de \$ 80, o sea, más de un 10% de aumento de valor con respecto al precio de paridad en menos de seis meses.

Mucho se puede escribir acerca de la caída del modelo implementado por Cauas y por De Castro. El economista norteamericano Arnold Harberger, amigo personal de los "Chicago boys", y muy especialmente de Sergio de Castro, al comentar el *paper* de Roberto Zahler al que se ha hecho referencia, en un simposio organizado por el Instituto Interamericano de Mercados de Capital, al que yo también fui invitado, señaló textualmente:

"La segunda gran razón por la cual la política chilena condujo a sus propios problemas después, fue una cosa bien enfatizada en el *paper* de Roberto Zahler. Eso fue un hecho debido a que Chile no reguló adecuadamente sus bancos, la reglamentación y supervigilancia bancaria simplemente saca una nota pésima. En primer lugar, diría que no fue una política el no vigilar la banca. La Superintendencia existió como institu-

ción. Había un Superintendente, existían los funcionarios de la Superintendencia que tenían legalmente el deber de detectar situaciones en que un banco corría demasiados riesgos, que un banco andaba con papel dudoso o malo en su portafolio, en su cartera; pero la Superintendencia no hizo eso, y parte de la razón puede ser los cambios institucionales que estaban pasando en Chile; es decir, que como toda burocracia vieja, había modalidades dentro de la misma Superintendencia y obviamente, no eran las adecuadas para una situación que había cambiado tanto, pero enfatizo que no había una política gubernamental que dijera: 'Superintendencia, deja de supervigilar'".

Más adelante el profesor Harberger agregaba:

"Yo culpo al gobierno por no haber reconocido que no solo la Superintendencia tiene el deber de supervigilar. El gobierno también tiene el deber de supervigilar a todos sus organismos, incluyendo la Superintendencia de Bancos y si una entidad falla en el cumplimiento de su deber, fundamentalmente es el gobierno, como tal, quien tiene la responsabilidad".

"También reconozco esa responsabilidad por parte de los economistas profesionales chilenos y los otros interesados en ese país y entre todos, al que más culpo es a mí, porque llevo como 30 años estudiando y mirando, palpando la economía chilena. Estuve presente en los años 75 y 76 y vi las primeras alzas del tipo de tasas de interés real en esos años y sin embargo, estaba como el resto, pensando que era una cosa que no podía durar, que si duraba dos meses ya iba a ser un milagro y así, todos estábamos pensando que esto iba a desaparecer, sin ver si esa tasa tan alta podía ser una señal para indagar e investigar. Si hubiéramos sacado ese mensaje e ir averiguando, les aseguro que probablemente el 80% del desenlace hubiera sido evitado porque se hubiera tropezado, con suficiente anticipación, con este fenómeno de malos créditos y a esa altura del 75-76, haber cortado los créditos malos hubiera sido una operación relativamente fácil".

El desenlace fue un desastre para Chile y su desarrollo, muchos bancos fueron cerrados por la autoridad y los otros intervenidos. El sistema financiero chileno se había desplomado con su secuela de cesantía, caída del producto, quiebras generalizadas y un empobrecimiento general en momentos que las cifras al 31 de diciembre de 1983 señalaron que el producto nacional, entre los años 82-83, había caído en más de un 15%. Nuevamente Chile, 50 años más tarde de la Gran Depresión, cuando el producto cayó más de un 50%, ahora vuelve a caer sin tener parangón en otras economías del orbe en ese año.

Rolf Lüders, al comentar este fatal desenlace, expresó que el 30% de tan fatal desenlace había que imputársela a la crisis internacional y que el 70% restante se debía al manejo de una política económica errada, refiriéndose obviamente al arquitecto de ella: Sergio de Castro.

La historia se escribe con los hechos que la construyen. Se podrán adornar, mitificar, enfatizar lo positivo y ocultar lo negativo, pero al final los hechos son más porfiados y no se pueden ocultar.

Poco tiempo después, el gobierno tuvo que aceptar y declarar públicamente que su modelo de tasas de interés libre y su política cambiaria de fijación del valor del dólar, habían fracasado rotundamente. Chile había pagado el precio de la imposición por decreto de un modelo de economía liberal aplicado a sangre y fuego, sin mayores regulaciones, imponiendo a los trabajadores y al pueblo de Chile grandes dolores, frustraciones y desesperanzas.

Las políticas que se adoptarían más tarde, rectificando los graves errores cometidos, permitieron al país, a partir de 1984, lograr avances significativos que son reconocidos hasta el día de hoy.

El cardenal Silva Henríquez, al momento de producirse la grave crisis de 1983, se encontraba *ad portas* de hacer entrega del mando arzobispal a monseñor Juan Francisco Fresno.

CAPÍTULO XIII

EL ALMA DE CHILE

A fines de abril de 1983 el cardenal Silva recibe la comunicación oficial de la Santa Sede de que su sucesor había sido nombrado. Era el arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno. En vista que días más tarde la Iglesia de Santiago celebraría el 1 de mayo, el día de San José Obrero, don Raúl decidió aprovechar esa ocasión para anunciar públicamente su retiro definitivo. A partir de ese momento las súplicas de don Raúl, en un Chile convulsionado por la grave crisis económica y política, se centraba en que el mejor regalo que le podían hacer en su despedida sería ver la construcción de la paz y el amor a la justicia entre los hombres y mujeres de su patria. Don Raúl definiría esos días como de gran tristeza, la tristeza de un pastor valiente que puso siempre a Jesús y su mensaje como acción de vida y que sentía que esa acción aún no había penetrado en los corazones de los chilenos. Recordando esos momentos don Raúl diría años más tarde

“Quizás sin saberlo, estaba intuyendo algo próximo, quizás presentía que, después de todo, ese final feliz no estaba tan lejos. Sé ahora, positivamente, que la sola ilusión de que esos caminos serían posibles fue lo que me ayudó a sobrellevar la inevitable tristeza de esos días”.

El gobierno militar no ocultó su alegría por el nombramiento de Juan Francisco Fresno, declarando públicamente su alivio por la designación y la partida del cardenal Silva. El buen pastor que se había entregado por entero a la defensa de los más pobres, el que había acercado a la Iglesia al pueblo, el que se había jugado por las transformaciones de ella en el Concilio Vaticano Segundo, el que había entregado los fondos de la Iglesia de Santiago a los

campesinos, respaldando así a una reforma agraria imprescindible, el que había elevado su voz fraterna en Puebla y Medellín, el pastor que defendió los derechos de los trabajadores, el que denunció las arbitrariedades que se cometían durante el gobierno de la Unidad Popular, el que enfrentó con coraje y valentía a una dictadura cruel e implacable, el que se había autoproclamado ser voz de los sin voz cuando todos callaban por obligación, o por temor, o por defender intereses personales, el pastor que había creado la Vicaría de la Solidaridad para defender a los perseguidos por la dictadura, el Cardenal del pueblo que estuvo presente con su palabra y su acción solidaria ante el dolor del prójimo, el que estableció una estructura organizativa de la Iglesia para atender con eficacia y eficiencia a su grey y acercarla a ella, el que creó innumerables instituciones destinadas a mitigar el dolor y generar esperanzas, el Cardenal que no sucumbió ante las presiones que recibía a diario, viniesen de donde viniesen, para callar la verdad o ocultarla, el Cardenal amigo, el Cardenal del pueblo, entregaba el mando arzobispal.

Habían transcurrido 22 años desde que llegara al Arzobispado de Santiago en tiempo, de Jorge Alessandri Rodríguez. Fueron 22 años de grandes convulsiones políticas y de grandes cambios en la Iglesia y en Chile. Fueron tiempos complejos y difíciles en los que tuvo que ejercer su labor pastoral levantando una y otra vez su voz para suplicar a los chilenos que buscaran la paz, la justicia y el amor.

El Cardenal se retiró definitivamente de todo por lo que había luchado con tanto tesón, dedicación y amor a su Iglesia y a su pueblo. Con dolor se despidió de su cargo, pero no se despidió del gran amor de su vida: de Jesús y a través de Él, de su prójimo, de los que sufrían en su patria. Y allí, ahora en la tranquilidad de aquel que ya no tiene responsabilidades directivas, estuvo siempre dispuesto a escuchar, conversar, ayudar y apoyar en silencio a quien se lo pidiera y en especial a los niños de su querida Aldea de Punta de Tralca, a los jóvenes que necesitaban de su consejo y confesión, en fin, a todos aquellos que requerían de su sabia y amorosa palabra y consejo.

Su corazón palpitó día a día con los sufrimientos de su Iglesia y de pueblo. No dejó ningún instante de preocuparse por ellos y rezar, rezar con todo su corazón y toda su alma para que en Chile impere la paz como fruto de la justicia y la verdad.

Observó con gratitud como el cardenal Fresno estaba insistiendo frente al gobierno militar en los mismos puntos por los cuales tanto se le había atacado: la necesidad de la reconciliación, la urgencia del reencuentro nacional, el rápido retorno a las libertades públicas consustanciales de la nación, la expansión del respeto y el derecho para todos.

Cada vez que se solicitaba su presencia en algún acto que le parecía importante asistir, cuidándose de que ello no interfiriera en el trabajo de su sucesor, lo hacía con gusto y con humildad.

Así fue como en el mes de marzo de 1986, CIEPLAN (Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica), organismo que presidía Alejandro Foxley, quien posteriormente fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Patricio Aylwin, el primer gobierno democráticamente elegido después del término de la dictadura, organizó en conjunto con el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, un curso para estudiantes universitarios acerca de las bases para una democracia estable en Chile.

Orador principal de ese acto fue el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien en su hermosa y extensa conferencia que el mismo titulara "El Alma de Chile", se refirió entre otros temas al de la justicia distributiva. Por la gran importancia de esa reflexión profunda, expresada a tres años de haber entregado el mando arzobispal, he estimado importante incorporar parte de lo expresado en esa oportunidad:

"El Alma de Chile se ha nutrido, en efecto, desde sus inicios, en la savia vigorizadora de la fe. No una fe cualquiera, sino específicamente la fe bíblica que conforma toda la gran tradición judeocristiana".

"Esa fe tiene, como función primordial, denunciar la falsía de todos los ídolos".

“Numerosos son los ídolos que han querido imponérsenos en el curso de nuestra historia. Ya los primeros conquistadores se sintieron tentados por el vértigo del oro, del poder y de la gloria sin medida, ídolos que exigían el sacrificio cruento de incontables vidas humanas. Pero la fe no los dejó sucumbir a esa tentación. Mientras en otras partes del mundo los naturales eran considerados seres sin alma y degradados al nivel de objeto de uso y comercialización, entre nosotros la fe proyectó su luz transfiguradora, presentando a los nativos, cualquiera fuese su grado de instrucción o su docilidad a la conquista, en su realidad de hijos de Dios, dotados de un origen y destino trascendentes, redimidos por la sangre de Cristo, llamados a la dignidad de la vida en gracia y al misterio de comunión con Dios y sus hermanos, los blancos europeos. Nuestros precursores crecieron en un espacio cultural y ético en que la riqueza, el prestigio y el señorío no podían lícitamente comprarse al precio de sojuzgar un ser humano inmortal. Quienes osaron hacerlo, o lo intentaron, sintieron caer sobre sí el peso de todo el andamiaje jurídico de la Corona de España y la sabiduría teológica del sacerdocio hispanoamericano. Delincuentes ante el Rey, pecadores ante Dios: así fueron considerados aquellos que, negando su fe, la depositaron en los ídolos y soñaron erigir su grandeza sobre el envilecimiento de sus hermanos. Muchas veces fue su propia conciencia, adiestrada en los principios eternos de la desigualdad del hombre como hechura de Dios, la que torturó y destrozó sus ambiciones de grandeza, forzándolos a restituir, en vida o en muerte, todo lo injustamente arrebatado a los aborígenes en guerra de conquista”.

“Fue esta fe cristiana la que marcó con su impronta la epopeya de la colonización americana, temperando sus objetivos económicos, políticos o estratégicos con el hálito misionero del anuncio del Evangelio y el rescate para Dios del alma indígena”.

“En este y en el subsiguiente período, la Iglesia concentró su vigilancia y su amor en la defensa del más

débil. Acompañó al conquistador secundándolo en sus legítimas aspiraciones y ofreciéndole su brazo para enseñar y civilizar; pero su preocupación preferente fue para el conquistado. A unos y a otros les fue ofrecida la fe para arrancarlos de sus ídolos”.

“Esos ídolos seguirán insinuándose en el correr de nuestra historia, siempre con su pretensión de erigirse en Absoluto. A veces tomarían la forma de ideologías políticas: otras, de sistemas económicos o bien de nuevos códigos de moral. Y ahí estuvo la fe para decirnos que solo hay un Absoluto: Dios, y el Hombre en cuanto hijo de Dios”.

“Fue así también como, hace 15 años, y en nombre de esa fe que juramos guardar, los Obispos de Chile debimos advertir, ante la posibilidad de que se construyera en nuestra patria un socialismo activamente ateo, que “cada vez que el hombre ha intentado construir un paraíso en la tierra olvidando a Dios o desfigurado su imagen verdadera, termina fatalmente convirtiéndose en esclavo de nuevos y falsos dioses, como la técnica, la economía o el Estado”⁴. Y constatábamos que “el socialismo de inspiración marxista ha conducido hasta ahora, efectivamente, al reemplazo del Dios verdadero por un Estado endiosado, por un Estado omnipotente que no reconoce otra ley moral que la de sus propias conveniencias políticas y cuyo poder despótico ha pisoteado y ensangrentado la historia de muchos pueblos, violando derechos fundamentales de la persona, de la sociedad y de las iglesias” (Evangelio. Política y Socialismo, número 36)”.

En nombre de esa fe, cuyo depósito nos ha sido confiado, clamamos con urgencia y angustia para que no esa ni ninguna otra ideología se convierta en ídolo al que hubiera de sacrificarse todo, incluso el alma de un pueblo. Por eso, con la misma urgencia y angustia con que, fieles a la invariable doctrina de los Sumos Pontífices, condenamos el socialismo de inspiración marxis-

⁴ Se refiere a la declaración de los Obispos de Chile, el año 1971, a los inicios del gobierno socialista del presidente Salvador Allende G.

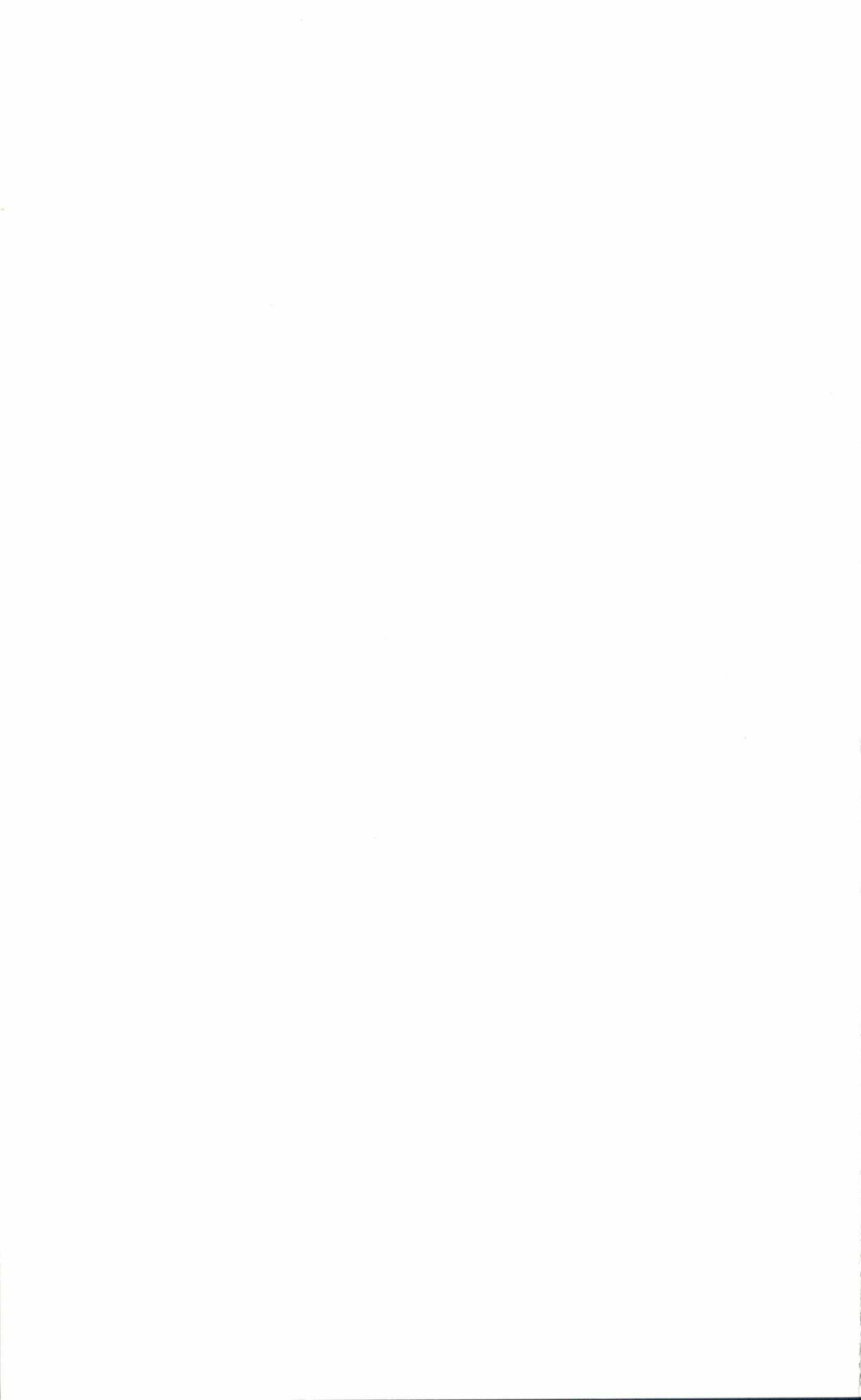
ta, hemos demostrado también la incompatibilidad de la fe cristiana con la ideología del liberalismo sin freno, que considera el lucro como motor esencial del progreso económico; la concurrencia, como la ley suprema de la economía; la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. También esa ideología –ha dicho Pablo VI– el imperialismo internacional del dinero. La fe cristiana nos urge a reprobarla y recordar solemnemente, una vez más, que la economía está al servicio del hombre (*Populorum Progreso*, número 20; *Octogesima Adveniens*, número 26)”.

“Sí, solo hay un Absoluto: Dios, y el hombre en cuanto hijo de Dios. Y la fe bíblica ha venido surcando toda nuestra historia patria, para impedir que nos detengamos en un culto degradante a dioses que no son Dios. Poder, eficacia, consumo, riqueza y hasta el mismo desarrollo económico no son valores dignos del hombre cuando su consecución se logra sacrificando al hombre. Y la gran tarea de la Iglesia, su misión por excelencia, es reivindicar la soberanía de Dios y la inviolabilidad del Hombre por ser hijo de Dios, como el único Absoluto de la Historia”.

“En esa misión coloca frecuentemente la Iglesia en una cierta tensión o polaridad con respecto a quienes detentan el poder. No se trata, por cierto, de una oposición, sino de una independencia crítica que le permite a la Iglesia, ejercitando su rol de conciencia, discernir en qué grado se respeta la dignidad del hombre y los derechos que le son consustanciales. De ahí también que por una espontánea gravitación y conservando su condición de madre de todos, tenga y deba tener la Iglesia una positiva predilección por quien circunstancialmente aparece como el más pobre y el menos defendido. No solo prueba así su fidelidad a Cristo, sino entrega a los gobernantes su más leal y original aporte”.

“La fe así entendida se convierte, también, por la esperanza, en el motor de la historia. La historia solo se detiene e inmoviliza para los pueblos que han abandonado su fe y, con ella, sus motivos de esperar”.

¡Qué reflexiones más hermosas y más profundas! Recuerdo que al término de sus palabras los aplausos no terminaban después de unos cinco minutos, todos de pie aclamando a este hombre santo que tanto había entregado, sin medir riesgos de ninguna naturaleza, a su Iglesia y a su pueblo, el mismo pueblo que en todas sus apariciones públicas le coreaba con ardor: "*Raúl, amigo, el pueblo está contigo*". Y si la voz del pueblo es la voz de Dios, Dios estuvo y está con don Raúl.



EPÍLOGO

Muchas veces se ha querido identificar al señor Cardenal con determinadas posiciones políticas o ideológicas. Se ha pretendido encasillarlo como “el Cardenal rojo” o diciendo “este cura que se mete en política”.

Los que así hablaron de él evidentemente no lo conocieron de verdad, no llegaron a comprender lo que su corazón sentía ni la profundidad de su acción pastoral.

Su lema, abrazado desde antes de su designación como obispo, era muy elocuente: “La caridad de Cristo nos urge”, o dicho de otra forma: el amor de Cristo nos urge. Nos urge a ayudar al desvalido, al desamparado, al campesino sin tierra, ni previsión ni futuro, al niño abandonado, al joven que necesita formación y al trabajador al que no se le respetan sus derechos, a los sin casa, a los pequeños empresarios agrícolas o urbanos que necesitan de apoyo financiero para poder surgir y tener una vida más digna, a los torturados, a los que perdían su libertad por pensar distinto, a los desaparecidos por la acción de un gobierno que no respetaba los derechos más elementales de la persona. Todo esto lo vio el señor Cardenal en su patria, y no pasó de largo. Su corazón se compadecía con el que sufría, se urgía precisamente por amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su espíritu. Y ese amor necesariamente tenía que proyectarse en el prójimo, en todos los chilenos de su patria amada. Para eso estaba entregando su amor a Dios. Su oración de todos los días al Padre de los Cielos se centraba en poner su alma, su corazón, su fuerza y su espíritu al servicio del hombre, cualquiera fuere su posición social o política. Su oración y su prédica imploraba con vehemencia: “No podemos pues invocar a Dios, Padre de todos, si renunciamos a conducirnos

fraternalmente hacia todos los hombres creados a imagen de Dios". En otra oportunidad, con serenidad de rostro y de alma, nos dijo con lágrimas en sus ojos: "Vuestro pastor solo quiere servir a todos, y muy especialmente a los pobres, a los humildes, a los que sufren. Si logra enjugar una lágrima, mitigar un dolor, aunque esto sea a costa de grandes incomprendiones, se sentirá feliz".

Nunca el señor Cardenal se desvió un milímetro de su compromiso con la Iglesia, con el Evangelio y con Jesús. Cuando los Cristianos por el Socialismo lo invitaron a patrocinar el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo, en el año 1971, responde a la invitación que le hiciera el padre jesuita Gonzalo Arroyo de la siguiente manera:

"He estudiado prolijamente el documento de trabajo llegando a la convicción de que ustedes harán una reunión política, con el deseo de lanzar a la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del marxismo y de la revolución marxista en América Latina. La única solución que ustedes ven para liberar al hombre es -a juicio de ustedes- el marxismo. Como usted puede comprenderlo, no me parece en absoluto adecuado patrocinar un encuentro de sacerdotes que están en una línea que a mi juicio no es la línea de la Iglesia y que afirman cosas y tienen actuaciones totalmente reñidas con expresas declaraciones del Episcopado Nacional".

"Perdóneme, que no pueda acceder a su petición y le ruego borrar definitivamente mi nombre de los posibles patrocinadores de este encuentro".

"Antes de terminar, quiero hacerle una consideración personal: usted querido padre, es miembro de la Compañía de Jesús, Instituto llamado a defender la Iglesia Católica y a extender en el mundo entero la influencia benéfica de esta institución fundada por Jesucristo. Después de meditar sobre cada uno de los puntos de esta carta, sobre su actitud de promoción de este encuentro de cristianos para el socialismo, no puedo negarle que me siento un tanto escandalizado. Quiero

decírselo con toda franqueza. Me parece que su acción es destructora de la Iglesia. Lo que más me llama la atención no es tanto que usted tenga esas ideas, porque todos nosotros podemos equivocarnos, pero un Instituto como el suyo, que tiene una cantidad de hombres de gran formación, y de conocimiento profundo del pensamiento cristiano, me parece que no debería permitir una acción pública de trascendencia innegable para la Iglesia Católica, sin que mediara un estudio profundo y una aprobación de esta acción y de las doctrinas en que se funda. Si su Instituto no es capaz de guiar la acción de sus miembros en pro de la Iglesia, creo que ha traicionado los fundamentos más profundos de su propia Institución”.

“Perdóneme, mi querido amigo, la franqueza. Usted conoce mi carácter y mi manera de obrar. No me mueve ningún interés mezquino al hacerle estas reflexiones”.

“Disponga de su afmo., y seguro servidor en Cristo”.

RAÚL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ
Arzobispo de Santiago

Esta carta, para muchos desconocida, resulta ser en definitiva una respuesta contundente a todos aquellos que lo tildaron de político o despectivamente llamándole “el Cardenal rojo”. Para don Raúl, el magisterio de la Iglesia, su fidelidad a ella y al mensaje de Jesús en la palabra y en la acción, constituyeron la fuente inagotable de su coraje, de su fe, de su valentía y de su amor.

Este libro se terminó de escribir en Semana Santa 2009, en España. El autor desea expresar sus sinceros agradecimientos al querido padre salesiano español don Antonio Hidalgo de los Santos, quien vivió en Chile durante ocho años, cuatro de los cuales los dedicó a acompañar al cardenal Silva Henríquez. Actualmente reside en su Sevilla natal, donde sigue entregando su amor a los ancianos salesianos de la Comunidad don Pedro Ricaldone y también como párroco de la iglesia de los gitanos de Sevilla, donde

pudimos admirar los trabajos que hacían sus feligreses, preparando la salida de los hermosos “pasos” para la noche del jueves santo.

Sus inteligentes comentarios y su persistente insistencia a que continúe en mi empeño en profundizar y divulgar el legado del cardenal Silva, constituyen un estimulante acicate, imposible de desestimar.

REINALDO SAPAG CHAIN

